

PGR

PROCURADURÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

COMITÉ DE TRANSPARENCIA

DÉCIMA OCTAVA

SESIÓN ORDINARIA 2018

**Sesión: DÉCIMA OCTAVA
ORDINARIA**

Fecha: 15 DE MAYO DE 2018

Hora: 11:00 horas.

Lugar: Ciudad de México
Ignacio L. Vallarta No. 13,
Col. Tabacalera, Cuauhtémoc
Sala de Juntas, 8vo Piso

ACTA DE SESIÓN

INTEGRANTES

1. **Lcda. Adi Loza Barrera.**
Titular de la Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental y Presidenta del Comité de Transparencia.
En términos de lo dispuesto en el Acuerdo A/072/2016 por el que se crea la Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental de la Procuraduría General de la República y se conforma el Comité de Transparencia, en concordancia con el artículo 64, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. (DOF., 9.V.2016).
2. **Lcda. Adriana Fabiola Rodríguez León.**
Suplente del Director General de Recursos Materiales y Servicios Generales, Responsable del Área Coordinadora de Archivos en la Dependencia.
En términos de lo dispuesto en los artículos 18, fracción VII y 66, fracción VIII, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en relación con el artículo 64, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
3. **Lic. Luis Grijalva Torrero.**
Titular del Órgano Interno de Control en la Procuraduría General de la República. En términos de lo dispuesto por los artículos 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016; y 80 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en relación con el artículo 64, fracción III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (DOF., 9.V.2016).

A las once horas con dos minutos del martes quince de mayo de dos mil dieciocho, en la sala de juntas del octavo piso del edificio ubicado en Calle Ignacio L. Vallarta, No. 13, Col. Tabacalera, Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México, la Secretaria Técnica del Comité de Transparencia verificó la asistencia de todos los integrantes de ese Órgano Colegiado, habiendo quórum legal suficiente para sesionar.

Del mismo modo, se encuentran presentes los enlaces de transparencia de las diversas unidades administrativas de los cuales queda evidencia con el registro autógrafo de su firma, en la lista de asistencia de la actual sesión.

DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS

I. Lectura y en su caso aprobación del Orden del Día.

II. Aprobación de Acta de la sesión inmediata anterior.

III. Análisis y resolución de las solicitudes de información:

A. Solicitudes de acceso a la información en las que se analiza la inexistencia de la información solicitada:

- A.1. Folio 0001700109618
- A.2. Folio 0001700116018
- A.3. Folio 1700300001118 – Centro Federal de Protección a Personas
- A.4. Folio 1700300001218 – Centro Federal de Protección a Personas
- A.5. Folio 1700300001318 – Centro Federal de Protección a Personas
- A.6. Folio 1700300001418 – Centro Federal de Protección a Personas
- A.7. Folio 1700300001518 – Centro Federal de Protección a Personas
- A.8. Folio 1700300001618 – Centro Federal de Protección a Personas
- A.9. Folio 1700300001718 – Centro Federal de Protección a Personas
- A.10. Folio 1700300001818 – Centro Federal de Protección a Personas
- A.11. Folio 1700300001918 – Centro Federal de Protección a Personas
- A.12. Folio 1700300002318 – Centro Federal de Protección a Personas
- A.13. Folio 1700300002418 – Centro Federal de Protección a Personas
- A.14. Folio 1700300002518 – Centro Federal de Protección a Personas
- A.15. Folio 1700300002618 – Centro Federal de Protección a Personas
- A.16. Folio 1700300002718 – Centro Federal de Protección a Personas
- A.17. Folio 1700300002818 – Centro Federal de Protección a Personas
- A.18. Folio 1700300002918 – Centro Federal de Protección a Personas
- A.19. Folio 1700300003018 – Centro Federal de Protección a Personas

B. Solicitudes de acceso a la información en las que se analiza la reserva y/o confidencialidad:

- B.1. Folio 0001700108918
- B.2. Folio 0001700123218
- B.3. Folio 0001700123318



- B.4. Folio 0001700123818
- B.5. Folio 0001700124218
- B.6. Folio 0001700138018
- B.7. Folio 0001700138118
- B.8. Folio 0001700138218
- B.9. Folio 0001700139418
- B.10. Folio 0001700139618
- B.11. Folio 0001700140718

C. Solicitudes de acceso a la información en las que se analiza la versión pública de la documentación requerida:

- C.1. Folio 0001700103018
- C.2. Folio 0001700103218
- C.3. Folio 0001700105218
- C.4. Folio 0001700109018
- C.5. Folio 0001700117018

D. Solicitudes de acceso a la información en las que se analiza la incompetencia para proporcionar la información requerida:

- D.1. Folio 1700100016418 – Agencia de Investigación Criminal
- D.2. Folio 1700100016618 – Agencia de Investigación Criminal
- D.3. Folio 1700300002518 – OADEMASCMP

E. Solicitudes de acceso a la información en las que se determina la ampliación de término:

- E.1. Folio 0001700110218
- E.2. Folio 0001700120618
- E.3. Folio 0001700121918
- E.4. Folio 0001700124018
- E.5. Folio 0001700125018
- E.6. Folio 0001700125418

F. Análisis a los cumplimientos de las resoluciones del INAI

- F.1. Folio 0001700022918 – RRA 1770/18
- F.2. Folio 0001700023018 – RRA 1771/18

G. Interoperabilidad en la fracción XII del Artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

H. Asuntos Generales.

[Handwritten signatures and marks in blue ink on the right margin]

ABREVIATURAS

PGR – Procuraduría General de la República.

OP – Oficina del C. Procurador General de la República.

SJAI – Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales.

SCRPPA – Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo.

SEIDO – Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada.

SEIDF – Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales.

SDHPDSC – Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad.

AIC – Agencia de Investigación Criminal.

OM – Oficialía Mayor.

CAIA – Coordinación de Asuntos Internacionales y Agregadurías.

CGSP – Coordinación General de Servicios Periciales.

COPLADII – Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional.

CENAPI – Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia.

PFM – Policía Federal Ministerial.

FEADLE – Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión.

FEPADE – Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.

FEVIMTRA – Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas.

UEAF – Unidad Especializada en Análisis Financiero.

UTAG – Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental.

DGCS – Dirección General de Comunicación Social.

DGALEYN – Dirección General de Análisis Legislativo y Normatividad.

VG – Visitaduría General.

INAI – Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

LFTAIP – Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública

CFPP – Código Federal de Procedimientos Penales

CNPP – Código Nacional de Procedimientos Penales.

Y Unidades Administrativas diversas y Órganos Desconcentrados descritos en el Acuerdo A/238/12, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, así como las contempladas en otras normativas aplicables.

ACUERDOS

- I. Aprobación del Orden del Día.
- II. Aprobación del Acta de la Décima Séptima Sesión Ordinaria celebrada el 8 de mayo de 2018.
- III. Análisis y resolución de las solicitudes de información para su análisis y determinación:

A. Solicitudes de acceso a la información en las que se analiza la inexistencia de la información requerida:

A.1. Folio 0001700109618

Contenido de la Solicitud: *"El área de justicia de México Evalúa, Centro de Análisis de Políticas Públicas, a través de este medio solicita la siguiente información relacionada con la operación del sistema de justicia penal acusatorio en el estado. Lo anterior para la elaboración del reporte "Hallazgos 2017: seguimiento y evaluación del sistema de justicia penal en México*

1. Proporcionar los detalles del "Fideicomiso para la Ejecución de Programas de Mejora en la prestación del servicio de procuración de Justicia bajo el sistema penal acusatorio"

- a. Monto inicial aprobado para el fideicomiso*
- b. Institución administradora del fideicomiso*
- c. Monto actual del fideicomiso*
- d. Proyectos o acciones financiadas con recursos del fideicomiso*
- e. Resultados obtenidos*

2. Proporcionar los detalles de los resultados de la Evaluación de procesos en la Unidad de Atención Inmediata (UNAI).

3. Proporcionar detalle de las establecidas por la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo (SCRPPA), tendientes a descongestionar a nivel nacional las labores propias del sistema penal acusatorio.

4. Proporcionar información detallada del proyecto de despresurización de la Unidad de Atención Inmediata, asesorado por la consultoría METHA.2

- a. Nombre del proyecto*
- b. Monto aprobado para el proyecto*
- c. Objetivos del proyecto*
- d. Estatus de implementación y ejecución*
- e. Resultados obtenidos*
- f. Proporcionar la versión pública del contrato*

5. Proporcionar listado de proyectos en los cuales se cuente con el apoyo, asesoría o acompañamiento de la consultoría METHA, incluyendo:

- a. Nombre del proyecto*

- b. Monto aprobado para el proyecto
- c. Objetivos del proyecto
- d. Estatus de implementación y ejecución
- e. Resultados obtenidos
- f. Proporcionar la versión pública del contrato

1 <https://www.gob.mx/pgr/prensa/comunicado-1015-17-acuerda-delegacion-de-la-pgr-en-cdmxfortalecer-sistema-penal-acusatorio-y-dar-fluidez-a-los-procesos>

2 [\(Sic\)](https://www.gob.mx/pgr/prensa/comunicado-dpe-3640-17-inicia-la-delegacion-de-pgr-en-pueblaetapa-de-despresurizacion-de-la-unai)

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: OM - UISPPA.

PGR/CT/ACDO/0318/2018: En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad, **confirma** la declaratoria de inexistencia de la información concerniente al Fideicomiso para la Ejecución de los Programas de Mejora en la Prestación de Servicios de Procuración de Justicia Bajo el Sistema Penal Acusatorio, toda vez que a la fecha se encuentra en proceso de constitución, por lo que hasta en tanto concluya dicho proceso, no se está en posibilidad de proporcionar información sobre el tema; lo anterior, de conformidad con el artículo 141 de la LFTAIP, en relación con el Criterio de Interpretación del Pleno del INAI 20/13, el cual señala que:

"Procede declarar la inexistencia cuando la información solicitada sea el resultado de un proceso deliberativo en trámite. De acuerdo con el artículo 14, fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, esta causal de clasificación tiene por objeto proteger la información que sirve de base para deliberar sobre un asunto determinado, a fin de evitar que su publicidad afecte el proceso deliberativo. Ahora bien, la inexistencia implica necesariamente que la información no se encuentra en los archivos de la dependencia o entidad aun cuando tenga facultades para contar con ella. En este sentido, en los casos en que se esté llevando a cabo un proceso deliberativo del cual aún no se emite una determinación definitiva y lo solicitado por el particular consista precisamente en esa determinación, procede que el Comité de Información declare formalmente su inexistencia."

Adicionalmente, este Comité de Transparencia **confirma** la entrega de la versión pública del contrato celebrado con la consultoría METHA.2, aun cuando dicho instrumento jurídico fue contratado bajo el supuesto previsto en la fracción IV, artículo 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el cual indica que:

Artículo 41. Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa, cuando:
[...]



IV. Se realicen con fines exclusivamente militares o para la armada, o su contratación mediante licitación pública ponga en riesgo la seguridad nacional o la seguridad pública, en los términos de las leyes de la materia.
No quedan comprendidos en los supuestos a que se refiere esta fracción los requerimientos administrativos que tengan los sujetos de esta Ley;

Por lo que actualizaría el supuesto de clasificación de información clasificada como reservada, conforme a lo previsto en artículo 110, fracción I de la LFTAIP.

No obste, toda vez que del análisis al mismo, no se advirtieron elementos susceptibles a ser resguardados que pusieran en riesgo la seguridad pública o nacional, es que como se citó con antelación, se entrega versión pública testando únicamente información de carácter confidencial; es decir, el número de folio de la credencial de elector del administrador único de la sociedad, de conformidad con el artículo 113, fracción I de la LFTAIP, mismo que a la letra dice así:

*TÍTULO CUARTO
INFORMACIÓN CLASIFICADA
CAPÍTULO III
De la Información Confidencial*

ARTÍCULO 113. Se considera información confidencial:

I. La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable;

...

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello.

Aunado a lo anterior, se precisa que en los "*Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información así como la elaboración de versiones públicas*", se dispone lo siguiente:

TRIGÉSIMO OCTAVO. Se considera información confidencial:

I. Los datos personales en los términos de la norma aplicable;

II. La que se entregue con tal carácter por los particulares a los sujetos obligados, siempre y cuando tengan el derecho de entregar con dicho carácter la información, de conformidad con lo dispuesto en las leyes o en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte,
y

III. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos.

En este sentido, se desprende que será considerada información clasificada como confidencial, aquella que contenga datos personales de una persona física identificada o identificable, independientemente del medio por el cual se haya obtenido, sin necesidad de estar sujeta a temporalidad alguna y a la que sólo podrán tener acceso los titulares de la información o sus representantes legales.

A.2. Folio 0001700116018

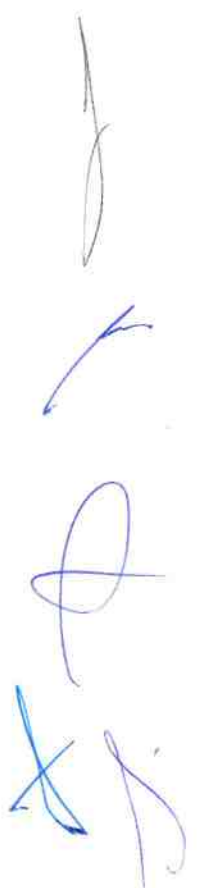
Contenido de la Solicitud: *"Solicito en versión pública documento que contenga el numero de policías investigadores que estuvo a cargo de cada uno de los Ministerios Públicos de la Fiscalía Especializada para Delitos contra Periodistas (FEADP), creada por medio del acuerdo A/031/06 de la Procuraduría General de la República, del 16 de febrero de 2006 a junio de 2010"* (Sic)

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: SDHPDSC, PFM y COPLADII.

PGR/CT/ACDO/0319/2018: En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad, **confirma** la declaratoria de inexistencia del número de policías investigadores que tuvieron a cargo cada uno de los Ministerios Públicos de la Fiscalía Especializada para Delitos contra Periodistas (FEADP), toda vez que la PFM a través de sus diversas unidades, tras una búsqueda en sus archivos, manifestó la inexistencia de la información peticionada.

Lo anterior se refuerza con el Criterio 12/10 de interpretación del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el cual a la letra dice:

Propósito de la declaración formal de inexistencia. *Atendiendo a lo dispuesto por los artículos 43, 46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 70 de su Reglamento, en los que se prevé el procedimiento a seguir para declarar la inexistencia de la información, el propósito de que los Comités de Información de los sujetos obligados por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental emitan una declaración que confirme, en su caso, la inexistencia de la información solicitada, es **garantizar al solicitante que efectivamente se realizaron las gestiones necesarias para la ubicación de la información de su interés, y que éstas fueron las adecuadas para atender a la particularidad del caso concreto.** En ese sentido, las declaraciones de inexistencia de los Comités de Información deben contener los elementos suficientes para generar en los solicitantes la certeza del carácter exhaustivo de la búsqueda de la información solicitada y de que su solicitud fue atendida debidamente; es decir, deben motivar o precisar las razones por las que se buscó la información en determinada(S) unidad (es) administrativa(S), los criterios de búsqueda utilizados, y las demás circunstancias que fueron tomadas en cuenta.*



A.4. Folio 1700300001218 – RRA 2242/18 Centro Federal de Protección a Personas

La resolución adoptada por unanimidad de los miembros del Comité se encuentra al final de la presente acta. -----

A.5. Folio 1700300001318 – RRA 2243/18 Centro Federal de Protección a Personas

La resolución adoptada por unanimidad de los miembros del Comité se encuentra al final de la presente acta. -----

A.6. Folio 1700300001418 – RRA 2244/18 Centro Federal de Protección a Personas

La resolución adoptada por unanimidad de los miembros del Comité se encuentra al final de la presente acta. -----

A.7. Folio 1700300001518 – RRA 2245/18 Centro Federal de Protección a Personas

La resolución adoptada por unanimidad de los miembros del Comité se encuentra al final de la presente acta. - - - - -

This image shows a full page of a notebook or worksheet template. It consists of a series of evenly spaced, horizontal dashed lines extending across the width of the page. The lines are light gray and provide a guide for handwriting practice or note-taking. There are no margins, text, or other markings present on the page.

La resolución adoptada por unanimidad de los miembros del Comité se encuentra al final de la presente acta. -----

Página 14 de 94

A.9. Folio 1700300001718 – RRA 2247/18 Centro Federal de Protección a Personas

La resolución adoptada por unanimidad de los miembros del Comité se encuentra al final de la presente acta. -----

A.10.Folio 1700300001818 – RRA 2248/18 Centro Federal de Protección a Personas

La resolución adoptada por unanimidad de los miembros del Comité se encuentra al final de la presente acta. -----

A.11.Folio 1700300001918 – RRA 2249/18 Centro Federal de Protección a Personas

La resolución adoptada por unanimidad de los miembros del Comité se encuentra al final de la presente acta. - - - - -



A.12.Folio 1700300002318 – RRA 2286/18 Centro Federal de Protección a Personas

La resolución adoptada por unanimidad de los miembros del Comité se encuentra al final de la presente acta. -----

La resolución adoptada por unanimidad de los miembros del Comité se encuentra al final de la presente acta. -----

A.16.Folio 1700300002718 – RRA 2291/18 Centro Federal de Protección a Personas

La resolución adoptada por unanimidad de los miembros del Comité se encuentra al final de la presente acta. -----



A.17.Folio 1700300002818 – RRA 2292/18 Centro Federal de Protección a Personas

La resolución adoptada por unanimidad de los miembros del Comité se encuentra al final de la presente acta. -----

[illegible]

A.18.Folio 1700300002918 – RRA 2293/18 Centro Federal de Protección a Personas

La resolución adoptada por unanimidad de los miembros del Comité se encuentra al final de la presente acta. -----

A.19.Folio 1700300003018 – RRA 2294/18 Centro Federal de Protección a Personas

La resolución adoptada por unanimidad de los miembros del Comité se encuentra al final de la presente acta. -----

B. Solicitudes de acceso a la información en las que se analiza la clasificación de la información requerida:

B.1. Folio 0001700108918

Contenido de la Solicitud: *"Para el periodo que va del 2000 al 2017 se solicita versión pública de:*

I. Convocatorias a licitaciones en las que haya participado cualquiera de las empresas listadas más adelante.

II. TODOS los contratos celebrados entre la dependencia y las empresas listadas más adelante.

III. Todas las facturas y/o cualquier documento en el que se registre el pago realizado por la dependencia a las empresas listadas a continuación:

- 1. BALAM SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.*
 - 2. BLINDADO SEGURO S.A. DE C.V.*
 - 3. BSD SECURITY SYSTEMS, S.A. DE C.V.*
 - 4. CELLEBRITE MOBILE SYNCHRONIZATION 5. COBHAM DEFENSE ELECTRONIC SYSTEMS*
 - 6. DXTX CORP.*
 - 7. DYNAMIC TRADING EXCHANGE TECHNOLOGIES CORPORATIVO MÉXICO, S. DE R.L.*
 - 8. ELITE BY CARGA S.A DE CV.*
 - 9. EYE TECH SOLUTIONS S.A. DE C.V.*
 - 10. GAMMA GROUP INTERNATIONAL LTD 11. GAMMA INTERNATIONAL GMBH*
 - 12. GESECO S.A. DE C.V.*
 - 13. GRUPO TECH BULL S.A. DE C.V.*
 - 14. HT S.R.L.*
 - 15. NEOLINX DE MÉXICO S.A. DE C.V.*
 - 16. OBSES DE MÉXICO S.A. DE C.V.*
 - 17. PICORP DE MÉXICO S.A. DE C.V.*
 - 18. SECURITY TRACKING DEVICES S.A. DE C.V.*
 - 19. SEGURIDAD EN LA NUBE S.A. DE C.V.*
 - 20. SEGURIDAD PRIVADA GRUPO ARMOR, S.A. DE C.V.*
 - 21. SEGURITECH SA DE CV*
 - 22. SEGURITECH PRIVADA S.A.*
 - 23. SYM SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.*
 - 24. TEVA TECH DE MÉXICO S.A. DE C.V.*
 - 25. TI ELITE TACTICAL S.A. DE C.V.*
 - 26. VERINT SYSTEMS INC.*
- Gracias." (Sic)*

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para

su atención a: AIC, CGSP, PFM, CENAPI, CAIA, COPLADII, DGCS, FEPADE, OM, SCRPPA, SDHPDSC, SEIDF, SEIDO, SJAÍ y VG.

PGR/CT/ACDO/0320/2018: En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad, **confirma** la clasificación de reserva de los contratos localizados en esta Institución Federal, mismos que deben ser resguardados en su totalidad, de conformidad con lo previsto en el artículo 110, fracciones I, V, VII y XIII de la LFTAIP, en relación con el Décimo séptimo, fracciones IV, VI y VII, Décimo octavo, Vigésimo tercero, Vigésimo sexto y Trigésimo segundo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas; en relación con las disposiciones señaladas en los artículos 3, fracción 111, 4, 6, fracción 11, 9, 12, fracción X, 29 al 31, 50, 51, 54 de la Ley de Seguridad Nacional; así como 3, 5, fracción IX, 7, fracciones II, III, VIII y XVI de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; en correspondencia con el artículo 49 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 210 de su Reglamento.

Por lo que, a fin de reforzar las causales de clasificación citadas, se exponen las siguientes pruebas de daño:

Artículo 110, fracción I:

- I. Riesgo real, demostrable e identificable: La divulgación de la documentación requerida, obstaculiza las estrategias y acciones para combatir a la delincuencia organizada y garantizar la Seguridad Pública y Nacional; toda vez que contiene información sensible, que contiene elementos que permiten establecer el procedimiento y especificaciones técnicas útiles utilizadas en las labores de inteligencia de esta Procuraduría General de la República, que potencializan una amenaza en caso de su revelación.
- II. Perjuicio que supera el interés público: Con la entrega de la documentación peticionada, se obstaculiza el combate al crimen organizado, ya que en caso de que la información requerida cayera en manos de los integrantes de la delincuencia, tendrían a su disposición información de inteligencia y contrainteligencia generada para la investigación y persecución de los delitos en materia de delincuencia organizada, que revela las estrategias y capacidades de esta Procuraduría General de la República, utilizadas exclusivamente en contra de los miembros de las organizaciones delictivas, y así verse afectada la Seguridad Pública y Nacional, traduciéndose en un interés particular sobre el interés público a cargo de esta Representación Social Federal.
- III. Principio de proporcionalidad: El clasificar la información solicitada se traduce en la salvaguarda de un interés general, como lo es el resguardo de la Seguridad Pública y Nacional a través de la investigación y persecución de los delitos, encomienda del Ministerio Público de la Federación. Por lo que resulta de mayor relevancia para la sociedad que esta Procuraduría General de la República vele por la Seguridad Pública y Nacional a través del combate al crimen organizado por medio de actividades de inteligencia y contrainteligencia, del que se desprende información relativa a las técnicas y estrategias de investigación para el combate al crimen organizado.

Artículo 110, fracción V:

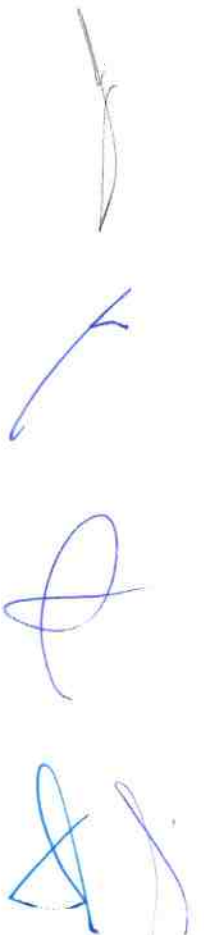
- I. Riesgo real, demostrable e identificable: Dar a conocer datos sobre las personas involucradas en los instrumentos contractuales de referencia, pone en riesgo su vida, seguridad y salud, incluso las de sus familiares, toda vez que con la publicidad de dichos datos se harían identificables y susceptibles de amenazas, extorsiones, intimidaciones y atentados por miembros de la delincuencia, ya que al conocer y/o al haber conocido de información sensible de inteligencia y contrainteligencia utilizada en contra de la delincuencia organizada, los hace vulnerables de represalias y objetos del crimen para la revelación de datos de su interés.
- II. Perjuicio que supera el interés público: El divulgar datos de las personas que participaron en los procedimientos de contratación, pone en riesgo su vida, seguridad y salud, así como la de sus familiares, toda vez que serían ser sujetos de amenazas y extorsiones por parte de miembros de la delincuencia, con la finalidad de obtener la información de inteligencia y contrainteligencia para el resguardo de la Seguridad Nacional y Pública, o simplemente ser blanco de represalias ya que la información de que se trata, está relacionada con el combate a la delincuencia organizada, en este sentido, el proteger el derecho fundamental de la vida de los involucrados y la de sus familiares, supera el interés particular de conocer la documentación requerida.
- III. Principio de proporcionalidad: El reservar la información relacionada con los datos de las personas que intervinieron en los procesos de contratación, resulta el medio menos restrictivo, ya que las personas que tienen conocimiento de información de inteligencia y contrainteligencia en contra de la delincuencia, los coloca en una situación de riesgo, por lo que proteger su vida, seguridad y salud, así como las de sus familiares, es proporcional a la excepción del derecho de acceso a la información.

Artículo 110, fracción VII:

- I. Riesgo real, demostrable e identificable: Con la entrega de la documentación solicitada, se hace pública información que contiene especificaciones y modos de operación de los instrumentos utilizados por el Ministerio Público de la Federación en la investigación y persecución de delitos, a través de la integración de las averiguaciones previas y las carpetas de investigación en integración, datos que de caer en manos de los integrantes de los grupos criminales, serían utilizados para evadir, destruir u ocultar los medios de prueba recopilados para la acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del o los responsable de la comisión de un ilícito.
- II. Perjuicio que supera el interés público: La investigación y persecución de los delitos en materia de delincuencia organizada por parte del Ministerio Público de la Federación, se ubica por encima de la entrega de la información requerida.
- III. Principio de proporcionalidad: La clasificación de reserva de la información solicitada es directamente proporcional al derecho de la reparación del daño de las víctimas de la delincuencia organizada, de su derecho a la verdad, de su derecho a la justicia, y de su derecho a la reparación del daño.

Artículo 110, fracción XIII:

- I. Riesgo real, demostrable e identificable: Con la entrega de la documentación solicitada se contraviene lo dispuesto en la normativa aplicable.
- II. Perjuicio que supera el interés público: La entrega de la documentación requerida, y el contravenir la normativa aplicable en donde se establece expresamente la reserva de la documentación solicitada, implica fincar responsabilidades administrativas o penales a servidores públicos que realicen acciones contrarias a las establecidas en la normativa correspondiente.
- III. Principio de proporcionalidad: La clasificación de la documentación solicitada, es directamente proporcional al estricto cumplimiento de lo establecido en la normativa que a continuación se precisa, toda vez que la contratación de referencia, se realizó en términos de lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los aplicables en las Leyes y Reglamentos correspondientes, correspondientes a Gastos de Seguridad Pública y Nacional.



B.2. Folio 0001700123218

Contenido de la Solicitud:

"1) Quiero conocer la situación actual de la lista de los 122 objetivos prioritarios que fijó la actual administración federal al inicio del sexenio. En concreto: la identidad, alias y grupo delictivo al que esta afiliado cada uno de los objetivos que ya han sido neutralizados y distinguir si están muertos o capturados.

2) Quiero conocer, de los objetivos que faltan por ser detenidos, el grupo delictivo al que pertenecen

3) Quiero saber si alguno de los objetivos ya detenidos previamente ha sido liberado por algún juez. Si es así cuantos y quienes.

4) Quiero saber CUÁNTOS (sin revelar identidad) de los objetivos prioritarios ya detenidos ya recibieron al menos una sentencia condenatoria en primera instancia" (Sic)

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: SCRPPA, CENAPI y SEIDO.

PGR/CT/ACDO/0321/2018: En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia, por unanimidad **confirma** la confidencialidad del pronunciamiento institucional para aquellas personas (objetivos prioritarios), que no cuentan con una sentencia condenatoria irrevocable derivada por la ejecución de delitos cometidos en materia de delincuencia organizada, de conformidad con lo advertido en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.

Toda vez que, emitir pronunciamiento sobre la existencia o inexistencia de información relacionada con una persona física que sea identificada o identificable, en este caso de un objetivo prioritario del gobierno federal que no cuente con una sentencia condenatoria irrevocable por la comisión de delitos cometidos en materia de delincuencia organizada, se encuentra directamente relacionada con la afectación a su intimidad, honor, buen nombre, e incluso contra la presunción de inocencia, generando un juicio *a priori* por parte de la sociedad.

De esta forma, se precisa la imposibilidad por parte de esta Representación Social para emitir pronunciamiento sobre información que pueda atender la petición de mérito, por lo que actualiza la causal de confidencialidad prevista en el artículo 113, fracción I, de la LFTAIP, que a la letra establece:

*TÍTULO CUARTO
INFORMACIÓN CLASIFICADA
CAPÍTULO III
De la Información Confidencial*

ARTÍCULO 113. *Se considera información confidencial:*

I. La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable;

...

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello.

Aunado a lo anterior, se precisa que en los "*Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información así como la elaboración de versiones públicas*", se dispone lo siguiente:

TRIGÉSIMO OCTAVO. Se considera información confidencial:

- I. Los datos personales en los términos de la norma aplicable;*
- II. La que se entregue con tal carácter por los particulares a los sujetos obligados, siempre y cuando tengan el derecho de entregar con dicho carácter la información, de conformidad con lo dispuesto en las leyes o en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, y*
- III. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos.*

En este sentido, se desprende que será considerada información clasificada como confidencial, aquella que contenga datos personales de una persona física identificada o identificable, independientemente del medio por el cual se haya obtenido, sin necesidad de estar sujeta a temporalidad alguna y a la que sólo podrán tener acceso los titulares de la información o sus representantes legales.

Además, como ya se mencionó, el dar a conocer información que asocie a una persona con la existencia de alguna investigación a cargo de esta Procuraduría, esto es, que la misma permita señalar o vincular a una persona con algún hecho posiblemente constitutivo de delito diverso a materia de delincuencia organizada y, que no cuente con una sentencia irrevocable, afecta directamente su intimidad, honor y buen nombre, incluso vulnera la presunción de inocencia, al generar un juicio *a priori* por parte de la sociedad, sin que la autoridad competente haya determinado su culpabilidad o inocencia a través del dictado de una sentencia condenatoria.

Aunado a lo anterior, el Código Nacional de Procedimientos Penales, específicamente en su artículo 15, dispone que cualquier persona tiene derecho a que se respete su intimidad, se proteja la información de su vida privada y sus datos personales, cuando sea parte en el procedimiento penal, a saber:

CAPÍTULO II DERECHOS EN EL PROCEDIMIENTO

ARTÍCULO 15. Derecho a la intimidad y a la privacidad

En todo procedimiento penal se respetará el derecho a la intimidad de cualquier persona que intervenga en él, asimismo se protegerá la información que se refiere a la vida privada y los datos personales, en los términos y con las excepciones que fijan la Constitución, este Código y la legislación aplicable.

Refuerza lo anterior, lo dictado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de las siguientes Tesis Jurisprudenciales, donde establece que el derecho de acceso a la información tiene límites, los cuales aplican en el momento en que se afecta el honor, el decoro, el respeto, la honra, la moral, la estimación y la privacidad de las personas; además de definir la afectación

a la moral, como la alteración que sufre una persona a su decoro, honor, reputación y vida privada, y el respeto de la sociedad por la comisión de un hecho ilícito, a saber:

Tesis: I.3o.C. J/71 (9a.)

Décima Época

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tribunales Colegiados de Circuito

160425 1 de 3

Libro IV, Enero de 2012, Tomo 5 Pag. 4036

DAÑO MORAL. ES LA ALTERACIÓN PROFUNDA QUE SUFRE UNA PERSONA EN SUS SENTIMIENTOS, AFECTOS, CREENCIAS, DECORO, HONOR, REPUTACIÓN, VIDA PRIVADA, CONFIGURACIÓN Y ASPECTOS FÍSICOS, O BIEN, EN LA CONSIDERACIÓN QUE DE SÍ MISMA TIENEN LOS DEMÁS, PRODUCIDA POR HECHO ILÍCITO.

El derecho romano, durante sus últimas etapas, admitió la necesidad de resarcir los daños morales, inspirado en un principio de buena fe, y en la actitud que debe observar todo hombre de respeto a la integridad moral de los demás; consagró este derecho el principio de que junto a los bienes materiales de la vida, objeto de protección jurídica, existen otros inherentes al individuo mismo, que deben también ser tutelados y protegidos, aun cuando no sean bienes materiales. En México, la finalidad del legislador, al reformar los artículos 1916 y adicionar el 1916 Bis del Código Civil para el Distrito Federal, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y dos, y posteriormente modificar los párrafos primero y segundo del artículo 1916, consistió en hacer responsable civilmente a todo aquel que, incluso, ejerce su derecho de expresión a través de un medio de información masivo, afecte a sus semejantes, atacando la moral, la paz pública, el derecho de terceros, o bien, provoque algún delito o perturbe el orden público, que son precisamente los límites que claramente previenen los artículos 6o. y 7o. de la Constitución General de la República. Así, de acuerdo al texto positivo, por daño moral debe entenderse la alteración profunda que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspectos físicos, o bien, en la consideración que de sí misma tienen los demás, producida por un hecho ilícito. Por tanto, para que se produzca el daño moral se requiere: a) que exista afectación en la persona, de cualesquiera de los bienes que tutela el artículo 1916 del Código Civil; b) que esa afectación sea consecuencia de un hecho ilícito; y, c) que haya una relación de causa-efecto entre ambos acontecimientos.

Tesis Aislada

Novena Época

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.

Tomo: XIV, Septiembre de 2001

Tesis: I.3o.C.244 C

Página: 1309

DERECHO A LA INFORMACIÓN. NO DEBE REBASAR LOS LÍMITES PREVISTOS POR LOS ARTÍCULOS 6o., 7o. Y 24 CONSTITUCIONALES. El derecho a la información tiene como límites el decoro, el honor, el respeto, la circunspección, la honestidad, el recato, la honra y la estimación, pues el artículo 6o. otorga a toda persona el derecho de manifestar libremente sus ideas y prohíbe a los gobernantes que sometan dicha manifestación a inquisición judicial o administrativa, salvo

que ataquen la moral, los derechos de tercero, provoquen algún delito o perturben el orden público.

Esta reforma recogió distintas corrientes preocupadas por asegurar a la sociedad una obtención de información oportuna, objetiva y plural, por parte de los grandes medios masivos de comunicación. Conforme a la evolución del artículo 6o. constitucional vigente y comparado con lo que al respecto se ha regulado en otros países, se concluye que a lo largo de la historia constitucional, quienes han tenido el depósito de la soberanía popular para legislar, se han preocupado porque existiera una Norma Suprema que reconociera el derecho del hombre a externar sus ideas, con limitaciones específicas tendientes a equilibrar el derecho del individuo frente a terceros y la sociedad, puesto que en ejercicio de ese derecho no debe menoscabar la moral, los derechos de tercero, que implica el honor, la dignidad y el derecho a la intimidad de éste, en su familia y decoro; así como tampoco puede, en ejercicio de ese derecho, provocar algún delito o perturbar el orden público.

Tales límites son que la opinión no debe atacar la moral, esto es, las ideas que se exterioricen no deben tender a destruir el conjunto de valores que sustenta la cohesión de la sociedad en el respeto mutuo y en el cumplimiento de los deberes que tienen por base la dignidad humana y los derechos de la persona; tampoco debe dañar los derechos de tercero, ni incitar a la provocación de un delito o a la perturbación del orden público.

De modo que la Constitución de mil novecientos diecisiete estableció una obligación por parte del Estado de abstenerse de actuar en contra de quien se expresa libremente, salvo que en el ejercicio de ese derecho se ataque a la moral, a los derechos de tercero, se provoque algún delito o se perturbe el orden público.

Tesis Aislada

Novena Época

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Pleno

Tomo: XI, Abril de 2000

Tesis: P. LX/2000

Página: 74

*DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU EJERCICIO SE ENCUENTRA LIMITADO TANTO POR LOS INTERESES NACIONALES Y DE LA SOCIEDAD, COMO POR LOS DERECHOS DE TERCEROS. El derecho a la información consagrado en la última parte del artículo 6o. de la Constitución Federal no es absoluto, sino que, como toda garantía, se halla sujeto a limitaciones o excepciones que se sustentan, **fundamentalmente**, en la protección de la seguridad nacional y en el respeto tanto a los intereses de la sociedad como a los derechos de los gobernados, limitaciones que, incluso, han dado origen a la figura jurídica del secreto de información que se conoce en la doctrina como "reserva de información" o 'secreto burocrático'. En estas condiciones, al encontrarse obligado el Estado, como sujeto pasivo de la citada garantía, a velar por dichos intereses, con apego a las normas constitucionales y legales, el mencionado derecho no puede ser garantizado **indiscriminadamente**, sino que el respeto a su ejercicio encuentra excepciones que lo regulan y a su vez lo garantizan, en atención a la materia a que se refiera; así, en cuanto a la seguridad nacional, se tienen normas que, por un lado, restringen el acceso a la información en esta materia, en razón de que su conocimiento público puede generar daños a los intereses nacionales y, por el otro, sancionan la inobservancia de esa reserva; por lo que hace al interés social, se cuenta con normas que tienden a proteger la averiguación de los delitos, la salud y la moral públicas, mientras*

que por lo que respecta a la protección de la persona existen normas que protegen el derecho a la vida o a la privacidad de los gobernados.

Por su parte, la Declaración Universal de los Derechos Humanos prevé:

ARTÍCULO 12. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio, o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.

Sobre el mismo tema, en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos se señala:

ARTÍCULO 11. Protección de la Honra y de la Dignidad.

- 1.- Toda persona tiene derecho a l respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad.*
- 2.- Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación.*
- 3.- Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.*

Además, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos establece:

ARTÍCULO 17.

- 1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación.*
- 2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.*

Por otro lado, no se debe omitir mencionar que la presunción de inocencia es una garantía de los presuntos responsables, prevista en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dispone:

ARTÍCULO 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.

B. De los derechos de toda persona imputada:

- I. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa.*

Asimismo, uno de los principios rectores que rigen el proceso penal, es el de presunción de inocencia, consagrado en el artículo 13, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que a la letra establece:

ARTÍCULO 13. Principio de presunción de inocencia

Toda persona se presume inocente y será tratada como tal en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el Órgano jurisdiccional, en los términos señalados en este Código”.

De lo expuesto, se colige que dar a conocer lo requerido representa afectar la esfera de la vida privada de una persona identificada e identificable, al generar una percepción negativa sobre la persona, ya que se vulnera su honor y su intimidad, y por lo tanto su presunción de inocencia, en razón de que terceras personas podrían presuponer su culpabilidad o responsabilidad, sin que hayan sido demostradas, afectando su prestigio y buen nombre, tal es el caso de señalar que alguna persona ha cometido algún hecho posiblemente constitutivo de delito. - - - - -

B.3. Folio 0001700123318

Contenido de la Solicitud:

"Motivos de baja, constancias de hechos por irregularidades laborales, penales o administrativas instruidas en contra del C. PAULO CÉSAR GRANADOS ROMERO, así como si éste promovió juicio laboral contra PGR y que está demandando." (Sic)

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: SJAI, VG, OM y SEIDF.

PGR/CT/ACDO/0322/2018: En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad, **confirma** la confidencialidad del pronunciamiento institucional en sentido afirmativo o negativo sobre la existencia o inexistencia de cualquier información que dé cuenta de un procedimiento penal en contra de una persona que no cuente con una sentencia condenatoria irrevocable derivada de su desempeño como servidor público por alguno de los delitos previstos en el Título Décimo del Código Penal Federal; o bien, de aquellas que no hayan sido notificadas al servidor público y que de la misma manera actualicen el supuesto anterior, como es el caso de la persona que nos ocupan, ello en términos del artículo 113, fracción I de la LFTAIP.

Y de la misma manera se **confirma** la confidencialidad del pronunciamiento respecto de afirmar o negar que una persona promovió o no, o sea parte o no de cualquier línea de investigación ya sea de tipo laboral, penal o administrativo, conforme a lo previsto en la fracción I del artículo 113 de la Ley de la materia.

Toda vez que, emitir pronunciamiento sobre la existencia o inexistencia de información relacionada con una persona física que sea identificada o identificable, se encuentra directamente relacionada con la afectación a su intimidad, honor, buen nombre, e incluso contra la presunción de inocencia, generando un juicio *a priori* por parte de la sociedad.

De esta forma, se precisa la imposibilidad por parte de esta Representación Social para emitir pronunciamiento sobre información que pueda atender la petición de mérito, por lo que actualiza la causal de confidencialidad prevista en el artículo 113, fracción I, de la LFTAIP, que a la letra establece:

TÍTULO CUARTO
INFORMACIÓN CLASIFICADA
CAPÍTULO III
De la Información Confidencial

ARTÍCULO 113. *Se considera información confidencial:*

I. La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable;

...

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello.

Aunado a lo anterior, se precisa que en los "*Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información así como la elaboración de versiones públicas*", se dispone lo siguiente:

TRIGÉSIMO OCTAVO. Se considera información confidencial:

- I. Los datos personales en los términos de la norma aplicable;*
- II. La que se entregue con tal carácter por los particulares a los sujetos obligados, siempre y cuando tengan el derecho de entregar con dicho carácter la información, de conformidad con lo dispuesto en las leyes o en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte,*
- y III. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos.*

En este sentido, se desprende que será considerada información clasificada como confidencial, aquella que contenga datos personales de una persona física identificada o identificable, independientemente del medio por el cual se haya obtenido, sin necesidad de estar sujeta a temporalidad alguna y a la que sólo podrán tener acceso los titulares de la información o sus representantes legales.

Además, como ya se mencionó, el dar a conocer información que asocie a una persona con la existencia de alguna investigación a cargo de esta Procuraduría, esto es, que la misma permita señalar o vincular a una persona con algún hecho posiblemente constitutivo de delito diverso a materia de delincuencia organizada y, que no cuente con una sentencia irrevocable, afecta directamente su intimidad, honor y buen nombre, incluso vulnera la presunción de inocencia, al generar un juicio *a priori* por parte de la sociedad, sin que la autoridad competente haya determinado su culpabilidad o inocencia a través del dictado de una sentencia condenatoria.

Aunado a lo anterior, el Código Nacional de Procedimientos Penales, específicamente en su artículo 15, dispone que cualquier persona tiene derecho a que se respete su intimidad, se proteja la información de su vida privada y sus datos personales, cuando sea parte en el procedimiento penal, a saber:

CAPÍTULO II DERECHOS EN EL PROCEDIMIENTO

ARTÍCULO 15. Derecho a la intimidad y a la privacidad

En todo procedimiento penal se respetará el derecho a la intimidad de cualquier persona que intervenga en él, asimismo se protegerá la información que se refiere a la vida privada y los datos personales, en los términos y con las excepciones que fijan la Constitución, este Código y la legislación aplicable.

Refuerza lo anterior, lo dictado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de las siguientes Tesis Jurisprudenciales, donde establece que el derecho de acceso a la información tiene límites, los cuales aplican en el momento en que se afecta el honor, el decoro, el respeto, la honra, la moral, la estimación y la privacidad de las personas; además de definir la afectación

a la moral, como la alteración que sufre una persona a su decoro, honor, reputación y vida privada, y el respeto de la sociedad por la comisión de un hecho ilícito, a saber:

Tesis: I.3o.C. J/71 (9a.)

Décima Época

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tribunales Colegiados de Circuito

160425 1 de 3

Libro IV, Enero de 2012, Tomo 5 Pag. 4036

DAÑO MORAL. ES LA ALTERACIÓN PROFUNDA QUE SUFRE UNA PERSONA EN SUS SENTIMIENTOS, AFECTOS, CREENCIAS, DECORO, HONOR, REPUTACIÓN, VIDA PRIVADA, CONFIGURACIÓN Y ASPECTOS FÍSICOS, O BIEN, EN LA CONSIDERACIÓN QUE DE SÍ MISMA TIENEN LOS DEMÁS, PRODUCIDA POR HECHO ILÍCITO.

El derecho romano, durante sus últimas etapas, admitió la necesidad de resarcir los daños morales, inspirado en un principio de buena fe, y en la actitud que debe observar todo hombre de respeto a la integridad moral de los demás; consagró este derecho el principio de que junto a los bienes materiales de la vida, objeto de protección jurídica, existen otros inherentes al individuo mismo, que deben también ser tutelados y protegidos, aun cuando no sean bienes materiales. En México, la finalidad del legislador, al reformar los artículos 1916 y adicionar el 1916 Bis del Código Civil para el Distrito Federal, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y dos, y posteriormente modificar los párrafos primero y segundo del artículo 1916, consistió en hacer responsable civilmente a todo aquel que, incluso, ejerce su derecho de expresión a través de un medio de información masivo, afecte a sus semejantes, atacando la moral, la paz pública, el derecho de terceros, o bien, provoque algún delito o perturbe el orden público, que son precisamente los límites que claramente previenen los artículos 6o. y 7o. de la Constitución General de la República. Así, de acuerdo al texto positivo, por daño moral debe entenderse la alteración profunda que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspectos físicos, o bien, en la consideración que de sí misma tienen los demás, producida por un hecho ilícito. Por tanto, para que se produzca el daño moral se requiere: a) que exista afectación en la persona, de cualesquiera de los bienes que tutela el artículo 1916 del Código Civil; b) que esa afectación sea consecuencia de un hecho ilícito; y, c) que haya una relación de causa-efecto entre ambos acontecimientos.

Tesis Aislada

Novena Época

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.

Tomo: XIV, Septiembre de 2001

Tesis: I.3o.C.244 C

Página: 1309

DERECHO A LA INFORMACIÓN. NO DEBE REBASAR LOS LÍMITES PREVISTOS POR LOS ARTÍCULOS 6o., 7o. Y 24 CONSTITUCIONALES. El derecho a la información tiene como límites el decoro, el honor, el respeto, la circunspección, la honestidad, el recato, la honra y la estimación, pues el artículo 6o. otorga a toda persona el derecho de manifestar libremente sus ideas y prohíbe a los gobernantes que sometan dicha manifestación a inquisición judicial o administrativa, salvo

que ataquen la moral, los derechos de tercero, provoquen algún delito o perturben el orden público.

Esta reforma recogió distintas corrientes preocupadas por asegurar a la sociedad una obtención de información oportuna, objetiva y plural, por parte de los grandes medios masivos de comunicación. Conforme a la evolución del artículo 6o. constitucional vigente y comparado con lo que al respecto se ha regulado en otros países, se concluye que a lo largo de la historia constitucional, quienes han tenido el depósito de la soberanía popular para legislar, se han preocupado porque existiera una Norma Suprema que reconociera el derecho del hombre a externar sus ideas, con limitaciones específicas tendientes a equilibrar el derecho del individuo frente a terceros y la sociedad, puesto que en ejercicio de ese derecho no debe menoscabar la moral, los derechos de tercero, que implica el honor, la dignidad y el derecho a la intimidad de éste, en su familia y decoro; así como tampoco puede, en ejercicio de ese derecho, provocar algún delito o perturbar el orden público.

Tales límites son que la opinión no debe atacar la moral, esto es, las ideas que se exterioricen no deben tender a destruir el conjunto de valores que sustenta la cohesión de la sociedad en el respeto mutuo y en el cumplimiento de los deberes que tienen por base la dignidad humana y los derechos de la persona; tampoco debe dañar los derechos de tercero, ni incitar a la provocación de un delito o a la perturbación del orden público.

De modo que la Constitución de mil novecientos diecisiete estableció una obligación por parte del Estado de abstenerse de actuar en contra de quien se expresa libremente, salvo que en el ejercicio de ese derecho se ataque a la moral, a los derechos de tercero, se provoque algún delito o se perturbe el orden público.

Tesis Aislada

Novena Época

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Pleno

Tomo: XI, Abril de 2000

Tesis: P. LX/2000

Página: 74

DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU EJERCICIO SE ENCUENTRA LIMITADO TANTO POR LOS INTERESES NACIONALES Y DE LA SOCIEDAD, COMO POR LOS DERECHOS DE TERCEROS. El derecho a la información consagrado en la última parte del artículo 6o. de la Constitución Federal no es absoluto, sino que, como toda garantía, se halla sujeto a limitaciones o excepciones que se sustentan, fundamentalmente, en la protección de la seguridad nacional y en el respeto tanto a los intereses de la sociedad como a los derechos de los gobernados, limitaciones que, incluso, han dado origen a la figura jurídica del secreto de información que se conoce en la doctrina como "reserva de información" o 'secreto burocrático'. En estas condiciones, al encontrarse obligado el Estado, como sujeto pasivo de la citada garantía, a velar por dichos intereses, con apego a las normas constitucionales y legales, el mencionado derecho no puede ser garantizado indiscriminadamente, sino que el respeto a su ejercicio encuentra excepciones que lo regulan y a su vez lo garantizan, en atención a la materia a que se refiera; así, en cuanto a la seguridad nacional, se tienen normas que, por un lado, restringen el acceso a la información en esta materia, en razón de que su conocimiento público puede generar daños a los intereses nacionales y, por el otro, sancionan la inobservancia de esa reserva; por lo que hace al interés social, se cuenta con normas que tienden a proteger la averiguación de los delitos, la salud y la moral públicas, mientras

que por lo que respecta a la protección de la persona existen normas que protegen el derecho a la vida o a la privacidad de los gobernados.

Por su parte, la Declaración Universal de los Derechos Humanos prevé:

ARTÍCULO 12. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio, o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.

Sobre el mismo tema, en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos se señala:

ARTÍCULO 11. Protección de la Honra y de la Dignidad.

- 1.- Toda persona tiene derecho a l respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad.*
- 2.- Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación.*
- 3.- Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.*

Además, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos establece:

ARTÍCULO 17.

- 1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación.*
- 2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.*

Por otro lado, no se debe omitir mencionar que la presunción de inocencia es una garantía de los presuntos responsables, prevista en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dispone:

ARTÍCULO 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.

B. De los derechos de toda persona imputada:

- I. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa.*

Asimismo, uno de los principios rectores que rigen el proceso penal, es el de presunción de inocencia, consagrado en el artículo 13, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que a la letra establece:

ARTÍCULO 13. Principio de presunción de inocencia

Toda persona se presume inocente y será tratada como tal en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el Órgano jurisdiccional, en los términos señalados en este Código”.

De lo expuesto, se colige que dar a conocer lo requerido representa afectar la esfera de la vida privada de una persona identificada e identificable, al generar una percepción negativa sobre la persona, ya que se vulnera su honor y su intimidad, y por lo tanto su presunción de inocencia, en razón de que terceras personas podrían presuponer su culpabilidad o responsabilidad, sin que hayan sido demostradas, afectando su prestigio y buen nombre, tal es el caso de señalar que alguna persona ha cometido algún hecho posiblemente constitutivo de delito. - - - - -

B.4. Folio 0001700123818

Contenido de la Solicitud:

"En respuesta a una solicitud de información que adjunto en esta solicitud, se me informó el nombre de los 95 objetivos prioritarios capturados en esta administración. Con base en ello, quiero que me informen: 1.-Las averiguaciones previas y/o carpetas de investigación iniciadas en cada caso de los 95 (o donde la PGR haya llevado la investigación). Quiero reiterar que no estoy solicitando acceso a la investigación, sólo quiero saber el número de averiguación y/o carpeta Cabe señalar que en el recurso de revisión 4065/15 el INAI instruyó a la PGR a que realizara una búsqueda exhaustiva y entregara las averiguaciones previas iniciadas, señalando el nombre del indicado y el número de averiguación." (Sic)

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: SCRPPA, SEIDO y CENAPI.

PGR/CT/ACDO/0323/2018: En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad, **confirma** la confidencialidad del pronunciamiento institucional para aquellas personas (objetivos prioritarios), que no cuentan con una sentencia condenatoria irrevocable derivada por la ejecución de delitos cometidos en materia de delincuencia organizada, de conformidad con lo advertido en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.

Toda vez que, emitir pronunciamiento sobre la existencia o inexistencia de información relacionada con una persona física que sea identificada o identificable, en este caso de un objetivo prioritario del gobierno federal que no cuente con una sentencia condenatoria irrevocable por la comisión de delitos cometidos en materia de delincuencia organizada, se encuentra directamente relacionada con la afectación a su intimidad, honor, buen nombre, e incluso contra la presunción de inocencia, generando un juicio *a priori* por parte de la sociedad.

De esta forma, se precisa la imposibilidad por parte de esta Representación Social para emitir pronunciamiento sobre información que pueda atender la petición de mérito, por lo que actualiza la causal de confidencialidad prevista en el artículo 113, fracción I, de la LFTAIP, que a la letra establece:

*TÍTULO CUARTO
INFORMACIÓN CLASIFICADA
CAPÍTULO III
De la Información Confidencial*

ARTÍCULO 113. *Se considera información confidencial:*

I. La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable;

...

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello.

Aunado a lo anterior, se precisa que en los "Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información así como la elaboración de versiones públicas", se dispone lo siguiente:

TRIGÉSIMO OCTAVO. Se considera información confidencial:

- I. Los datos personales en los términos de la norma aplicable;*
- II. La que se entregue con tal carácter por los particulares a los sujetos obligados, siempre y cuando tengan el derecho de entregar con dicho carácter la información, de conformidad con lo dispuesto en las leyes o en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, y*
- III. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos.*

En este sentido, se desprende que será considerada información clasificada como confidencial, aquella que contenga datos personales de una persona física identificada o identificable, independientemente del medio por el cual se haya obtenido, sin necesidad de estar sujeta a temporalidad alguna y a la que sólo podrán tener acceso los titulares de la información o sus representantes legales.

Además, como ya se mencionó, el dar a conocer información que asocie a una persona con la existencia de alguna investigación a cargo de esta Procuraduría, esto es, que la misma permita señalar o vincular a una persona con algún hecho posiblemente constitutivo de delito diverso a materia de delincuencia organizada y, que no cuente con una sentencia irrevocable, afecta directamente su intimidad, honor y buen nombre, incluso vulnera la presunción de inocencia, al generar un juicio *a priori* por parte de la sociedad, sin que la autoridad competente haya determinado su culpabilidad o inocencia a través del dictado de una sentencia condenatoria.

Aunado a lo anterior, el Código Nacional de Procedimientos Penales, específicamente en su artículo 15, dispone que cualquier persona tiene derecho a que se respete su intimidad, se proteja la información de su vida privada y sus datos personales, cuando sea parte en el procedimiento penal, a saber:

CAPÍTULO II DERECHOS EN EL PROCEDIMIENTO

ARTÍCULO 15. Derecho a la intimidad y a la privacidad

En todo procedimiento penal se respetará el derecho a la intimidad de cualquier persona que intervenga en él, asimismo se protegerá la información que se refiere a la vida privada y los datos personales, en los términos y con las excepciones que fijan la Constitución, este Código y la legislación aplicable.

Refuerza lo anterior, lo dictado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de las siguientes Tesis Jurisprudenciales, donde establece que el derecho de acceso a la información tiene límites, los cuales aplican en el momento en que se afecta el honor, el decoro, el respeto, la honra, la moral, la estimación y la privacidad de las personas; además de definir la afectación

a la moral, como la alteración que sufre una persona a su decoro, honor, reputación y vida privada, y el respeto de la sociedad por la comisión de un hecho ilícito, a saber:

Tesis: I.3o.C. J/71 (9a.)

Décima Época

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tribunales Colegiados de Circuito

160425 1 de 3

Libro IV, Enero de 2012, Tomo 5 Pag. 4036

DAÑO MORAL. ES LA ALTERACIÓN PROFUNDA QUE SUFRE UNA PERSONA EN SUS SENTIMIENTOS, AFECTOS, CREENCIAS, DECORO, HONOR, REPUTACIÓN, VIDA PRIVADA, CONFIGURACIÓN Y ASPECTOS FÍSICOS, O BIEN, EN LA CONSIDERACIÓN QUE DE SÍ MISMA TIENEN LOS DEMÁS, PRODUCIDA POR HECHO ILÍCITO.

El derecho romano, durante sus últimas etapas, admitió la necesidad de resarcir los daños morales, inspirado en un principio de buena fe, y en la actitud que debe observar todo hombre de respeto a la integridad moral de los demás; consagró este derecho el principio de que junto a los bienes materiales de la vida, objeto de protección jurídica, existen otros inherentes al individuo mismo, que deben también ser tutelados y protegidos, aun cuando no sean bienes materiales. En México, la finalidad del legislador, al reformar los artículos 1916 y adicionar el 1916 Bis del Código Civil para el Distrito Federal, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y dos, y posteriormente modificar los párrafos primero y segundo del artículo 1916, consistió en hacer responsable civilmente a todo aquel que, incluso, ejerce su derecho de expresión a través de un medio de información masivo, afecte a sus semejantes, atacando la moral, la paz pública, el derecho de terceros, o bien, provoque algún delito o perturbe el orden público, que son precisamente los límites que claramente previenen los artículos 6o. y 7o. de la Constitución General de la República. Así, de acuerdo al texto positivo, por daño moral debe entenderse la alteración profunda que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspectos físicos, o bien, en la consideración que de sí misma tienen los demás, producida por un hecho ilícito. Por tanto, para que se produzca el daño moral se requiere: a) que exista afectación en la persona, de cualesquiera de los bienes que tutela el artículo 1916 del Código Civil; b) que esa afectación sea consecuencia de un hecho ilícito; y, c) que haya una relación de causa-efecto entre ambos acontecimientos.

Tesis Aislada

Novena Época

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.

Tomo: XIV, Septiembre de 2001

Tesis: I.3o.C.244 C

Página: 1309

DERECHO A LA INFORMACIÓN. NO DEBE REBASAR LOS LÍMITES PREVISTOS POR LOS ARTÍCULOS 6o., 7o. Y 24 CONSTITUCIONALES. El derecho a la información tiene como límites el decoro, el honor, el respeto, la circunspección, la honestidad, el recato, la honra y la estimación, pues el artículo 6o. otorga a toda persona el derecho de manifestar libremente sus ideas y prohíbe a los gobernantes que sometan dicha manifestación a inquisición judicial o administrativa, salvo

que ataquen la moral, los derechos de tercero, provoquen algún delito o perturben el orden público.

Esta reforma recogió distintas corrientes preocupadas por asegurar a la sociedad una obtención de información oportuna, objetiva y plural, por parte de los grandes medios masivos de comunicación. Conforme a la evolución del artículo 6o. constitucional vigente y comparado con lo que al respecto se ha regulado en otros países, se concluye que a lo largo de la historia constitucional, quienes han tenido el depósito de la soberanía popular para legislar, se han preocupado porque existiera una Norma Suprema que reconociera el derecho del hombre a externar sus ideas, con limitaciones específicas tendientes a equilibrar el derecho del individuo frente a terceros y la sociedad, puesto que en ejercicio de ese derecho no debe menoscabar la moral, los derechos de tercero, que implica el honor, la dignidad y el derecho a la intimidad de éste, en su familia y decoro; así como tampoco puede, en ejercicio de ese derecho, provocar algún delito o perturbar el orden público.

Tales límites son que la opinión no debe atacar la moral, esto es, las ideas que se exterioricen no deben tender a destruir el conjunto de valores que sustenta la cohesión de la sociedad en el respeto mutuo y en el cumplimiento de los deberes que tienen por base la dignidad humana y los derechos de la persona; tampoco debe dañar los derechos de tercero, ni incitar a la provocación de un delito o a la perturbación del orden público.

De modo que la Constitución de mil novecientos diecisiete estableció una obligación por parte del Estado de abstenerse de actuar en contra de quien se expresa libremente, salvo que en el ejercicio de ese derecho se ataque a la moral, a los derechos de tercero, se provoque algún delito o se perturbe el orden público.

Tesis Aislada

Novena Época

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Pleno

Tomo: XI, Abril de 2000

Tesis: P. LX/2000

Página: 74

DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU EJERCICIO SE ENCUENTRA LIMITADO TANTO POR LOS INTERESES NACIONALES Y DE LA SOCIEDAD, COMO POR LOS DERECHOS DE TERCEROS. El derecho a la información consagrado en la última parte del artículo 6o. de la Constitución Federal no es absoluto, sino que, como toda garantía, se halla sujeto a limitaciones o excepciones que se sustentan, fundamentalmente, en la protección de la seguridad nacional y en el respeto tanto a los intereses de la sociedad como a los derechos de los gobernados, limitaciones que, incluso, han dado origen a la figura jurídica del secreto de información que se conoce en la doctrina como "reserva de información" o 'secreto burocrático'. En estas condiciones, al encontrarse obligado el Estado, como sujeto pasivo de la citada garantía, a velar por dichos intereses, con apego a las normas constitucionales y legales, el mencionado derecho no puede ser garantizado indiscriminadamente, sino que el respeto a su ejercicio encuentra excepciones que lo regulan y a su vez lo garantizan, en atención a la materia a que se refiera; así, en cuanto a la seguridad nacional, se tienen normas que, por un lado, restringen el acceso a la información en esta materia, en razón de que su conocimiento público puede generar daños a los intereses nacionales y, por el otro, sancionan la inobservancia de esa reserva; por lo que hace al interés social, se cuenta con normas que tienden a proteger la averiguación de los delitos, la salud y la moral públicas, mientras

que por lo que respecta a la protección de la persona existen normas que protegen el derecho a la vida o a la privacidad de los gobernados.

Por su parte, la Declaración Universal de los Derechos Humanos prevé:

ARTÍCULO 12. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio, o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.

Sobre el mismo tema, en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos se señala:

ARTÍCULO 11. Protección de la Honra y de la Dignidad.

- 1.- Toda persona tiene derecho a l respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad.*
- 2.- Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación.*
- 3.- Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.*

Además, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos establece:

ARTÍCULO 17.

- 1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación.*
- 2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.*

Por otro lado, no se debe omitir mencionar que la presunción de inocencia es una garantía de los presuntos responsables, prevista en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dispone:

ARTÍCULO 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.

B. De los derechos de toda persona imputada:

- I. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa.*

Asimismo, uno de los principios rectores que rigen el proceso penal, es el de presunción de inocencia, consagrado en el artículo 13, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que a la letra establece:

ARTÍCULO 13. Principio de presunción de inocencia

Toda persona se presume inocente y será tratada como tal en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el Órgano jurisdiccional, en los términos señalados en este Código”.

De lo expuesto, se colige que dar a conocer lo requerido representa afectar la esfera de la vida privada de una persona identificada e identificable, al generar una percepción negativa sobre la persona, ya que se vulnera su honor y su intimidad, y por lo tanto su presunción de inocencia, en razón de que terceras personas podrían presuponer su culpabilidad o responsabilidad, sin que hayan sido demostradas, afectando su prestigio y buen nombre, tal es el caso de señalar que alguna persona ha cometido algún hecho posiblemente constitutivo de delito. - - - - -

B.5. Folio 0001700124218

Contenido de la Solicitud:

"Debido a que en el Recurso de Revisión 2586/15, el INAI instruyó a la PGR a entregar diversa información referente a los objetivos prioritarios, quiero que se me informe el delito por el que se le investiga a los 95 capturados, es decir, de qué se le acusa a cada uno de ellos. Quiero destacar que no estoy pidiendo información ni acceso a la averiguación previa o carpeta de investigación, sólo quiero saber por la comisión de qué delito se les busca o se les investiga. Adjunto el listado de los 95 capturados." (Sic)

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: SCRPPA, CENAPI y SEIDO.

PGR/CT/ACDO/0324/2018: En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad, **confirma** la confidencialidad del pronunciamiento institucional para aquellas personas (objetivos prioritarios), que no cuentan con una sentencia condenatoria irrevocable derivada por la ejecución de delitos cometidos en materia de delincuencia organizada, de conformidad con lo advertido en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.

Toda vez que, emitir pronunciamiento sobre la existencia o inexistencia de información relacionada con una persona física que sea identificada o identificable, en este caso de un objetivo prioritario del gobierno federal que no cuente con una sentencia condenatoria irrevocable por la comisión de delitos cometidos en materia de delincuencia organizada, se encuentra directamente relacionada con la afectación a su intimidad, honor, buen nombre, e incluso contra la presunción de inocencia, generando un juicio *a priori* por parte de la sociedad.

De esta forma, se precisa la imposibilidad por parte de esta Representación Social para emitir pronunciamiento sobre información que pueda atender la petición de mérito, por lo que actualiza la causal de confidencialidad prevista en el artículo 113, fracción I, de la LFTAIP, que a la letra establece:

*TÍTULO CUARTO
INFORMACIÓN CLASIFICADA
CAPÍTULO III*

De la Información Confidencial

ARTÍCULO 113. *Se considera información confidencial:*

I. La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable;

...

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello.

Aunado a lo anterior, se precisa que en los "*Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información así como la elaboración de versiones públicas*", se dispone lo siguiente:

TRIGÉSIMO OCTAVO. Se considera información confidencial:

- I. Los datos personales en los términos de la norma aplicable;*
- II. La que se entregue con tal carácter por los particulares a los sujetos obligados, siempre y cuando tengan el derecho de entregar con dicho carácter la información, de conformidad con lo dispuesto en las leyes o en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte,*
- y III. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos.*

En este sentido, se desprende que será considerada información clasificada como confidencial, aquella que contenga datos personales de una persona física identificada o identificable, independientemente del medio por el cual se haya obtenido, sin necesidad de estar sujeta a temporalidad alguna y a la que sólo podrán tener acceso los titulares de la información o sus representantes legales.

Además, como ya se mencionó, el dar a conocer información que asocie a una persona con la existencia de alguna investigación a cargo de esta Procuraduría, esto es, que la misma permita señalar o vincular a una persona con algún hecho posiblemente constitutivo de delito diverso a materia de delincuencia organizada y, que no cuente con una sentencia irrevocable, afecta directamente su intimidad, honor y buen nombre, incluso vulnera la presunción de inocencia, al generar un juicio *a priori* por parte de la sociedad, sin que la autoridad competente haya determinado su culpabilidad o inocencia a través del dictado de una sentencia condenatoria.

Aunado a lo anterior, el Código Nacional de Procedimientos Penales, específicamente en su artículo 15, dispone que cualquier persona tiene derecho a que se respete su intimidad, se proteja la información de su vida privada y sus datos personales, cuando sea parte en el procedimiento penal, a saber:

CAPÍTULO II DERECHOS EN EL PROCEDIMIENTO

ARTÍCULO 15. Derecho a la intimidad y a la privacidad

En todo procedimiento penal se respetará el derecho a la intimidad de cualquier persona que intervenga en él, asimismo se protegerá la información que se refiere a la vida privada y los datos personales, en los términos y con las excepciones que fijan la Constitución, este Código y la legislación aplicable.

Refuerza lo anterior, lo dictado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de las siguientes Tesis Jurisprudenciales, donde establece que el derecho de acceso a la información tiene límites, los cuales aplican en el momento en que se afecta el honor, el decoro, el respeto, la honra, la moral, la estimación y la privacidad de las personas; además de definir la afectación a la moral, como la alteración que sufre una persona a su decoro, honor, reputación y vida privada, y el respeto de la sociedad por la comisión de un hecho ilícito, a saber:

Tesis: I.3o.C. J/71 (9a.)

*Décima Época
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tribunales Colegiados de Circuito
160425 1 de 3
Libro IV, Enero de 2012, Tomo 5 Pag. 4036*

DAÑO MORAL. ES LA ALTERACIÓN PROFUNDA QUE SUFRE UNA PERSONA EN SUS SENTIMIENTOS, AFECTOS, CREENCIAS, DECORO, HONOR, REPUTACIÓN, VIDA PRIVADA, CONFIGURACIÓN Y ASPECTOS FÍSICOS, O BIEN, EN LA CONSIDERACIÓN QUE DE SÍ MISMA TIENEN LOS DEMÁS, PRODUCIDA POR HECHO ILÍCITO.

El derecho romano, durante sus últimas etapas, admitió la necesidad de resarcir los daños morales, inspirado en un principio de buena fe, y en la actitud que debe observar todo hombre de respeto a la integridad moral de los demás; consagró este derecho el principio de que junto a los bienes materiales de la vida, objeto de protección jurídica, existen otros inherentes al individuo mismo, que deben también ser tutelados y protegidos, aun cuando no sean bienes materiales. En México, la finalidad del legislador, al reformar los artículos 1916 y adicionar el 1916 Bis del Código Civil para el Distrito Federal, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y dos, y posteriormente modificar los párrafos primero y segundo del artículo 1916, consistió en hacer responsable civilmente a todo aquel que, incluso, ejerce su derecho de expresión a través de un medio de información masivo, afecte a sus semejantes, atacando la moral, la paz pública, el derecho de terceros, o bien, provoque algún delito o perturbe el orden público, que son precisamente los límites que claramente previenen los artículos 6o. y 7o. de la Constitución General de la República. Así, de acuerdo al texto positivo, por daño moral debe entenderse la alteración profunda que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspectos físicos, o bien, en la consideración que de sí misma tienen los demás, producida por un hecho ilícito. Por tanto, para que se produzca el daño moral se requiere: a) que exista afectación en la persona, de cualesquiera de los bienes que tutela el artículo 1916 del Código Civil; b) que esa afectación sea consecuencia de un hecho ilícito; y, c) que haya una relación de causa-efecto entre ambos acontecimientos.

*Tesis Aislada
Novena Época
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.
Tomo: XIV, Septiembre de 2001
Tesis: I.3o.C.244 C
Página: 1309*

DERECHO A LA INFORMACIÓN. NO DEBE REBASAR LOS LÍMITES PREVISTOS POR LOS ARTÍCULOS 6o., 7o. Y 24 CONSTITUCIONALES. El derecho a la información tiene como límites el decoro, el honor, el respeto, la circunspección, la honestidad, el recato, la honra y la estimación, pues el artículo 6o. otorga a toda persona el derecho de manifestar libremente sus ideas y prohíbe a los gobernantes que sometan dicha manifestación a inquisición judicial o administrativa, salvo que ataquen la moral, los derechos de tercero, provoquen algún delito o perturben el orden público.

Esta reforma recogió distintas corrientes preocupadas por asegurar a la sociedad una obtención de información oportuna, objetiva y plural, por parte de los grandes medios masivos de

comunicación. Conforme a la evolución del artículo 6o. constitucional vigente y comparado con lo que al respecto se ha regulado en otros países, se concluye que a lo largo de la historia constitucional, quienes han tenido el depósito de la soberanía popular para legislar, se han preocupado porque existiera una Norma Suprema que reconociera el derecho del hombre a externar sus ideas, con limitaciones específicas tendientes a equilibrar el derecho del individuo frente a terceros y la sociedad, puesto que en ejercicio de ese derecho no debe menoscabar la moral, los derechos de tercero, que implica el honor, la dignidad y el derecho a la intimidad de éste, en su familia y decoro; así como tampoco puede, en ejercicio de ese derecho, provocar algún delito o perturbar el orden público.

Tales límites son que la opinión no debe atacar la moral, esto es, las ideas que se exterioricen no deben tender a destruir el conjunto de valores que sustenta la cohesión de la sociedad en el respeto mutuo y en el cumplimiento de los deberes que tienen por base la dignidad humana y los derechos de la persona; tampoco debe dañar los derechos de tercero, ni incitar a la provocación de un delito o a la perturbación del orden público.

De modo que la Constitución de mil novecientos diecisiete estableció una obligación por parte del Estado de abstenerse de actuar en contra de quien se expresa libremente, salvo que en el ejercicio de ese derecho se ataque a la moral, a los derechos de tercero, se provoque algún delito o se perturbe el orden público.

*Tesis Aislada
Novena Época
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Pleno
Tomo: XI, Abril de 2000
Tesis: P. LX/2000
Página: 74*

DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU EJERCICIO SE ENCUENTRA LIMITADO TANTO POR LOS INTERESES NACIONALES Y DE LA SOCIEDAD, COMO POR LOS DERECHOS DE TERCEROS. El derecho a la información consagrado en la última parte del artículo 6o. de la Constitución Federal no es absoluto, sino que, como toda garantía, se halla sujeto a limitaciones o excepciones que se sustentan, fundamentalmente, en la protección de la seguridad nacional y en el respeto tanto a los intereses de la sociedad como a los derechos de los gobernados, limitaciones que, incluso, han dado origen a la figura jurídica del secreto de información que se conoce en la doctrina como "reserva de información" o 'secreto burocrático'. En estas condiciones, al encontrarse obligado el Estado, como sujeto pasivo de la citada garantía, a velar por dichos intereses, con apego a las normas constitucionales y legales, el mencionado derecho no puede ser garantizado indiscriminadamente, sino que el respeto a su ejercicio encuentra excepciones que lo regulan y a su vez lo garantizan, en atención a la materia a que se refiera; así, en cuanto a la seguridad nacional, se tienen normas que, por un lado, restringen el acceso a la información en esta materia, en razón de que su conocimiento público puede generar daños a los intereses nacionales y, por el otro, sancionan la inobservancia de esa reserva; por lo que hace al interés social, se cuenta con normas que tienden a proteger la averiguación de los delitos, la salud y la moral públicas, mientras que por lo que respecta a la protección de la persona existen normas que protegen el derecho a la vida o a la privacidad de los gobernados.

Por su parte, la Declaración Universal de los Derechos Humanos prevé:

ARTÍCULO 12. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio, o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.

Sobre el mismo tema, en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos se señala:

ARTÍCULO 11. Protección de la Honra y de la Dignidad.

- 1.- Toda persona tiene derecho a l respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad.*
- 2.- Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación.*
- 3.- Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.*

Además, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos establece:

ARTÍCULO 17.

- 1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación.*
- 2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.*

Por otro lado, no se debe omitir mencionar que la presunción de inocencia es una garantía de los presuntos responsables, prevista en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dispone:

ARTÍCULO 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.

B. De los derechos de toda persona imputada:

- I. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa.*

Asimismo, uno de los principios rectores que rigen el proceso penal, es el de presunción de inocencia, consagrado en el artículo 13, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que a la letra establece:

ARTÍCULO 13. Principio de presunción de inocencia

Toda persona se presume inocente y será tratada como tal en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el Órgano jurisdiccional, en los términos señalados en este Código”.

De lo expuesto, se colige que dar a conocer lo requerido representa afectar la esfera de la vida privada de una persona identificada e identificable, al generar una percepción negativa sobre la persona, ya que se vulnera su honor y su intimidad, y por lo tanto su presunción de inocencia, en razón de que terceras personas podrían presuponer su culpabilidad o responsabilidad, sin que hayan sido demostradas, afectando su prestigio y buen nombre, tal es el caso de señalar que alguna persona ha cometido algún hecho posiblemente constitutivo de delito. - - - - -

B.7. Folio 0001700138118

Contenido de la Solicitud:

"(...), por mi propio derecho...

Con fundamento en los artículos 1º, 8º y 20, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación a los diversos numerales 11, 13, 17, 18, 112, 115, 128, 214, 215, 216, y 262, todos del Código Nacional de Procedimientos Penales, derivado de diversa nota periodística en el que refieren que se encuentran integrando la carpeta de investigación FED/SIDF/UNAIM-CDMX/135/2018-III y/o cualquier otra carpeta o expediente en contra del suscrito

...

II.- Con fundamento a lo dispuesto en el artículo 113 y 218 último párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicito se expida copia de la carpeta de investigación FED/SIDF/UNAIM-CDMX/135/2018-III, en el que el suscrito se encuentra en calidad de imputado..."(Sic)

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: UTAG.

PGR/CT/ACDO/0325/2018: En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad, **confirma** la reserva del pronunciamiento institucional en sentido afirmativo o negativo respecto de la existencia o inexistencia de alguna indagatoria o línea de investigación en contra del solicitante; lo anterior, con fundamento en el artículo 110, fracción VII de la LFTAIP.

Por lo que se proporciona la siguiente prueba de daño:

- I. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público, toda vez que al aseverar la existencia de un procedimiento penal en contra de una persona identificada o identificable, se estaría alertando al probable responsable o a sus cómplices, y con ello, podrían sustraerse de la acción de la justicia, o alterar y destruir los medios de prueba que en su caso estuviere recabando el Ministerio Público de la Federación.

Ahora bien, el negar la existencia o inexistencia de dichos procedimientos, se traduce en que el Ministerio Público de la Federación no lleva a cabo investigaciones por hechos presumiblemente constitutivos de delito en contra de determinada persona, y con ello, se podría continuar con la realización de dichas conductas delictivas con la certeza de que no existe o existió investigación ministerial en su contra.

- II. El riesgo de perjuicio que supone la divulgación de la información supera el interés público general, ya que todas las actuaciones de la Procuraduría General de la República tienen como fin el interés público, representado en la procuración de justicia

a favor de la sociedad, interés que se vería en detrimento a fin de salvaguardar un interés particular.

- III. La reserva del pronunciamiento de esta Procuraduría General de la República sobre la existencia o inexistencia de la información petitionada, no se traduce en un medio restrictivo al derecho de acceso a la información, ni del debido proceso, en razón de la importancia del interés jurídico tutelado en la causal de clasificación antes invocada, ya que en caso de existir alguna investigación en contra de una persona, la Ley en la materia, salvaguarda el derecho de los imputados para su debida defensa y debido proceso.

En ese sentido, si bien toda la información en posesión de las autoridades federales, estatales y municipales, es pública y susceptible de acceso por los particulares; el derecho de acceso a la información se encuentra sujeto a limitaciones por razones de interés público previstas en la normativa correspondiente, es decir, el régimen de excepciones a la publicidad de la información obedece a un criterio de ponderación. En el caso concreto, se actualiza una razón de excepcionalidad, toda vez que existe un riesgo de daño sustancial a los intereses protegidos.

La reserva del pronunciamiento de esta Procuraduría en sentido afirmativo o negativo respecto a la información petitionada, no puede traducirse en un medio restrictivo a su derecho de acceso a la información, en razón que de la naturaleza de dicha información resulta proporcional al atender la importancia del interés jurídico tutelado en la causal de clasificación antes invocada, consistente en la prevención de los delitos como facultad de esta Institución, consistente en la implementación de acciones para evitar su comisión; en ese sentido, en un ejercicio de ponderación de derechos cabe señalar que el interés general se coloca por encima de un interés particular en torno al cual, las numerosas y diversas pretensiones y aspiraciones que son tuteladas por el derecho pueden clasificarse en dos grandes grupos, en el primero, se incluyen las pretensiones que tienden a satisfacer las necesidades específicas de los individuos y grupos sociales; dichas pretensiones constituyen el interés privado, y tienen las características de que, al ser satisfechas, se producen beneficios solamente para determinadas personas.

Por el contrario, en el segundo grupo se encuentran las pretensiones que son compartidas por la sociedad en su conjunto, y cuya satisfacción origina beneficios para todos los integrantes de una colectividad. Estas últimas pretensiones son garantizadas mediante la actividad constante de los órganos del Estado, y para referirse a ellas se utiliza la expresión interés público. Por ello, la protección otorgada al interés público tiene mayor alcance jurídico que la tutela concedida a los intereses privados.

De esta suerte, el interés público es protegido por el Estado no sólo mediante disposiciones legislativas, sino también a través de un gran número de medidas de carácter administrativo que integran una actividad permanente de los poderes públicos, dirigida a satisfacer las necesidades colectivas. En cambio, en relación al interés privado, el Estado se limita a crear las condiciones propias para que los particulares satisfagan sus pretensiones mediante su propio esfuerzo. Así, se colige que el interés

público es el conjunto de pretensiones relacionadas con las necesidades colectivas de los miembros de una comunidad y protegidas mediante la intervención directa y permanente del Estado.

En este tenor, se garantiza el acceso a la información en posesión de los sujetos obligados con determinadas limitaciones, atendiendo a razones de interés público. No obstante, estas limitaciones se deben interpretar de forma restrictiva, con el fin de que únicamente se niegue la información cuando exista un riesgo de daño sustancial a los intereses jurídicamente protegidos, que sea mayor al interés general de tener acceso a lo solicitado; por lo que, para la negativa de la información, es necesario que se demuestre en forma clara y debidamente sustentada el mérito de la reserva o confidencialidad de ésta.

No obstante lo anterior, resulta conveniente traer a colación lo dictado por los Tribunales Colegiados de Circuito, en las siguientes Tesis Jurisprudenciales:

INVESTIGACIÓN INICIAL. LA INTEGRACIÓN DE LA CARPETA RESPECTIVA POR EL MINISTERIO PÚBLICO DURANTE ESTA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO ORAL, POR REGLA GENERAL, ESTÁ EXENTA DEL CONTROL CONSTITUCIONAL MEDIANTE LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, POR NO AFECTAR EL INTERÉS JURÍDICO NI LEGÍTIMO DEL GOBERNADO. Conforme a los artículos 21, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 211, fracción I, inciso a), 212, 213, 214, 216, 217, 218 y 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la etapa de investigación inicial en el procedimiento penal acusatorio oral, tiene por objeto que el Ministerio Público reúna los requisitos o datos de prueba necesarios para el ejercicio de la acción penal, por lo cual, dada su naturaleza jurídica, no puede suspenderse, interrumpirse o cesar en su curso. En efecto, el inicio y trámite de la investigación inicial a cargo del representante social, por regla general, están exentos de cualquier acción tendiente a su suspensión o paralización, incluso, del control constitucional mediante la promoción del juicio de amparo indirecto, porque los actos verificados durante esta etapa, como la integración de la carpeta respectiva por la autoridad ministerial, no irrogan perjuicio al gobernado, pues no trascienden irreparablemente en su esfera jurídica, debido a que son susceptibles de anularse o contrarrestarse cuando el fiscal formule la imputación ante el Juez de control, y se inicie la etapa de investigación complementaria o formalizada, o bien, en caso de que se determine el no ejercicio de la acción penal. Se afirma lo anterior, porque de considerar que los actos dictados durante la sustanciación de la investigación inicial, afectan el interés jurídico o legítimo del gobernado y con ello la procedencia del juicio de amparo, se obstaculizaría injustificadamente la potestad deber del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Así, cuando en el juicio de amparo indirecto se reclama la integración de la carpeta mencionada, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 5o., fracción I, de la ley de la materia, relativa a la falta de interés jurídico y legítimo del quejoso, ya que no le causa una afectación real y actual, directa, ni derivada de su especial situación frente al orden jurídico, aunque esta regla general puede admitir excepciones que deben examinarse en lo particular. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA DÉCIMA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN SALTILLO, COAHUILA. Amparo en revisión 65/2016 (cuaderno auxiliar 413/2016) del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, con apoyo del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila. 26 de mayo de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Héctor Guillermo Maldonado Maldonado. Secretaria: Liliana Carmona Vega.

AUDIENCIA DE CIERRE DE LA INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA Y FORMULACIÓN DE ACUSACIÓN. CONTRA LA OMISIÓN DE REQUERIR LA PRESENCIA FORMAL Y MATERIAL DEL IMPUTADO PARA SU CELEBRACIÓN, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, AL NO SER UN ACTO QUE TENGA UNA EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN POR NO AFECTAR DERECHOS SUSTANTIVOS FUNDAMENTALES. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo dispone que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte; es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de sus derechos, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Por lo que los actos deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo estrictamente procesal, es decir, que produzcan una afectación material de derechos sustantivos del gobernado. En efecto, los derechos afectados por el acto de autoridad deben revestir la categoría de derechos sustantivos, definición antagónica o contraria a los de naturaleza formal o adjetiva, entendidos éstos como aquellos en los que la afectación no es actual, a diferencia de los sustantivos, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, si el acto reclamado es la omisión de requerir la presencia formal y material del imputado para la audiencia de cierre de la investigación complementaria y formulación de acusación, el juicio de amparo indirecto es improcedente conforme a la causal prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el citado artículo 107, fracción V, de la propia ley, al no ser un acto que tenga una ejecución de imposible reparación, porque sus consecuencias no afectan materialmente ninguno de los derechos fundamentales del quejoso tutelados por la Constitución Federal o por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO. Queja 57/2016. 12 de agosto de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Marta Olivia Tello Acuña. Secretaria: Claudia Carolina Monsiváis de León.

ETAPA DE INVESTIGACIÓN INICIAL EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO. EL DERECHO DEL IMPUTADO A OBTENER COPIA DE LA CARPETA EN LA QUE OBREN LOS REGISTROS DE INVESTIGACIÓN, OPERA A PARTIR DE QUE SEA CONVOCADO A LA AUDIENCIA INICIAL. El artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que en la etapa de investigación inicial, los registros de voz e imágenes, documentos, objetos o cosas que obren en la carpeta son estrictamente reservados; carácter que dejan de tener, cuando el imputado se encuentre detenido o comparezca a que se le reciba su entrevista; por lo que a partir de ese momento deberá brindarse el acceso a dichos registros. Por su parte, el artículo 219 del propio código dispone que será hasta que el imputado y su defensor sean convocados a la audiencia inicial que tendrán derecho a obtener copia de los registros de investigación. De esta manera, el derecho de acceso a la carpeta de investigación previsto en el artículo 218 referido, no implica que deba brindarse al imputado copia de dichas constancias, pues ese derecho opera a partir de que se le convoca a la audiencia inicial. Sin que lo anterior implique una interpretación restrictiva y retroactiva respecto a los alcances del derecho de defensa adecuada en el sistema de justicia penal acusatorio, sino que se trata del cumplimiento de las pautas que para su ejercicio estableció el legislador en relación con la expedición de copias, en atención a la calidad de la persona imputada y a la etapa en que se encuentre el procedimiento. En efecto, durante la investigación inicial formalmente no se ha imputado a la persona que se investiga; de ahí que su defensa pueda ejercerse adecuadamente con el solo acceso a la carpeta; lo que no ocurre una vez que se le ha llamado a la audiencia inicial, pues dadas las consecuencias que pudieran derivar -dictado de un auto de vinculación a proceso hace necesario que la defensa se ejerza, en caso de así solicitarlo el imputado, con copias de la carpeta de investigación. SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.

CARPETA DE INVESTIGACIÓN. POR REGLA GENERAL, SU INTEGRACIÓN NO CAUSA UNA AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL EN LA ESFERA JURÍDICA DEL INDICIADO, POR LO QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE, HECHA EXCEPCIÓN CUANDO SE VEA COMPROMETIDO ALGÚN DERECHO HUMANO DEL QUEJOSO. De conformidad con los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XXIII, en relación con el 5o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos que causen una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso. Por otra parte, el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales define a la investigación como una de las etapas del procedimiento penal acusatorio, que a su vez comprende dos fases, la inicial y la complementaria. En éstas, el Ministerio Público se erige como parte y, entre sus obligaciones, está la de recibir las querellas y/o denuncias sobre hechos que puedan constituir un delito y dirigir la investigación, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en ella. De esta manera, si la integración de la carpeta de investigación es consecuencia directa de la noticia criminal cuyo objeto es que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño, entonces, por regla general, su integración no causa una afectación real y actual en la esfera jurídica del indiciado, circunstancia que torna improcedente el juicio de amparo indirecto promovido en su contra, con excepción de los casos en los que se vea comprometido algún derecho humano del quejoso, como podría ser, tratándose de órdenes de cateo, intervención de comunicaciones privadas, toma de muestras de fluido corporal, vello o cabello, extracciones de sangre u otros análogos, lo que deberá analizarse en el caso específico. Estimar lo contrario, entorpecería la facultad del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO. Queja 99/2017. 18 de mayo de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Ramón Rodríguez Minaya. Secretario: José Luis Orduña Aguilera.

CARPETA DE INVESTIGACIÓN. SU INICIO NO PRODUCE UNA AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL EN LA ESFERA JURÍDICA DEL IMPUTADO, POR LO QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE. De conformidad con los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XXIII, en relación con el 5o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos que causen una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso. Por otra parte, el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales define a la investigación como una de las etapas del procedimiento penal, que a su vez comprende dos fases, la inicial y la complementaria. En éstas, el Ministerio Público se erige como parte y, entre sus obligaciones, está la de recibir las querellas y/o denuncias sobre hechos que puedan constituir un delito y dirigir la investigación, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en ella. De esta manera, el inicio de la carpeta de investigación no produce una afectación real y actual en la esfera jurídica del imputado, porque el hecho de que la víctima, ofendido o cualquier persona a quien le conste que se ha cometido un hecho probablemente constitutivo de un delito, denuncie o formule querella contra determinado individuo y, como consecuencia de ello, el Ministerio Público, dentro de sus facultades, tenga que iniciar una carpeta de investigación, no constituye un acto de molestia o privativo contra quien se imputó algún hecho, por lo que el juicio de amparo indirecto promovido en su contra es improcedente. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO.

Queja 99/2017. 18 de mayo de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Ramón Rodríguez Minaya. Secretario: José Luis Orduña Aguilera.

Esta tesis se publicó el viernes 10 de noviembre de 2017 a las 10:21 horas en el Semanario Judicial de la Federación. - - - - -

B.9. Folio 0001700139418

Contenido de la Solicitud:

"solicito se me informe sobre la ¿existencia o no? de alguna investigación que se lleve a cabo relacionado con mis mandantes Don (...), (...), (...), (...), (...); Y (...) a quienes bajo protesta a decir verdad manifiesto representar" (Sic)

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: UTAG.

PGR/CT/ACDO/0326/2018: En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad, **confirma** la reserva del pronunciamiento institucional en sentido afirmativo o negativo respecto de la existencia o inexistencia de alguna indagatoria o línea de investigación en contra del solicitante; lo anterior, con fundamento en el artículo 110, fracción VII de la LFTAIP.

Por lo que se proporciona la siguiente prueba de daño:

- I. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público, toda vez que al aseverar la existencia de un procedimiento penal en contra de una persona identificada o identificable, se estaría alertando al probable responsable o a sus cómplices, y con ello, podrían sustraerse de la acción de la justicia, o alterar y destruir los medios de prueba que en su caso estuviere recabando el Ministerio Público de la Federación.

Ahora bien, el negar la existencia o inexistencia de dichos procedimientos, se traduce en que el Ministerio Público de la Federación no lleva a cabo investigaciones por hechos presumiblemente constitutivos de delito en contra de determinada persona, y con ello, se podría continuar con la realización de dichas conductas delictivas con la certeza de que no existe o existió investigación ministerial en su contra.
- II. El riesgo de perjuicio que supone la divulgación de la información supera el interés público general, ya que todas las actuaciones de la Procuraduría General de la República tienen como fin el interés público, representado en la procuración de justicia a favor de la sociedad, interés que se vería en detrimento a fin de salvaguardar un interés particular.
- III. La reserva del pronunciamiento de esta Procuraduría General de la República sobre la existencia o inexistencia de la información peticionada, no se traduce en un medio restrictivo al derecho de acceso a la información, ni del debido proceso, en razón de la importancia del interés jurídico tutelado en la causal de clasificación antes invocada, ya que en caso de existir alguna investigación en contra de una persona, la Ley en la

materia, salvaguarda el derecho de los imputados para su debida defensa y debido proceso.

En ese sentido, si bien toda la información en posesión de las autoridades federales, estatales y municipales, es pública y susceptible de acceso por los particulares; el derecho de acceso a la información se encuentra sujeto a limitaciones por razones de interés público previstas en la normativa correspondiente, es decir, el régimen de excepciones a la publicidad de la información obedece a un criterio de ponderación. En el caso concreto, se actualiza una razón de excepcionalidad, toda vez que existe un riesgo de daño sustancial a los intereses protegidos.

La reserva del pronunciamiento de esta Procuraduría en sentido afirmativo o negativo respecto a la información petitionada, no puede traducirse en un medio restrictivo a su derecho de acceso a la información, en razón que de la naturaleza de dicha información resulta proporcional al atender la importancia del interés jurídico tutelado en la causal de clasificación antes invocada, consistente en la prevención de los delitos como facultad de esta Institución, consistente en la implementación de acciones para evitar su comisión; en ese sentido, en un ejercicio de ponderación de derechos cabe señalar que el interés general se coloca por encima de un interés particular en torno al cual, las numerosas y diversas pretensiones y aspiraciones que son tuteladas por el derecho pueden clasificarse en dos grandes grupos, en el primero, se incluyen las pretensiones que tienden a satisfacer las necesidades específicas de los individuos y grupos sociales; dichas pretensiones constituyen el interés privado, y tienen las características de que, al ser satisfechas, se producen beneficios solamente para determinadas personas.

Por el contrario, en el segundo grupo se encuentran las pretensiones que son compartidas por la sociedad en su conjunto, y cuya satisfacción origina beneficios para todos los integrantes de una colectividad. Estas últimas pretensiones son garantizadas mediante la actividad constante de los órganos del Estado, y para referirse a ellas se utiliza la expresión interés público. Por ello, la protección otorgada al interés público tiene mayor alcance jurídico que la tutela concedida a los intereses privados.

De esta suerte, el interés público es protegido por el Estado no sólo mediante disposiciones legislativas, sino también a través de un gran número de medidas de carácter administrativo que integran una actividad permanente de los poderes públicos, dirigida a satisfacer las necesidades colectivas. En cambio, en relación al interés privado, el Estado se limita a crear las condiciones propias para que los particulares satisfagan sus pretensiones mediante su propio esfuerzo. Así, se colige que el interés público es el conjunto de pretensiones relacionadas con las necesidades colectivas de los miembros de una comunidad y protegidas mediante la intervención directa y permanente del Estado.

En este tenor, se garantiza el acceso a la información en posesión de los sujetos obligados con determinadas limitaciones, atendiendo a razones de interés público. No obstante, estas limitaciones se deben interpretar de forma restrictiva, con el fin de que únicamente se niegue la información cuando exista un riesgo de daño sustancial a los

intereses jurídicamente protegidos, que sea mayor al interés general de tener acceso a lo solicitado; por lo que, para la negativa de la información, es necesario que se demuestre en forma clara y debidamente sustentada el mérito de la reserva o confidencialidad de ésta.

No obstante lo anterior, resulta conveniente traer a colación lo dictado por los Tribunales Colegiados de Circuito, en las siguientes Tesis Jurisprudenciales:

INVESTIGACIÓN INICIAL. LA INTEGRACIÓN DE LA CARPETA RESPECTIVA POR EL MINISTERIO PÚBLICO DURANTE ESTA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO ORAL, POR REGLA GENERAL, ESTÁ EXENTA DEL CONTROL CONSTITUCIONAL MEDIANTE LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, POR NO AFECTAR EL INTERÉS JURÍDICO NI LEGÍTIMO DEL GOBERNADO. Conforme a los artículos 21, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 211, fracción I, inciso a), 212, 213, 214, 216, 217, 218 y 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la etapa de investigación inicial en el procedimiento penal acusatorio oral, tiene por objeto que el Ministerio Público reúna los requisitos o datos de prueba necesarios para el ejercicio de la acción penal, por lo cual, dada su naturaleza jurídica, no puede suspenderse, interrumpirse o cesar en su curso. En efecto, el inicio y trámite de la investigación inicial a cargo del representante social, por regla general, están exentos de cualquier acción tendiente a su suspensión o paralización, incluso, del control constitucional mediante la promoción del juicio de amparo indirecto, porque los actos verificados durante esta etapa, como la integración de la carpeta respectiva por la autoridad ministerial, no irrogan perjuicio al gobernado, pues no trascienden irreparablemente en su esfera jurídica, debido a que son susceptibles de anularse o contrarrestarse cuando el fiscal formule la imputación ante el Juez de control, y se inicie la etapa de investigación complementaria o formalizada, o bien, en caso de que se determine el no ejercicio de la acción penal. Se afirma lo anterior, porque de considerar que los actos dictados durante la sustanciación de la investigación inicial, afectan el interés jurídico o legítimo del gobernado y con ello la procedencia del juicio de amparo, se obstaculizaría injustificadamente la potestad deber del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Así, cuando en el juicio de amparo indirecto se reclama la integración de la carpeta mencionada, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 5o., fracción I, de la ley de la materia, relativa a la falta de interés jurídico y legítimo del quejoso, ya que no le causa una afectación real y actual, directa, ni derivada de su especial situación frente al orden jurídico, aunque esta regla general puede admitir excepciones que deben examinarse en lo particular. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA DÉCIMA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN SALTILLO, COAHUILA. Amparo en revisión 65/2016 (cuaderno auxiliar 413/2016) del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, con apoyo del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila. 26 de mayo de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Héctor Guillermo Maldonado Maldonado. Secretaria: Liliana Carmona Vega.

AUDIENCIA DE CIERRE DE LA INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA Y FORMULACIÓN DE ACUSACIÓN. CONTRA LA OMISIÓN DE REQUERIR LA PRESENCIA FORMAL Y MATERIAL DEL IMPUTADO PARA SU CELEBRACIÓN, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, AL NO SER UN ACTO QUE TENGA UNA EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN POR NO AFECTAR DERECHOS SUSTANTIVOS FUNDAMENTALES. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo dispone que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los

tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte; es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de sus derechos, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Por lo que los actos deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo estrictamente procesal, es decir, que produzcan una afectación material de derechos sustantivos del gobernado. En efecto, los derechos afectados por el acto de autoridad deben revestir la categoría de derechos sustantivos, definición antagónica o contraria a los de naturaleza formal o adjetiva, entendidos éstos como aquellos en los que la afectación no es actual, a diferencia de los sustantivos, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, si el acto reclamado es la omisión de requerir la presencia formal y material del imputado para la audiencia de cierre de la investigación complementaria y formulación de acusación, el juicio de amparo indirecto es improcedente conforme a la causal prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el citado artículo 107, fracción V, de la propia ley, al no ser un acto que tenga una ejecución de imposible reparación, porque sus consecuencias no afectan materialmente ninguno de los derechos fundamentales del quejoso tutelados por la Constitución Federal o por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO. Queja 57/2016. 12 de agosto de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Marta Olivia Tello Acuña. Secretaria: Claudia Carolina Monsiváis de León.

ETAPA DE INVESTIGACIÓN INICIAL EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO. EL DERECHO DEL IMPUTADO A OBTENER COPIA DE LA CARPETA EN LA QUE OBREN LOS REGISTROS DE INVESTIGACIÓN, OPERA A PARTIR DE QUE SEA CONVOCADO A LA AUDIENCIA INICIAL. El artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que en la etapa de investigación inicial, los registros de voz e imágenes, documentos, objetos o cosas que obren en la carpeta son estrictamente reservados; carácter que dejan de tener, cuando el imputado se encuentre detenido o comparezca a que se le reciba su entrevista; por lo que a partir de ese momento deberá brindarse el acceso a dichos registros. Por su parte, el artículo 219 del propio código dispone que será hasta que el imputado y su defensor sean convocados a la audiencia inicial que tendrán derecho a obtener copia de los registros de investigación. De esta manera, el derecho de acceso a la carpeta de investigación previsto en el artículo 218 referido, no implica que deba brindarse al imputado copia de dichas constancias, pues ese derecho opera a partir de que se le convoca a la audiencia inicial. Sin que lo anterior implique una interpretación restrictiva y retroactiva respecto a los alcances del derecho de defensa adecuada en el sistema de justicia penal acusatorio, sino que se trata del cumplimiento de las pautas que para su ejercicio estableció el legislador en relación con la expedición de copias, en atención a la calidad de la persona imputada y a la etapa en que se encuentre el procedimiento. En efecto, durante la investigación inicial formalmente no se ha imputado a la persona que se investiga; de ahí que su defensa pueda ejercerse adecuadamente con el solo acceso a la carpeta; lo que no ocurre una vez que se le ha llamado a la audiencia inicial, pues dadas las consecuencias que pudieran derivar -dictado de un auto de vinculación a proceso hace necesario que la defensa se ejerza, en caso de así solicitarlo el imputado, con copias de la carpeta de investigación. SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.

CARPETA DE INVESTIGACIÓN. POR REGLA GENERAL, SU INTEGRACIÓN NO CAUSA UNA AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL EN LA ESFERA JURÍDICA DEL INDICIADO, POR LO QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE, HECHA EXCEPCIÓN CUANDO SE VEA COMPROMETIDO ALGÚN DERECHO HUMANO DEL QUEJOSO. De conformidad con los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XXIII, en relación con el 5o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos que causen una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso. Por otra parte, el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales define a la investigación como una de las etapas del procedimiento penal acusatorio,

que a su vez comprende dos fases, la inicial y la complementaria. En éstas, el Ministerio Público se erige como parte y, entre sus obligaciones, está la de recibir las querellas y/o denuncias sobre hechos que puedan constituir un delito y dirigir la investigación, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en ella. De esta manera, si la integración de la carpeta de investigación es consecuencia directa de la noticia criminal cuyo objeto es que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño, entonces, por regla general, su integración no causa una afectación real y actual en la esfera jurídica del indiciado, circunstancia que torna improcedente el juicio de amparo indirecto promovido en su contra, con excepción de los casos en los que se vea comprometido algún derecho humano del quejoso, como podría ser, tratándose de órdenes de cateo, intervención de comunicaciones privadas, toma de muestras de fluido corporal, vello o cabello, extracciones de sangre u otros análogos, lo que deberá analizarse en el caso específico. Estimar lo contrario, entorpecería la facultad del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO. Queja 99/2017. 18 de mayo de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Ramón Rodríguez Minaya. Secretario: José Luis Orduña Aquilera.

CARPETA DE INVESTIGACIÓN. SU INICIO NO PRODUCE UNA AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL EN LA ESFERA JURÍDICA DEL IMPUTADO, POR LO QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE. De conformidad con los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XXIII, en relación con el 5o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos que causen una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso. Por otra parte, el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales define a la investigación como una de las etapas del procedimiento penal, que a su vez comprende dos fases, la inicial y la complementaria. En éstas, el Ministerio Público se erige como parte y, entre sus obligaciones, está la de recibir las querellas y/o denuncias sobre hechos que puedan constituir un delito y dirigir la investigación, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en ella. De esta manera, el inicio de la carpeta de investigación no produce una afectación real y actual en la esfera jurídica del imputado, porque el hecho de que la víctima ofendido o cualquier persona a quien le conste que se ha cometido un hecho probablemente constitutivo de un delito, denuncie o formule querrela contra determinado individuo y, como consecuencia de ello, el Ministerio Público, dentro de sus facultades, tenga que iniciar una carpeta de investigación, no constituye un acto de molestia o privativo contra quien se imputó algún hecho, por lo que el juicio de amparo indirecto promovido en su contra es improcedente.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO.

Queja 99/2017. 18 de mayo de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Ramón Rodríguez Minaya. Secretario: José Luis Orduña Aquilera.

Esta tesis se publicó el viernes 10 de noviembre de 2017 a las 10:21 horas en el Semanario Judicial de la Federación. -----

B.10. Folio 0001700139618

Contenido de la Solicitud:

"...solicito se me informe cual es la Agencia del Ministerio Público de la Federación, de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros, de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, que inicio una carpeta de investigación en la cual el suscrito cuenta con carácter de inculpado, por otro lado que proporcione el número de carpeta de investigación, iniciada en contra del suscrito (...), que señale por cual delito se inició la Carpeta de Investigación en contra del suscrito (...), así como precise quien es la parte denunciante en contra del suscrito (...)" (Sic)

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: UTAG.

PGR/CT/ACDO/0327/2018: En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad, **confirma** la reserva del pronunciamiento institucional en sentido afirmativo o negativo respecto de la existencia o inexistencia de alguna indagatoria o línea de investigación en contra del solicitante; lo anterior, con fundamento en el artículo 110, fracción VII de la LFTAIP.

Por lo que se proporciona la siguiente prueba de daño:

- I. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público, toda vez que al aseverar la existencia de un procedimiento penal en contra de una persona identificada o identificable, se estaría alertando al probable responsable o a sus cómplices, y con ello, podrían sustraerse de la acción de la justicia, o alterar y destruir los medios de prueba que en su caso estuviere recabando el Ministerio Público de la Federación.

Ahora bien, el negar la existencia o inexistencia de dichos procedimientos, se traduce en que el Ministerio Público de la Federación no lleva a cabo investigaciones por hechos presumiblemente constitutivos de delito en contra de determinada persona, y con ello, se podría continuar con la realización de dichas conductas delictivas con la certeza de que no existe o existió investigación ministerial en su contra.

- II. El riesgo de perjuicio que supone la divulgación de la información supera el interés público general, ya que todas las actuaciones de la Procuraduría General de la República tienen como fin el interés público, representado en la procuración de justicia a favor de la sociedad, interés que se vería en detrimento a fin de salvaguardar un interés particular.
- III. La reserva del pronunciamiento de esta Procuraduría General de la República sobre la existencia o inexistencia de la información peticionada, no se traduce en un medio

restrictivo al derecho de acceso a la información, ni del debido proceso, en razón de la importancia del interés jurídico tutelado en la causal de clasificación antes invocada, ya que en caso de existir alguna investigación en contra de una persona, la Ley en la materia, salvaguarda el derecho de los imputados para su debida defensa y debido proceso.

En ese sentido, si bien toda la información en posesión de las autoridades federales, estatales y municipales, es pública y susceptible de acceso por los particulares; el derecho de acceso a la información se encuentra sujeto a limitaciones por razones de interés público previstas en la normativa correspondiente, es decir, el régimen de excepciones a la publicidad de la información obedece a un criterio de ponderación. En el caso concreto, se actualiza una razón de excepcionalidad, toda vez que existe un riesgo de daño sustancial a los intereses protegidos.

La reserva del pronunciamiento de esta Procuraduría en sentido afirmativo o negativo respecto a la información petitionada, no puede traducirse en un medio restrictivo a su derecho de acceso a la información, en razón que de la naturaleza de dicha información resulta proporcional al atender la importancia del interés jurídico tutelado en la causal de clasificación antes invocada, consistente en la prevención de los delitos como facultad de esta Institución, consistente en la implementación de acciones para evitar su comisión; en ese sentido, en un ejercicio de ponderación de derechos cabe señalar que el interés general se coloca por encima de un interés particular en torno al cual, las numerosas y diversas pretensiones y aspiraciones que son tuteladas por el derecho pueden clasificarse en dos grandes grupos, en el primero, se incluyen las pretensiones que tienden a satisfacer las necesidades específicas de los individuos y grupos sociales; dichas pretensiones constituyen el interés privado, y tienen las características de que, al ser satisfechas, se producen beneficios solamente para determinadas personas.

Por el contrario, en el segundo grupo se encuentran las pretensiones que son compartidas por la sociedad en su conjunto, y cuya satisfacción origina beneficios para todos los integrantes de una colectividad. Estas últimas pretensiones son garantizadas mediante la actividad constante de los órganos del Estado, y para referirse a ellas se utiliza la expresión interés público. Por ello, la protección otorgada al interés público tiene mayor alcance jurídico que la tutela concedida a los intereses privados.

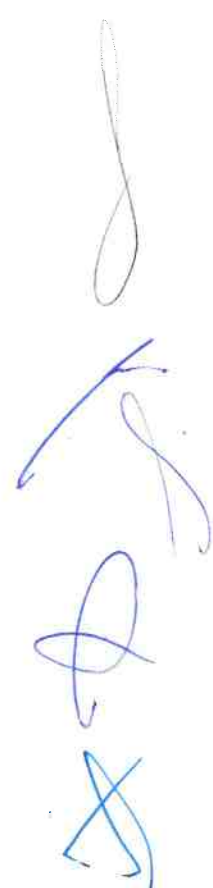
De esta suerte, el interés público es protegido por el Estado no sólo mediante disposiciones legislativas, sino también a través de un gran número de medidas de carácter administrativo que integran una actividad permanente de los poderes públicos, dirigida a satisfacer las necesidades colectivas. En cambio, en relación al interés privado, el Estado se limita a crear las condiciones propias para que los particulares satisfagan sus pretensiones mediante su propio esfuerzo. Así, se colige que el interés público es el conjunto de pretensiones relacionadas con las necesidades colectivas de los miembros de una comunidad y protegidas mediante la intervención directa y permanente del Estado.

En este tenor, se garantiza el acceso a la información en posesión de los sujetos obligados con determinadas limitaciones, atendiendo a razones de interés público. No obstante, estas limitaciones se deben interpretar de forma restrictiva, con el fin de que únicamente se niegue la información cuando exista un riesgo de daño sustancial a los intereses jurídicamente protegidos, que sea mayor al interés general de tener acceso a lo solicitado; por lo que, para la negativa de la información, es necesario que se demuestre en forma clara y debidamente sustentada el mérito de la reserva o confidencialidad de ésta.

No obstante lo anterior, resulta conveniente traer a colación lo dictado por los Tribunales Colegiados de Circuito, en las siguientes Tesis Jurisprudenciales:

INVESTIGACIÓN INICIAL. LA INTEGRACIÓN DE LA CARPETA RESPECTIVA POR EL MINISTERIO PÚBLICO DURANTE ESTA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO ORAL, POR REGLA GENERAL, ESTÁ EXENTA DEL CONTROL CONSTITUCIONAL MEDIANTE LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, POR NO AFECTAR EL INTERÉS JURÍDICO NI LEGÍTIMO DEL GOBERNADO. Conforme a los artículos 21, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 211, fracción I, inciso a), 212, 213, 214, 216, 217, 218 y 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la etapa de investigación inicial en el procedimiento penal acusatorio oral, tiene por objeto que el Ministerio Público reúna los requisitos o datos de prueba necesarios para el ejercicio de la acción penal, por lo cual, dada su naturaleza jurídica, no puede suspenderse, interrumpirse o cesar en su curso. En efecto, el inicio y trámite de la investigación inicial a cargo del representante social, por regla general, están exentos de cualquier acción tendiente a su suspensión o paralización, incluso, del control constitucional mediante la promoción del juicio de amparo indirecto, porque los actos verificados durante esta etapa, como la integración de la carpeta respectiva por la autoridad ministerial, no irrogan perjuicio al gobernado, pues no trascienden irreparablemente en su esfera jurídica, debido a que son susceptibles de anularse o contrarrestarse cuando el fiscal formule la imputación ante el Juez de control, y se inicie la etapa de investigación complementaria o formalizada, o bien, en caso de que se determine el no ejercicio de la acción penal. Se afirma lo anterior, porque de considerar que los actos dictados durante la sustanciación de la investigación inicial, afectan el interés jurídico o legítimo del gobernado y con ello la procedencia del juicio de amparo, se obstaculizaría injustificadamente la potestad deber del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Así, cuando en el juicio de amparo indirecto se reclama la integración de la carpeta mencionada, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 5o., fracción I, de la ley de la materia, relativa a la falta de interés jurídico y legítimo del quejoso, ya que no le causa una afectación real y actual, directa, ni derivada de su especial situación frente al orden jurídico, aunque esta regla general puede admitir excepciones que deben examinarse en lo particular. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA DÉCIMA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN SALTILLO, COAHUILA. Amparo en revisión 65/2016 (cuaderno auxiliar 413/2016) del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, con apoyo del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila. 26 de mayo de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Héctor Guillermo Maldonado Maldonado. Secretaria: Liliana Carmona Vega.

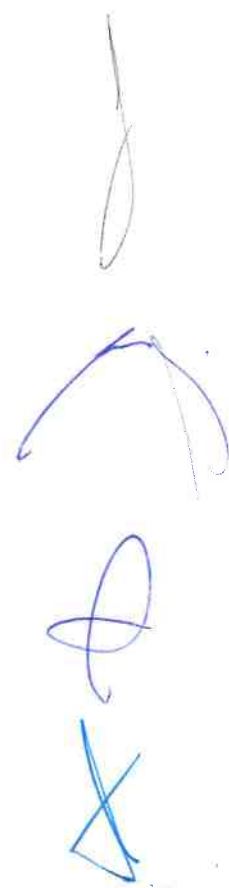
AUDIENCIA DE CIERRE DE LA INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA Y FORMULACIÓN DE ACUSACIÓN. CONTRA LA OMISIÓN DE REQUERIR LA PRESENCIA FORMAL Y MATERIAL DEL IMPUTADO PARA SU CELEBRACIÓN, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, AL NO SER UN ACTO QUE TENGA UNA EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN POR NO



AFECTAR DERECHOS SUSTANTIVOS FUNDAMENTALES. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo dispone que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte; es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de sus derechos, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Por lo que los actos deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo estrictamente procesal, es decir, que produzcan una afectación material de derechos sustantivos del gobernado. En efecto, los derechos afectados por el acto de autoridad deben revestir la categoría de derechos sustantivos, definición antagónica o contraria a los de naturaleza formal o adjetiva, entendidos éstos como aquellos en los que la afectación no es actual, a diferencia de los sustantivos, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, si el acto reclamado es la omisión de requerir la presencia formal y material del imputado para la audiencia de cierre de la investigación complementaria y formulación de acusación, el juicio de amparo indirecto es improcedente conforme a la causal prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el citado artículo 107, fracción V, de la propia ley, al no ser un acto que tenga una ejecución de imposible reparación, porque sus consecuencias no afectan materialmente ninguno de los derechos fundamentales del quejoso tutelados por la Constitución Federal o por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO. Queja 57/2016. 12 de agosto de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Marta Olivia Tello Acuña. Secretaria: Claudia Carolina Monsiváis de León.

ETAPA DE INVESTIGACIÓN INICIAL EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO. EL DERECHO DEL IMPUTADO A OBTENER COPIA DE LA CARPETA EN LA QUE OBREN LOS REGISTROS DE INVESTIGACIÓN, OPERA A PARTIR DE QUE SEA CONVOCADO A LA AUDIENCIA INICIAL. El artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que en la etapa de investigación inicial, los registros de voz e imágenes, documentos, objetos o cosas que obren en la carpeta son estrictamente reservados; carácter que dejan de tener, cuando el imputado se encuentre detenido o comparezca a que se le reciba su entrevista; por lo que a partir de ese momento deberá brindarse el acceso a dichos registros. Por su parte, el artículo 219 del propio código dispone que será hasta que el imputado y su defensor sean convocados a la audiencia inicial que tendrán derecho a obtener copia de los registros de investigación. De esta manera, el derecho de acceso a la carpeta de investigación previsto en el artículo 218 referido, no implica que deba brindarse al imputado copia de dichas constancias, pues ese derecho opera a partir de que se le convoca a la audiencia inicial. Sin que lo anterior implique una interpretación restrictiva y retroactiva respecto a los alcances del derecho de defensa adecuada en el sistema de justicia penal acusatorio, sino que se trata del cumplimiento de las pautas que para su ejercicio estableció el legislador en relación con la expedición de copias, en atención a la calidad de la persona imputada y a la etapa en que se encuentre el procedimiento. En efecto, durante la investigación inicial formalmente no se ha imputado a la persona que se investiga; de ahí que su defensa pueda ejercerse adecuadamente con el solo acceso a la carpeta; lo que no ocurre una vez que se le ha llamado a la audiencia inicial, pues dadas las consecuencias que pudieran derivar -dictado de un auto de vinculación a proceso hace necesario que la defensa se ejerza, en caso de así solicitarlo el imputado, con copias de la carpeta de investigación. SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.

CARPETA DE INVESTIGACIÓN. POR REGLA GENERAL, SU INTEGRACIÓN NO CAUSA UNA AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL EN LA ESFERA JURÍDICA DEL INDICIADO, POR LO QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE, HECHA EXCEPCIÓN CUANDO SE VEA COMPROMETIDO ALGÚN DERECHO HUMANO DEL QUEJOSO. De conformidad con los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y



61, fracción XXIII, en relación con el 5o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos que causen una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso. Por otra parte, el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales define a la investigación como una de las etapas del procedimiento penal acusatorio, que a su vez comprende dos fases, la inicial y la complementaria. En éstas, el Ministerio Público se erige como parte y, entre sus obligaciones, está la de recibir las querellas y/o denuncias sobre hechos que puedan constituir un delito y dirigir la investigación, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en ella. De esta manera, si la integración de la carpeta de investigación es consecuencia directa de la noticia criminal cuyo objeto es que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño, entonces, por regla general, su integración no causa una afectación real y actual en la esfera jurídica del indiciado, circunstancia que torna improcedente el juicio de amparo indirecto promovido en su contra, con excepción de los casos en los que se vea comprometido algún derecho humano del quejoso, como podría ser, tratándose de órdenes de cateo, intervención de comunicaciones privadas, toma de muestras de fluido corporal, vello o cabello, extracciones de sangre u otros análogos, lo que deberá analizarse en el caso específico. Estimar lo contrario, entorpecería la facultad del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO. Queja 99/2017. 18 de mayo de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Ramón Rodríguez Minaya. Secretario: José Luis Orduña Aguilera.

CARPETA DE INVESTIGACIÓN. SU INICIO NO PRODUCE UNA AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL EN LA ESFERA JURÍDICA DEL IMPUTADO, POR LO QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE. De conformidad con los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XXIII, en relación con el 5o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos que causen una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso. Por otra parte, el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales define a la investigación como una de las etapas del procedimiento penal, que a su vez comprende dos fases, la inicial y la complementaria. En éstas, el Ministerio Público se erige como parte y, entre sus obligaciones, está la de recibir las querellas y/o denuncias sobre hechos que puedan constituir un delito y dirigir la investigación, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en ella. De esta manera, el inicio de la carpeta de investigación no produce una afectación real y actual en la esfera jurídica del imputado, porque el hecho de que la víctima, ofendido o cualquier persona a quien le conste que se ha cometido un hecho probablemente constitutivo de un delito, denuncie o formule querrela contra determinado individuo y, como consecuencia de ello, el Ministerio Público, dentro de sus facultades, tenga que iniciar una carpeta de investigación, no constituye un acto de molestia o privativo contra quien se imputó algún hecho, por lo que el juicio de amparo indirecto promovido en su contra es improcedente. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO.

Queja 99/2017. 18 de mayo de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Ramón Rodríguez Minaya. Secretario: José Luis Orduña Aguilera.

Esta tesis se publicó el viernes 10 de noviembre de 2017 a las 10:21 horas en el Semanario Judicial de la Federación. - - - - -

- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -

B.11. Folio 0001700140718

Contenido de la Solicitud:

"(...) con fundamento en el artículo 6 Constitucional y los artículos 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, solicito a esa Procuraduría General de la República, me informe: Si respecto del periodo comprendido del 1 de diciembre de 2012 al 26 de agosto de 2015, tiempo en el que fui Titular de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) o cualquier otro organismo público o privado, ha interpuesto denuncias en mi contra, originadas por la gestión que desempeñé en dicha Secretaría de Estado. Asimismo, me informe si la propia Procuraduría General de la República actuando de oficio, ha abierto carpetas de investigación por la gestión que desempeñé en dicha Secretaría de Estado, en el periodo antes señalado. La respuesta que espero recibir de esa Procuraduría, se concreta en señalar lo siguiente SÍ o NO. En caso afirmativo deseo saber ¿cuántas denuncias existen en mi contra? Aclaro anticipadamente y a efecto de no confundir lo solicitado, que no pretendo violentar la secrecía o procedimiento penal en caso de que exista, ni tampoco estoy solicitando algún tipo de documentación o contenido específico relacionado con alguna carpeta de investigación, por lo cual no existe argumento alguno para poder informarme SI hay o NO denuncias en mi contra, ya que es mi derecho Constitucional como individuo conocer dicha información. De igual manera, señalo categóricamente que con la respuesta que otorgue esa Procuraduría General de la República, NO se viola ninguna de las causales de reserva contenidas en el artículo 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Por último, pido al Comité de Transparencia de esa Procuraduría, que NO señalen como reservada la información que solicito, ya que el artículo 115 de la Ley General de la materia, determina que no puede invocarse con carácter de reservado, la información tratándose de violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad o bien, cuando la información esté relacionada con actos de corrupción de acuerdo a las leyes aplicables. En mi caso particular, se han violentado mis derechos humanos al señalar diversos medios de comunicación, que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó desvíos de recursos durante mi gestión, motivo por el cual, se puso en entredicho mi honestidad, honorabilidad, imagen, dañando mi reputación como persona y como servidora pública." (Sic)

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: UTAG.

PGR/CT/ACDO/0328/2018: En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad, **confirma** la reserva del pronunciamiento institucional en sentido afirmativo o negativo respecto de la existencia o inexistencia de alguna indagatoria o línea de investigación en contra del solicitante; lo anterior, con fundamento en el artículo 110, fracción VII de la LFTAIP.

Por lo que se proporciona la siguiente prueba de daño:

- I. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público, toda vez que al aseverar la existencia de un procedimiento penal en contra de una persona identificada o identificable, se estaría alertando al probable responsable o a sus cómplices, y con ello, podrían sustraerse de la acción de la justicia, o alterar y destruir los medios de prueba que en su caso estuviere recabando el Ministerio Público de la Federación.

Ahora bien, el negar la existencia o inexistencia de dichos procedimientos, se traduce en que el Ministerio Público de la Federación no lleva a cabo investigaciones por hechos presumiblemente constitutivos de delito en contra de determinada persona, y con ello, se podría continuar con la realización de dichas conductas delictivas con la certeza de que no existe o existió investigación ministerial en su contra.

- II. El riesgo de perjuicio que supone la divulgación de la información supera el interés público general, ya que todas las actuaciones de la Procuraduría General de la República tienen como fin el interés público, representado en la procuración de justicia a favor de la sociedad, interés que se vería en detrimento a fin de salvaguardar un interés particular.
- III. La reserva del pronunciamiento de esta Procuraduría General de la República sobre la existencia o inexistencia de la información petitionada, no se traduce en un medio restrictivo al derecho de acceso a la información, ni del debido proceso, en razón de la importancia del interés jurídico tutelado en la causal de clasificación antes invocada, ya que en caso de existir alguna investigación en contra de una persona, la Ley en la materia, salvaguarda el derecho de los imputados para su debida defensa y debido proceso.

En ese sentido, si bien toda la información en posesión de las autoridades federales, estatales y municipales, es pública y susceptible de acceso por los particulares; el derecho de acceso a la información se encuentra sujeto a limitaciones por razones de interés público previstas en la normativa correspondiente, es decir, el régimen de excepciones a la publicidad de la información obedece a un criterio de ponderación. En el caso concreto, se actualiza una razón de excepcionalidad, toda vez que existe un riesgo de daño sustancial a los intereses protegidos.

La reserva del pronunciamiento de esta Procuraduría en sentido afirmativo o negativo respecto a la información petitionada, no puede traducirse en un medio restrictivo a su derecho de acceso a la información, en razón que de la naturaleza de dicha información resulta proporcional al atender la importancia del interés jurídico tutelado en la causal de clasificación antes invocada, consistente en la prevención de los delitos como facultad de esta Institución, consistente en la implementación de acciones para evitar su comisión; en ese sentido, en un ejercicio de ponderación de derechos cabe señalar que el interés general se coloca por encima de un interés particular en torno al cual, las numerosas y diversas pretensiones y aspiraciones que son tuteladas por el derecho pueden clasificarse en dos grandes grupos, en el primero, se incluyen las pretensiones que tienden a satisfacer las necesidades específicas de los individuos y grupos sociales; dichas pretensiones constituyen el interés privado, y tienen las

características de que, al ser satisfechas, se producen beneficios solamente para determinadas personas.

Por el contrario, en el segundo grupo se encuentran las pretensiones que son compartidas por la sociedad en su conjunto, y cuya satisfacción origina beneficios para todos los integrantes de una colectividad. Estas últimas pretensiones son garantizadas mediante la actividad constante de los órganos del Estado, y para referirse a ellas se utiliza la expresión interés público. Por ello, la protección otorgada al interés público tiene mayor alcance jurídico que la tutela concedida a los intereses privados.

De esta suerte, el interés público es protegido por el Estado no sólo mediante disposiciones legislativas, sino también a través de un gran número de medidas de carácter administrativo que integran una actividad permanente de los poderes públicos, dirigida a satisfacer las necesidades colectivas. En cambio, en relación al interés privado, el Estado se limita a crear las condiciones propias para que los particulares satisfagan sus pretensiones mediante su propio esfuerzo. Así, se colige que el interés público es el conjunto de pretensiones relacionadas con las necesidades colectivas de los miembros de una comunidad y protegidas mediante la intervención directa y permanente del Estado.

En este tenor, se garantiza el acceso a la información en posesión de los sujetos obligados con determinadas limitaciones, atendiendo a razones de interés público. No obstante, estas limitaciones se deben interpretar de forma restrictiva, con el fin de que únicamente se niegue la información cuando exista un riesgo de daño sustancial a los intereses jurídicamente protegidos, que sea mayor al interés general de tener acceso a lo solicitado; por lo que, para la negativa de la información, es necesario que se demuestre en forma clara y debidamente sustentada el mérito de la reserva o confidencialidad de ésta.

No obstante lo anterior, resulta conveniente traer a colación lo dictado por los Tribunales Colegiados de Circuito, en las siguientes Tesis Jurisprudenciales:

INVESTIGACIÓN INICIAL. LA INTEGRACIÓN DE LA CARPETA RESPECTIVA POR EL MINISTERIO PÚBLICO DURANTE ESTA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO ORAL, POR REGLA GENERAL, ESTÁ EXENTA DEL CONTROL CONSTITUCIONAL MEDIANTE LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, POR NO AFECTAR EL INTERÉS JURÍDICO NI LEGÍTIMO DEL GOBERNADO. Conforme a los artículos 21, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 211, fracción I, inciso a), 212, 213, 214, 216, 217, 218 y 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la etapa de investigación inicial en el procedimiento penal acusatorio oral, tiene por objeto que el Ministerio Público reúna los requisitos o datos de prueba necesarios para el ejercicio de la acción penal, por lo cual, dada su naturaleza jurídica, no puede suspenderse, interrumpirse o cesar en su curso. En efecto, el inicio y trámite de la investigación inicial a cargo del representante social, por regla general, están exentos de cualquier acción tendiente a su suspensión o paralización, incluso, del control constitucional mediante la promoción del juicio de amparo indirecto, porque los actos verificados durante esta etapa, como la integración de la carpeta respectiva por la autoridad ministerial, no irrogan perjuicio al gobernado, pues no trascienden irreparablemente en su esfera jurídica, debido a que son susceptibles de anularse o contrarrestarse cuando el fiscal formule la imputación ante el Juez de control, y se inicie la etapa de investigación complementaria o formalizada, o bien,

en caso de que se determine el no ejercicio de la acción penal. Se afirma lo anterior, porque de considerar que los actos dictados durante la sustanciación de la investigación inicial, afectan el interés jurídico o legítimo del gobernado y con ello la procedencia del juicio de amparo, se obstaculizaría injustificadamente la potestad deber del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Así, cuando en el juicio de amparo indirecto se reclama la integración de la carpeta mencionada, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 5o., fracción I, de la ley de la materia, relativa a la falta de interés jurídico y legítimo del quejoso, ya que no le causa una afectación real y actual, directa, ni derivada de su especial situación frente al orden jurídico, aunque esta regla general puede admitir excepciones que deben examinarse en lo particular. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA DÉCIMA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN SALTILLO, COAHUILA. Amparo en revisión 65/2016 (cuaderno auxiliar 413/2016) del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, con apoyo del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila. 26 de mayo de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Héctor Guillermo Maldonado Maldonado. Secretaria: Liliana Carmona Vega.

AUDIENCIA DE CIERRE DE LA INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA Y FORMULACIÓN DE ACUSACIÓN. CONTRA LA OMISIÓN DE REQUERIR LA PRESENCIA FORMAL Y MATERIAL DEL IMPUTADO PARA SU CELEBRACIÓN, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, AL NO SER UN ACTO QUE TENGA UNA EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN POR NO AFECTAR DERECHOS SUSTANTIVOS FUNDAMENTALES. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo dispone que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte; es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de sus derechos, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Por lo que los actos deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo estrictamente procesal, es decir, que produzcan una afectación material de derechos sustantivos del gobernado. En efecto, los derechos afectados por el acto de autoridad deben revestir la categoría de derechos sustantivos, definición antagónica o contraria a los de naturaleza formal o adjetiva, entendidos éstos como aquellos en los que la afectación no es actual, a diferencia de los sustantivos, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, si el acto reclamado es la omisión de requerir la presencia formal y material del imputado para la audiencia de cierre de la investigación complementaria y formulación de acusación, el juicio de amparo indirecto es improcedente conforme a la causal prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el citado artículo 107, fracción V, de la propia ley, al no ser un acto que tenga una ejecución de imposible reparación, porque sus consecuencias no afectan materialmente ninguno de los derechos fundamentales del quejoso tutelados por la Constitución Federal o por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO. Queja 57/2016. 12 de agosto de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Marta Olivia Tello Acuña. Secretaria: Claudia Carolina Monsiváis de León.

ETAPA DE INVESTIGACIÓN INICIAL EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO. EL DERECHO DEL IMPUTADO A OBTENER COPIA DE LA CARPETA EN LA QUE OBTIENEN LOS REGISTROS DE INVESTIGACIÓN, OPERA A PARTIR DE QUE SEA CONVOCADO A LA AUDIENCIA INICIAL. El artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que en la etapa de investigación inicial, los registros de voz e imágenes, documentos, objetos o cosas que



obren en la carpeta son estrictamente reservados; carácter que dejan de tener, cuando el imputado se encuentre detenido o comparezca a que se le reciba su entrevista; por lo que a partir de ese momento deberá brindarse el acceso a dichos registros. Por su parte, el artículo 219 del propio código dispone que será hasta que el imputado y su defensor sean convocados a la audiencia inicial que tendrán derecho a obtener copia de los registros de investigación. De esta manera, el derecho de acceso a la carpeta de investigación previsto en el artículo 218 referido, no implica que deba brindarse al imputado copia de dichas constancias, pues ese derecho opera a partir de que se le convoca a la audiencia inicial. Sin que lo anterior implique una interpretación restrictiva y retroactiva respecto a los alcances del derecho de defensa adecuada en el sistema de justicia penal acusatorio, sino que se trata del cumplimiento de las pautas que para su ejercicio estableció el legislador en relación con la expedición de copias, en atención a la calidad de la persona imputada y a la etapa en que se encuentre el procedimiento. En efecto, durante la investigación inicial formalmente no se ha imputado a la persona que se investiga; de ahí que su defensa pueda ejercerse adecuadamente con el solo acceso a la carpeta; lo que no ocurre una vez que se le ha llamado a la audiencia inicial, pues dadas las consecuencias que pudieran derivar -dictado de un auto de vinculación a proceso hace necesario que la defensa se ejerza, en caso de así solicitarlo el imputado, con copias de la carpeta de investigación. SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.

CARPETA DE INVESTIGACIÓN. POR REGLA GENERAL, SU INTEGRACIÓN NO CAUSA UNA AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL EN LA ESFERA JURÍDICA DEL INDICIADO, POR LO QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE, HECHA EXCEPCIÓN CUANDO SE VEA COMPROMETIDO ALGÚN DERECHO HUMANO DEL QUEJOSO. De conformidad con los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XXIII, en relación con el 5o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos que causen una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso. Por otra parte, el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales define a la investigación como una de las etapas del procedimiento penal acusatorio, que a su vez comprende dos fases, la inicial y la complementaria. En éstas, el Ministerio Público se erige como parte y, entre sus obligaciones, está la de recibir las querellas y/o denuncias sobre hechos que puedan constituir un delito y dirigir la investigación, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en ella. De esta manera, si la integración de la carpeta de investigación es consecuencia directa de la noticia criminal cuyo objeto es que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño, entonces, por regla general, su integración no causa una afectación real y actual en la esfera jurídica del indiciado, circunstancia que torna improcedente el juicio de amparo indirecto promovido en su contra, con excepción de los casos en los que se vea comprometido algún derecho humano del quejoso, como podría ser, tratándose de órdenes de cateo, intervención de comunicaciones privadas, toma de muestras de fluido corporal, vello o cabello, extracciones de sangre u otros análogos, lo que deberá analizarse en el caso específico. Estimar lo contrario, entorpecería la facultad del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO. Queja 99/2017. 18 de mayo de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Ramón Rodríguez Minaya. Secretario: José Luis Orduña Aguilera.

CARPETA DE INVESTIGACIÓN. SU INICIO NO PRODUCE UNA AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL EN LA ESFERA JURÍDICA DEL IMPUTADO, POR LO QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE. De conformidad con los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XXIII, en relación con el 5o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos que causen una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso. Por otra parte, el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales define a la investigación como



una de las etapas del procedimiento penal, que a su vez comprende dos fases, la inicial y la complementaria. En éstas, el Ministerio Público se erige como parte y, entre sus obligaciones, está la de recibir las querellas y/o denuncias sobre hechos que puedan constituir un delito y dirigir la investigación, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en ella. De esta manera, el inicio de la carpeta de investigación no produce una afectación real y actual en la esfera jurídica del imputado, porque el hecho de que la víctima, ofendido o cualquier persona a quien le conste que se ha cometido un hecho probablemente constitutivo de un delito, denuncie o formule querella contra determinado individuo y, como consecuencia de ello, el Ministerio Público, dentro de sus facultades, tenga que iniciar una carpeta de investigación, no constituye un acto de molestia o privativo contra quien se imputó algún hecho, por lo que el juicio de amparo indirecto promovido en su contra es improcedente.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO.

Queja 99/2017. 18 de mayo de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Ramón Rodríguez Minaya. Secretario: José Luis Orduña Aquilera.

Esta tesis se publicó el viernes 10 de noviembre de 2017 a las 10:21 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

C. Solicitudes de acceso a la información en las que se analiza la versión pública de la información requerida:

C.1. Folio 0001700103018

Contenido de la Solicitud: "SOLICITO TODOS LO CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Y O ADQUISICION DE VEHICULOS EN CUALQUIER MODALIDAD O AFINES EN EL PERIODO COMPRENDIDO DESDE 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 (ULTIMOS 11 AÑOS) PERIODO DE 2008 A 2018.
GRACIAS!" (Sic)

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: OM, SEIDO, CENAPI, SDHPDSC, SEIDF, AIC, CGSP y UEAF.

PGR/CT/ACDO/0329/2018: En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad, **confirma** la puesta a disposición de la versión pública de los contratos de arrendamiento y o adquisición de vehículos localizados por esta Institución, resguardando en los mismos información clasificada como reservada y confidencial de conformidad con el artículo 110, fracciones I y V; y 113, fracción I de la Ley de la materia.

Por lo que, a fin de reforzar las causales de clasificación citadas, se exponen las siguientes pruebas de daño:

Artículo 110, fracción I:

- I. Existe un riesgo real, demostrable e identificable, ya que divulgar la información relacionada con los contratos requeridos implica revelar parte medular del estado de fuerza de esta Institución vulnerando la capacidad de despliegue y operación, en consecuencia la entrega de la información vulneraría los procedimientos, métodos, fuentes o especificaciones técnicas, utilizadas para combatir a las organizaciones delictivas, es decir, se constituiría un riesgo en las labores de inteligencia criminal, repercutiendo la seguridad pública y nacional, máxime que dicha información puede ser utilizada por organizaciones delictivas para evadir la justicia y, por ende, poner en riesgo la vida, la salud, la integridad y el ejercicio de los derechos de las personas.
- II. Existe un riesgo de perjuicio, ya que en virtud de las actuales condiciones que operan en el país, se desprende que hacerse del conocimiento público la información en comento, atentaría directamente en las labores implementadas por esta Institución, poniendo en peligro la actividad de inteligencia criminal que conforma el sector de Seguridad Pública y Nacional en sus diferentes instancias, lo cual puede dificultar las estrategias para el logro de la misma, en razón que permitiría a grupos que realizan

conductas ilícitas utilizar dicha información; lo que se traduce en un perjuicio a la procuración de justicia a favor de la sociedad en atención de un interés particular, toda vez que pondría en desventaja la capacidad de reacción a cargo de esta Institución Federal, debido a que las diferentes organizaciones delictivas pueden allegarse de datos que sean utilizados en su beneficio.

- III. En cuanto al principio de proporcionalidad, el otorgar la información referente a las investigaciones relacionadas con los procedimientos, métodos, fuentes o especificaciones técnicas relacionadas a las líneas estratégicas respecto a la información objeto de reserva, comprometería la seguridad nacional al poner en peligro las acciones implementadas por esta autoridad, exponiendo a su vez la integridad y el ejercicio de los derechos de las personas, concluyendo así que la reserva de mérito no puede traducirse en un medio restrictivo al derecho de acceso, en razón que la naturaleza de la información multicitada resulta proporcional al atender la importancia del interés jurídico tutelado, es decir, un ejercicio de ponderación de derechos.

En otras palabras, el interés general se coloca por encima de un interés particular en torno al cual, las numerosas y diversas pretensiones y aspiraciones que son tuteladas por el derecho pueden clasificarse en dos grupos, en el primero, se incluyen las pretensiones que tienden a satisfacer las necesidades específicas de los individuos, es decir, dichas pretensiones constituyen el interés privado, y tienen la característica de que, al ser satisfechas, se producen beneficios solamente para determinadas personas; no obstante, en el segundo grupo se encuentran las pretensiones que son compartidas por la sociedad en su conjunto, y cuya satisfacción origina beneficios para todos los integrantes de una colectividad, siendo éstas últimas garantizadas mediante la colectividad constante de los órganos del Estado, como lo es esta representación social, y para referirse a ellas se utiliza la expresión interés público, de ahí que se tenga mayor alcance jurídico que la tutela concedida a los intereses privados.

Artículo 110, fracción V:

- I. Que el divulgar cierta información contenida dentro de los contratos permitiría identificar el número de unidades con que cuenta esta Institución; así como la distribución de los mismos, lo que propiciaría la identificación y localización de servidores públicos sustantivos perteneciente a esta Institución, existiendo con ello un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público, en razón que la misma permite identificar y posiblemente hacer reconocibles para algunos grupos delictivos a ciertas personas que, por razones de su cargo, desempeñen funciones estrechamente relacionadas con facultades de prevención y persecución de los delitos federales, circunstancia que permitiría atentar contra su vida, seguridad o su salud, o bien las de su familia o entorno social.
- II. Que derivado de que las actuaciones de la Procuraduría General de la República tienen como fin el interés público o general, la investigación y persecución de delitos, por conducto del Ministerio Público Federal y demás personal que lo auxilian, de conformidad con lo establecido en la normatividad aplicable; se desprende que el divulgar la información requerida, superaría el interés Público, es decir, provocaría un

riesgo de perjuicio toda vez que se estarían proporcionando indicios y demás elementos que afectarían directamente el curso o el resultado de las investigaciones a cargo de esta Institución Federal, al hacer públicos datos que permitirían localizar a los servidores públicos que realizan actividades sustantivas, en razón que se podría atentar contra su vida, seguridad o su salud, o bien las de su familia o entorno social, derivado que grupos delincuenciales que tengan interés alguno sobre las actuaciones de la indagatoria, atentarían en contra de ellos.

- III. Que atendiendo al principio de proporcionalidad, se desprende que el reservar información relativa a datos de personal sustantivo de la Institución, no se traduce en un medio restrictivo de acceso a la información, en virtud que dicha reserva prevalece al proteger la vida, la seguridad y la salud, como bien jurídico tutelado, de dichos funcionarios, mismos que garantizan en todo momento una procuración de justicia federal, eficaz y eficiente, apegada a los principios de legalidad, certeza jurídica y respeto a los derechos humanos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y demás Leyes y Tratados Internacionales.

Aunado a lo anteriormente expuesto, es importante recordar que dentro de los instrumentos jurídicos que nos ocupan, existen datos personales que serán resguardados, los cuales actualizan la hipótesis de información clasificada como confidencial, independientemente del medio por el cual se haya obtenido, sin necesidad de estar sujeta a temporalidad alguna y a la que solo podrán tener acceso los titulares de la información o sus representantes legales.

Lo mencionado, encuentra sustento legal dentro de lo establecido en la fracción I del artículo 113 de la LFTAIP, mismo que se transcribe a continuación:

*TÍTULO CUARTO
INFORMACIÓN CLASIFICADA
CAPÍTULO III
De la Información Confidencial*

ARTÍCULO 113. Se considera información confidencial:

- I. La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable;**

...

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello.

Aunado a lo anterior, se precisa que en los "Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información así como la elaboración de versiones públicas", se dispone lo siguiente:

TRIGÉSIMO OCTAVO. Se considera información confidencial:

- I. Los datos personales en los términos de la norma aplicable;**
II. La que se entregue con tal carácter por los particulares a los sujetos obligados, siempre y cuando tengan el derecho de entregar con dicho carácter la información, de conformidad con lo dispuesto en las leyes o en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte,
y

III. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos.

En este sentido, se desprende que será considerada información clasificada como confidencial, aquella que contenga datos personales de una persona física identificada o identificable, independientemente del medio por el cual se haya obtenido, sin necesidad de estar sujeta a temporalidad alguna y a la que sólo podrán tener acceso los titulares de la información o sus representantes legales.

[illegible]

C.2. Folio 0001700103218

Contenido de la Solicitud: *"SOLICITO TODOS LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Y O ADQUISICION DE VEHICULOS , EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y AFINES EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE 2008 , 2009 , 2010 , 2011 , 2012 , 2013 , 2014 , 2015 , 2016 , 2017 , 2018. (11 AÑOS) PERIODO 2008-2018. GRACIAS!"* (Sic)

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: OM, SEIDO, CENAPI, SDHPDSC, SEIDF, AIC, CGSP y UEAF.

PGR/CT/ACDO/0330/2018: En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad, **confirma** la puesta a disposición de la versión pública de los contratos de arrendamiento y o adquisición de vehículos localizados por esta Institución, resguardando en los mismos información clasificada como reservada y confidencial de conformidad con el artículo 110, fracción I y V; y 113, fracción I de la Ley de la materia.

Por lo que, a fin de reforzar las causales de clasificación citadas, se expone la siguiente prueba de daño conforme a lo previsto en el artículo 103 y 104 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública:

Artículo 110, fracción I:

- I. Existe un riesgo real, demostrable e identificable, ya que divulgar la información relacionada con los contratos requeridos implica revelar parte medular del estado de fuerza de esta Institución vulnerando la capacidad de despliegue y operación, en consecuencia la entrega de la información vulneraría los procedimientos, métodos, fuentes o especificaciones técnicas, utilizadas para combatir a las organizaciones delictivas, es decir, se constituiría un riesgo en las labores de inteligencia criminal, repercutiendo la seguridad pública y nacional, máxime que dicha información puede ser utilizada por organizaciones delictivas para evadir la justicia y, por ende, poner en riesgo la vida, la salud, la integridad y el ejercicio de los derechos de las personas.
- II. Existe un riesgo de perjuicio, ya que en virtud de las actuales condiciones que operan en el país, se desprende que hacerse del conocimiento público la información en comento, atentaría directamente en las labores implementadas por esta Institución, poniendo en peligro la actividad de inteligencia criminal que conforma el sector de Seguridad Pública y Nacional en sus diferentes instancias, lo cual puede dificultar las estrategias para el logro de la misma, en razón que permitiría a grupos que realizan conductas ilícitas utilizar dicha información; lo que se traduce en un perjuicio a la procuración de justicia a favor de la sociedad en atención de un interés particular, toda vez que pondría en desventaja la capacidad de reacción a cargo de esta Institución

Federal, debido a que las diferentes organizaciones delictivas pueden allegarse de datos que sean utilizados en su beneficio.

- III. En cuanto al principio de proporcionalidad, el otorgar la información referente a las investigaciones relacionadas con los procedimientos, métodos, fuentes o especificaciones técnicas relacionadas a las líneas estratégicas respecto a la información objeto de reserva, comprometería la seguridad nacional al poner en peligro las acciones implementadas por esta autoridad, exponiendo a su vez la integridad y el ejercicio de los derechos de las personas, concluyendo así que la reserva de mérito no puede traducirse en un medio restrictivo al derecho de acceso, en razón que la naturaleza de la información multicitada resulta proporcional al atender la importancia del interés jurídico tutelado, es decir, un ejercicio de ponderación de derechos.

En otras palabras, el interés general se coloca por encima de un interés particular en torno al cual, las numerosas y diversas pretensiones y aspiraciones que son tuteladas por el derecho pueden clasificarse en dos grupos, en el primero, se incluyen las pretensiones que tienden a satisfacer las necesidades específicas de los individuos, es decir, dichas pretensiones constituyen el interés privado, y tienen la característica de que, al ser satisfechas, se producen beneficios solamente para determinadas personas; no obstante, en el segundo grupo se encuentran las pretensiones que son compartidas por la sociedad en su conjunto, y cuya satisfacción origina beneficios para todos los integrantes de una colectividad, siendo éstas últimas garantizadas mediante la colectividad constante de los órganos del Estado, como lo es esta representación social, y para referirse a ellas se utiliza la expresión interés público, de ahí que se tenga mayor alcance jurídico que la tutela concedida a los intereses privados.

Artículo 110, fracción V:

- I. Que el divulgar cierta información contenida dentro de los contratos permitiría identificar el número de unidades con que cuenta esta Institución; así como la distribución de los mismos, lo que propiciaría la identificación y localización de servidores públicos sustantivos perteneciente a esta Institución, existiendo con ello un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público, en razón que la misma permite identificar y posiblemente hacer reconocibles para algunos grupos delictivos a ciertas personas que, por razones de su cargo, desempeñen funciones estrechamente relacionadas con facultades de prevención y persecución de los delitos federales, circunstancia que permitiría atentar contra su vida, seguridad o su salud, o bien las de su familia o entorno social.
- II. Que derivado de que las actuaciones de la Procuraduría General de la República tienen como fin el interés público o general, la investigación y persecución de delitos, por conducto del Ministerio Público Federal y demás personal que lo auxilian, de conformidad con lo establecido en la normatividad aplicable; se desprende que el divulgar la información requerida, superaría el interés Público, es decir, provocaría un riesgo de perjuicio toda vez que se estarían proporcionando indicios y demás elementos que afectarían directamente el curso o el resultado de las investigaciones a cargo de esta Institución Federal, al hacer públicos datos que permitirían localizar a los

servidores públicos que realizan actividades sustantivas, en razón que se podría atentar contra su vida, seguridad o su salud, o bien las de su familia o entorno social, derivado que grupos delincuenciales que tengan interés alguno sobre las actuaciones de la indagatoria, atentarían en contra de ellos.

- III. Que atendiendo al principio de proporcionalidad, se desprende que el reservar información relativa a datos de personal sustantivo de la Institución, no se traduce en un medio restrictivo de acceso a la información, en virtud que dicha reserva prevalece al proteger la vida, la seguridad y la salud, como bien jurídico tutelado, de dichos funcionarios, mismos que garantizan en todo momento una procuración de justicia federal, eficaz y eficiente, apegada a los principios de legalidad, certeza jurídica y respeto a los derechos humanos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y demás Leyes y Tratados Internacionales.

Aunado a lo anteriormente expuesto, es importante recordar que dentro de los instrumentos jurídicos que nos ocupan, existen datos personales que serán resguardados, los cuales actualizan la hipótesis de información clasificada como confidencial, independientemente del medio por el cual se haya obtenido, sin necesidad de estar sujeta a temporalidad alguna y a la que solo podrán tener acceso los titulares de la información o sus representantes legales.

Lo mencionado, encuentra sustento legal dentro de lo establecido en la fracción I del artículo 113 de la LFTAIP, mismo que se transcribe a continuación:

*TÍTULO CUARTO
INFORMACIÓN CLASIFICADA
CAPÍTULO III
De la Información Confidencial*

ARTÍCULO 113. Se considera información confidencial:

- I. La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable;**

...

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello.

Aunado a lo anterior, se precisa que en los "Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información así como la elaboración de versiones públicas", se dispone lo siguiente:

TRIGÉSIMO OCTAVO. Se considera información confidencial:

- I. Los datos personales en los términos de la norma aplicable;**
II. La que se entregue con tal carácter por los particulares a los sujetos obligados, siempre y cuando tengan el derecho de entregar con dicho carácter la información, de conformidad con lo dispuesto en las leyes o en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, y
III. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos.

This image shows a full page of white paper with horizontal dashed lines, typical of primary school handwriting practice paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

C.3. Folio 0001700105218

Contenido de la Solicitud:

"Solicito en versión pública documento que contenga la estructura organizativa de la Fiscalía Especializada para Delitos contra la Libertad de Expresión, desagregado por número de personal administrativo, número de fiscales, áreas de trabajo, personal asignado a cada una de estas y sus funciones." (Sic)

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: SDHPDSC, PFM y OM.

PGR/CT/ACDO/0331/2018: En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad, **confirma** la entrega de la versión pública del documento que describe las funciones realizadas por personal de la FEADLE, clasificando y testando información reservada, de conformidad con lo establecido por la fracción VII del artículo 110 de la LFTAIP, hasta por un periodo de cinco años.

Por lo que, a fin de reforzar la justificación de la causal de clasificación ya citada, se expone la siguiente prueba de daño:

- I. **Riesgo real demostrable e identificable:** Al revelar la información de las actividades específicas realizadas por el personal sustantivo de esa Unidad Administrativa, la cual tiene como prioridad la protección de quienes ejercen la actividad periodística, así como allegarse de los elementos necesarios para el esclarecimiento a los hechos constitutivos de delito para sustentar ante el Órgano Jurisdiccional competente la imputación correspondiente, lo que se traduce en el riesgo real, causando perjuicio en las actividades de investigación, persecución de delitos y cumplimiento de la ley.
- II. **Superioridad del interés Público:** Dicha reserva supera el interés particular, al derecho a la información, la clasificación atiende a un interés jurídico superior para la sociedad, ya que esa Fiscalía Especial, está facultada para investigar y perseguir los hechos posiblemente constitutivos de un delito, cumpliendo de manera irrestricta la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo tanto el interés público, se afecta perjudicando la prevención, investigación y persecución de delitos.
- III. **Principio de Proporcionalidad:** Las actividades que esta Unidad Administrativa realiza, son de carácter operativo, por lo que el objetivo primordial es la procuración de justicia, por lo que en todo momento se deben resguardar los datos que obstaculicen o limiten el accionar de las autoridades a todos niveles, por lo que la medida y proporcionalidad, es la obligación que tenemos como servidores públicos de mantener la completa secrecía de las actividades sustantivas que se llevan a cabo.
En ese sentido, si bien toda la información en posesión de las autoridades, es pública y susceptible de acceso a particulares; el derecho de acceso a la información se

encuentra sujeto a limitaciones por razones de interés público previstas en la normativa correspondiente, es decir, el régimen de excepciones a la publicidad de la información obedece a un criterio de ponderación, mismo que se actualiza para la presente toda vez que existe un riesgo de daño sustancial a los intereses protegidos; por lo que modificar todo ello con la finalidad de la prevención de delitos, y evitar obstaculizar la impartición de justicia.

Adicionalmente, este Comité de Transparencia **confirma** la clasificación de reserva del número de policías asignados a la FEADLE, de conformidad con el artículo 110, fracción I de la LFTAIP, por un periodo de cinco años, por lo que en aras de reforzar la clasificación de mérito, se emite la siguiente prueba de daño:

- I. Riesgo real, demostrable e identificable: El riesgo por divulgar información relacionada con el Estado de Fuerza de la FEADLE, causaría un grave perjuicio a las actividades de investigación y persecución de los delitos, propias de esta Institución encargada de la Seguridad Pública, toda vez que se difundiría la capacidad de reacción con la que se cuenta para combatir a la delincuencia, propiciando que miembros de la delincuencia organizada conozcan datos que les permitan obstruir o evadir las técnicas y estrategias de investigación llevadas a cabo en la persecución de los delitos.
- II. Perjuicio que supera el interés público: El riesgo de perjuicio que supone la publicidad de dicha información, supera el interés público de que se difunda, toda vez que atentaría directamente en las labores para el combate a la delincuencia, poniendo en peligro las actividades de investigación y persecución de los delitos. Por lo anterior, resulta de mayor importancia para la sociedad el que se garantice el derecho a la Seguridad Pública, sobre el interés particular de conocer información sobre el número de agentes, lo cual es propio de dar a conocer el Estado de Fuerza de la FEADLE.
- III. Principio de proporcionalidad: La reserva de la información se adecua al principio de proporcionalidad, toda vez que se invoca con el propósito de evitar un perjuicio a la capacidad de reacción, a través de la protección de la información relacionada con el Estado de Fuerza de la FEADLE, que se encarga de auxiliar al Ministerio Público de la Federación encargado de las actividades de investigación y persecución de los delitos.

C.4. Folio 0001700109018

Contenido de la Solicitud: *"SOLICITO TODOS LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Y O ADQUISICIÓN VEHICULAR EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES , ASÍ COMO TODOS LOS ANEXOS TÉCNICOS DE LOS MISMOS Y LOS PAGOS REALIZADOS DE LO SOLICITADO. TODO LO ANTERIOR EN UN PERIODO CORRESPONDIENTE A 2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018. (11 AÑOS) PERIODO 2008-2018."* (Sic)

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: OM, SEIDO, CENAPI, SDHPDSC, SEIDF, AIC, CGSP y UEAf.

PGR/CT/ACDO/0332/2018: En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad, **confirma** la puesta a disposición de la versión pública de los contratos de arrendamiento y o adquisición de vehículos localizados por esta Institución, resguardando en los mismos información clasificada como reservada y confidencial de conformidad con el artículo 110, fracciones I y V; y 113, fracción I de la Ley de la materia.

Por lo que, a fin de reforzar las causales de clasificación citadas, se exponen las siguientes pruebas de daño:

Artículo 110, fracción I:

- I. Existe un riesgo real, demostrable e identificable, ya que divulgar la información relacionada con los contratos requeridos implica revelar parte medular del estado de fuerza de esta Institución vulnerando la capacidad de despliegue y operación, en consecuencia la entrega de la información vulneraría los procedimientos, métodos, fuentes o especificaciones técnicas, utilizadas para combatir a las organizaciones delictivas, es decir, se constituiría un riesgo en las labores de inteligencia criminal, repercutiendo la seguridad pública y nacional, máxime que dicha información puede ser utilizada por organizaciones delictivas para evadir la justicia y, por ende, poner en riesgo la vida, la salud, la integridad y el ejercicio de los derechos de las personas.
- II. Existe un riesgo de perjuicio, ya que en virtud de las actuales condiciones que operan en el país, se desprende que hacerse del conocimiento público la información en comento, atentaría directamente en las labores implementadas por esta Institución, poniendo en peligro la actividad de inteligencia criminal que conforma el sector de Seguridad Pública y Nacional en sus diferentes instancias, lo cual puede dificultar las estrategias para el logro de la misma, en razón que permitiría a grupos que realizan conductas ilícitas utilizar dicha información; lo que se traduce en un perjuicio a la procuración de justicia a favor de la sociedad en atención de un interés particular, toda vez que pondría en desventaja la capacidad de reacción a cargo de esta Institución

Federal, debido a que las diferentes organizaciones delictivas pueden allegarse de datos que sean utilizados en su beneficio.

- III. En cuanto al principio de proporcionalidad, el otorgar la información referente a las investigaciones relacionadas con los procedimientos, métodos, fuentes o especificaciones técnicas relacionadas a las líneas estratégicas respecto a la información objeto de reserva, comprometería la seguridad nacional al poner en peligro las acciones implementadas por esta autoridad, exponiendo a su vez la integridad y el ejercicio de los derechos de las personas, concluyendo así que la reserva de mérito no puede traducirse en un medio restrictivo al derecho de acceso, en razón que la naturaleza de la información multicitada resulta proporcional al atender la importancia del interés jurídico tutelado, es decir, un ejercicio de ponderación de derechos.

En otras palabras, el interés general se coloca por encima de un interés particular en torno al cual, las numerosas y diversas pretensiones y aspiraciones que son tuteladas por el derecho pueden clasificarse en dos grupos, en el primero, se incluyen las pretensiones que tienden a satisfacer las necesidades específicas de los individuos, es decir, dichas pretensiones constituyen el interés privado, y tienen la característica de que, al ser satisfechas, se producen beneficios solamente para determinadas personas; no obstante, en el segundo grupo se encuentran las pretensiones que son compartidas por la sociedad en su conjunto, y cuya satisfacción origina beneficios para todos los integrantes de una colectividad, siendo éstas últimas garantizadas mediante la colectividad constante de los órganos del Estado, como lo es esta representación social, y para referirse a ellas se utiliza la expresión interés público, de ahí que se tenga mayor alcance jurídico que la tutela concedida a los intereses privados.

Artículo 110, fracción V:

- I. Que el divulgar cierta información contenida dentro de los contratos permitiría identificar el número de unidades con que cuenta esta Institución; así como la distribución de los mismos, lo que propiciaría la identificación y localización de servidores públicos sustantivos perteneciente a esta Institución, existiendo con ello un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público, en razón que la misma permite identificar y posiblemente hacer reconocibles para algunos grupos delictivos a ciertas personas que, por razones de su cargo, desempeñen funciones estrechamente relacionadas con facultades de prevención y persecución de los delitos federales, circunstancia que permitiría atentar contra su vida, seguridad o su salud, o bien las de su familia o entorno social.
- II. Que derivado de que las actuaciones de la Procuraduría General de la República tienen como fin el interés público o general, la investigación y persecución de delitos, por conducto del Ministerio Público Federal y demás personal que lo auxilian, de conformidad con lo establecido en la normatividad aplicable; se desprende que el divulgar la información requerida, superaría el interés Público, es decir, provocaría un riesgo de perjuicio toda vez que se estarían proporcionando indicios y demás elementos que afectarían directamente el curso o el resultado de las investigaciones a cargo de esta Institución Federal, al hacer públicos datos que permitirían localizar a los

servidores públicos que realizan actividades sustantivas, en razón que se podría atentar contra su vida, seguridad o su salud, o bien las de su familia o entorno social, derivado que grupos delincuenciales que tengan interés alguno sobre las actuaciones de la indagatoria, atentarían en contra de ellos.

- III. Que atendiendo al principio de proporcionalidad, se desprende que el reservar información relativa a datos de personal sustantivo de la Institución, no se traduce en un medio restrictivo de acceso a la información, en virtud que dicha reserva prevalece al proteger la vida, la seguridad y la salud, como bien jurídico tutelado, de dichos funcionarios, mismos que garantizan en todo momento una procuración de justicia federal, eficaz y eficiente, apegada a los principios de legalidad, certeza jurídica y respeto a los derechos humanos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y demás Leyes y Tratados Internacionales.

Aunado a lo anteriormente expuesto, es importante recordar que dentro de los instrumentos jurídicos que nos ocupan, existen datos personales que serán resguardados, los cuales actualizan la hipótesis de información clasificada como confidencial, independientemente del medio por el cual se haya obtenido, sin necesidad de estar sujeta a temporalidad alguna y a la que solo podrán tener acceso los titulares de la información o sus representantes legales.

Lo mencionado, encuentra sustento legal dentro de lo establecido en la fracción I del artículo 113 de la LFTAIP, mismo que se transcribe a continuación:

*TÍTULO CUARTO
INFORMACIÓN CLASIFICADA
CAPÍTULO III
De la Información Confidencial*

ARTÍCULO 113. Se considera información confidencial:

- I. La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable;**

...

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello.

Aunado a lo anterior, se precisa que en los "Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información así como la elaboración de versiones públicas", se dispone lo siguiente:

TRIGÉSIMO OCTAVO. Se considera información confidencial:

- I. Los datos personales en los términos de la norma aplicable;**
II. La que se entregue con tal carácter por los particulares a los sujetos obligados, siempre y cuando tengan el derecho de entregar con dicho carácter la información, de conformidad con lo dispuesto en las leyes o en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, y
III. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos.

En este sentido, se desprende que será considerada información clasificada como confidencial, aquella que contenga datos personales de una persona física identificada o identificable, independientemente del medio por el cual se haya obtenido, sin necesidad de estar sujeta a temporalidad alguna y a la que sólo podrán tener acceso los titulares de la información o sus representantes legales.

[illegible]

C.5. Folio 0001700117018

Contenido de la Solicitud: *"Requiero copia íntegra de todas las facturas y comprobantes de hospedaje, consumos, transporte, boletos de avión, viáticos, alimentación, recibos simples de pago y copia de todos los documentos de gastos generados por funcionarios y agentes del ministerio público federal en su viaje a Florencia, Italia, para realizar una diligencia en el mes de marzo del año 2018 con el propósito de recabar la declaración de Tomás "Y". Esta solicitud se refiere al viaje de funcionarios citado en el comunicado 250/18 emitido por la PGR <https://www.gob.mx/pgr/prensa/comunicado-250-18-pgr-informa> Requiero también se detalle la cantidad de funcionarios que viajaron a Florencia, Italia, el cargo de cada funcionario dentro de la PGR y el área, oficina o subprocuraduría al que está adscrito cada funcionario."* (Sic)

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: OM, CAIA y SEIDO.

PGR/CT/ACDO/0333/2018: En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad, **confirma** la puesta a disposición de la versión pública de los documentales relacionados con la diligencia de referencia, testando el RFC y número de tarjetas de crédito del Lic. José Humberto López Portillo Sánchez, Agregado Legal para Europa con sede en Madrid, España quien asistió a Florencia, Italia, con el propósito de recabar la declaración de Tomás "Y", a fin de que dichos datos sean resguardados de conformidad con el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.

Por ello, se desprende que será considerada información clasificada como confidencial, aquella que contenga datos personales de una persona física identificada o identificable, independientemente del medio por el cual se haya obtenido, sin necesidad de estar sujeta a temporalidad alguna y a la que solo podrán tener acceso los titulares de la información o sus representantes legales.

Lo mencionado, encuentra sustento legal dentro de lo establecido en la fracción 1, del artículo 113 de la LFTAIP, mismo que se transcribe a continuación:

*TÍTULO CUARTO
INFORMACIÓN CLASIFICADA
CAPÍTULO III
De la Información Confidencial*

ARTÍCULO 113. Se considera información confidencial:

I. La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable;

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello.

Aunado a lo anterior, se precisa que en los "*Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información así como la elaboración de versiones públicas*", se dispone lo siguiente:

TRIGÉSIMO OCTAVO. Se considera información confidencial:

- I. Los datos personales en los términos de la norma aplicable;*
- II. La que se entregue con tal carácter por los particulares a los sujetos obligados, siempre y cuando tengan el derecho de entregar con dicho carácter la información, de conformidad con lo dispuesto en las leyes o en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte,*
- y III. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos.*

En este sentido, se desprende que será considerada información clasificada como confidencial, aquella que contenga datos personales de una persona física identificada o identificable, independientemente del medio por el cual se haya obtenido, sin necesidad de estar sujeta a temporalidad alguna y a la que sólo podrán tener acceso los titulares de la información o sus representantes legales. -----

D. Solicitudes de acceso a la información en las que se analiza la incompetencia de la información requerida:

D.1. Folio 1700100016418 – Agencia de Investigación Criminal

Contenido de la Solicitud: "Con fundamento en el artículo 6 constitucional, atentamente requiero que en función de los principios constitucionales de máxima publicidad, transparencia, rendición de cuentas y gratuidad, me entregue a través de un medio gratuito derivado de los avances tecnológicos y en formato de documento portátil (PDF) comprimido o en diverso de naturaleza similar, la siguiente información pública documentada en el ejercicio de las facultades, competencias y funciones previstas en las normas jurídicas aplicables. 1. De cada uno de los equipos de computo en posesion del sujeto obligado: a. Numero de serie y de parte. b. Versión de la BIOS (siglas en ingles de Basic Input/Output System). c. Marca. d. Si se cuenta con contraseña apara acceder a la configuración de la BIOS (siglas en ingles de Basic Input/Output System). e. Procesador. f. Capacidad de almacenamiento en el Disco Duro. g. Conforme al organigrama estructural, unidad, area u organo que hace uso del equipo de computo" (Sic)

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: AIC.

PGR/CT/ACDO/0334/2018: En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad, **confirma** la declaración de incompetencia de la Agencia de Investigación Criminal para pronunciarse respecto de lo requerido, de conformidad con el artículo 65, fracción II de la LFTAIP, y se **instruye** a la UTAG a que oriente al particular a que redirija su solicitud directamente a la Procuraduría General de la República, toda vez que es la instancia facultada para pronunciarse sobre la información requerida.

D.2. Folio 1700100016618 – Agencia de Investigación Criminal

Contenido de la Solicitud: *"¿Por qué fue liberado (...), o (...), alias El (...), o El (...)? De qué se le acusaba y cómo fue su proceso legal."* (Sic)

Desahogo de requerimiento de información adicional:

"En lo que concierne a PGR de qué se le acusaba a (...)? Qué había en la carpeta de investigación, Por qué salió libre." (Sic)

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: AIC.

PGR/CT/ACDO/0335/2018: En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad, **confirma** la declaración de la incompetencia de la Agencia de Investigación Criminal para pronunciarse respecto de lo requerido, de conformidad con el artículo 65, fracción II de la LFTAIP, y se **instruye** a la UTAG a que oriente al particular a que redirija su solicitud directamente a la Procuraduría General de la República y al Poder Judicial de la Federación, toda vez que son las instancia facultadas para pronunciarse sobre la información requerida.

**D.3. Folio 1700600002518 – Órgano Administrativo Desconcentrado Especializado
En Mecanismos Alternativos de Solución De Controversias en Materia Penal
(OADEMASCP)**

Contenido de la Solicitud: *"Del total de delitos denunciados del 01 de enero de 2000 al mes de abril del 2018 relacionados con Hidrocarburos y previstos en el Código Penal Federal, la Ley Federal para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de Hidrocarburos y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, se solicita informe y desglose por entidad federativa, municipio, año, delito denunciado, señale si es indígena o no el imputado -para fines estadísticos, omitiendo datos personales- conforme a los tipos penales relacionados con Hidrocarburos y previstos en el Código Penal Federal, la Ley Federal para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de Hidrocarburos y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, las denuncias que hayan llegado a acuerdos reparatorios celebrados que hayan puesto fin a la controversia, especificando los que la solucionan de manera total y los que solucionan de manera parcial, que hayan sido derivados ante su competencia conforme a la Ley Nacional de Mecanismos Alternativo sde Solución de Controversais en materia penal, a partir de la entrada en vigor de esta última ley" (Sic)*

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: OADEMASCP.

PGR/CT/ACDO/0336/2018: En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad, **confirma** la declaratoria de incompetencia parcial por parte del OADEMASCP para proporcionar la información extraída de la siguiente parte de la solicitud:

"Del total de delitos denunciados del 01 de enero de 2000 al mes de abril del 2018 relacionados con Hidrocarburos y previstos en el Código Penal Federal, la Ley Federal para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de Hidrocarburos y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, se solicita informe y desglose por entidad federativa, municipio, año, delito denunciado, señale si es indígena o no el imputado -para fines estadísticos, omitiendo datos personales- conforme a los tipos penales relacionados con Hidrocarburos y previstos en el Código Penal Federal, la Ley Federal para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de Hidrocarburos y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada"

Toda vez que, la instancia facultada para pronunciarse al respecto es directamente la Procuraduría General De La República; lo anterior, en términos del artículo 65, fracción II de la LFTAIP, por lo que se **instruye** a la UTAG oriente al particular a redirigir esa parte de la solicitud a través de la ya citada Representación Social. - - - - -

E. Solicitudes de acceso a la información en las que se analiza la ampliación de termino para dar respuesta a la información requerida:

PGR/CT/ACDO/0337/2018: Los miembros del Comité de Transparencia determinaron autorizar la ampliación del plazo de respuesta de los folios citados a continuación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 135 de la LFTAI. Lo anterior, en virtud de que las unidades administrativas responsables de dar respuesta a las mismas se encuentran realizando una búsqueda exhaustiva en sus archivos, para estar en posibilidad de determinar, en cada caso la publicidad, clasificación o inexistencia de la respuesta a los siguientes folios:

- E.1. Folio 0001700110218
E.2. Folio 0001700120618
E.3. Folio 0001700121918
E.4. Folio 0001700124018
E.5. Folio 0001700125018
E.6. Folio 0001700125418

Sin embargo, se exhorta a los asistentes a que, en aquellos requerimientos en los que dentro del procedimiento de acceso, se encuentre pendiente por concluir el proceso de verificación de la existencia de información en sus archivos, se entregue en un término no mayor a 5 días hábiles los resultados de la búsqueda a la UTAG, con la finalidad de contestarlos en tiempo y forma.

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 135 de la LFTAIP, el cual establece que la respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo posible.

F. Análisis a los cumplimientos de las resoluciones del INAI

F.1. Folio 0001700022918 – RRA 1770/18

F.2. Folio 0001700023018 – RRA 1771/18

Las resoluciones adoptadas por unanimidad de los miembros del Comité se encuentran al final de la presente acta. -----

This image shows a full page of white paper with horizontal dashed lines, typical of primary school handwriting practice paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

G. Interoperabilidad en la fracción XII del Artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

El Director de Protección de Datos Personales y Capacitación, informó a los Enlaces de Transparencia que esta semana era la última para recabar la información respecto de la interoperabilidad de la fracción XII del Artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública con la Secretaría de la Función Pública donde aparece información que da cuenta de la estructura e información de personal sustantivo adscrito a la Procuraduría General de la República, la cual ya ha sido clasificada como información reservada por el Comité de Transparencia en otras fracciones como son las de Estructura, Directorio y Currículum.

Por lo que, se volvió a hacer una invitación a las áreas que cuenten con personal sustantivo, remitir el listado de servidoras y servidores públicos cuyo nombre aparezca en el Sistema de Portal de Obligaciones de Transparencia, en la fracción XII, y en la página <http://servidorespublicos.gob.mx/registro/consulta.jsf> de la Secretaría de la Función Pública a más tardar el próximo viernes 18 de mayo del año en curso.

Lo anterior, a fin de someter dicho listado a consideración del Comité de Transparencia y que la Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental realice las gestiones necesarias ante la Secretaría de la Función Pública para la baja de la información de dichos portales.

This image shows a full page of white paper with horizontal green dashed lines. The lines are evenly spaced and run across the entire width of the page, providing a guide for handwriting practice. There are no margins, text, or other markings on the page.

H. Asuntos Generales

Punto 1.

El Director de Acceso a la Información insistió a los enlaces en materia de transparencia, para que coadyuven en la detección oportuna y atención eficaz de las solicitudes de potencial riesgo y/o de atención prioritaria; es decir, aquellas que por su naturaleza y alcance puedan generar un impacto mediático a la Institución, y de la información susceptible de ser pública, para que se analicen de ser el caso incluso con el apoyo del Comité de Transparencia.

Asimismo, invitó a los Enlaces de Transparencia a que pudieran identificar y gestionar al interior de las unidades administrativas que representan, la atención oportuna e inmediata cuando así se requiera a efecto de evitar se prorroguen solicitudes de forma innecesaria, recalcando que únicamente era comprensible solicitar una prórroga para otorgar respuesta cuando por la complejidad en la solicitud y búsqueda de información así lo requiriera.

This image shows a full page of white paper with horizontal dashed lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting practice. There are no margins, text, or other markings on the page.

Siendo las 12:30 horas del mismo día, se dio por terminada la Décima Octava Sesión Ordinaria del año 2018 del Comité de Transparencia de la Procuraduría General de la República. Al efecto, se elabora acta por triplicado, firmando al calce los integrantes del Comité de Transparencia para constancia.

INTEGRANTES



Lcda. Adi Loza Barrera.

Titular de la Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental y
Presidenta del Comité de Transparencia.



Lic. Luis Grijalva Torrero.

Titular del Órgano Interno de Control



Lcda. Adriana Fabiola Rodríguez León.

Suplente del Director General de Recursos Materiales y
Servicios Generales, responsable del Área Coordinadora
de Archivos de la Dependencia.



Lcda. Gabriela Santillán García.

Secretaría Técnica del Comité de Transparencia
Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental
Elaboró



Lic. Miguel Ángel Cerón Cruz.

Director de Acceso a la Información
Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental
Vo. Bo.

RESOLUCIÓN

A. Solicitudes de Acceso a la Información en las que se analiza la inexistencia de la información solicitada:

A.1. Folio 1700300001118 – RRA 2241/18 – Centro Federal de Protección a Personas

Contenido de la Solicitud: *"Solicito versión pública de los Programas Federal de Protección a Personas, desde la fecha de creación de ese Centro a la fecha."* (Sic)

Antecedentes:

En respuesta inicial, se informó al particular que de conformidad con la Ley Federal para la Protección de Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal, se desprende la existencia de un solo programa, mismo que incorpora aquellas medidas de protección otorgadas a personas que de acuerdo a su situación de riesgo por su participación de forma directa o indirecta es un procedimiento penal deben estar inmersas en dicho Programa.

Sin embargo, existía una imposibilidad material para proporcionar una versión pública de diversos "programas Federal de Protección a Personas", ya que ese Centro Federal de Protección a Personas, **se encuentra en proceso de estructuración**.

Por lo que, el pasado 10 de abril del 2018, el solicitante se inconformó con la respuesta otorgada por el Centro Federal de Protección a Personas (Órgano Desconcentrado de la Procuraduría General de la República), refiriendo que no se le proporcionó la información solicitada, por lo que interpuso recurso de revisión ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Por lo que, con la finalidad de sobreseer el recurso de revisión citado y dar certeza al particular de la búsqueda de la información solicitada y de la veracidad de la respuesta que le fue otorgada inicialmente, se expone lo siguiente:

Resulta necesario precisar que por medidas de protección debe entenderse como aquellas acciones tendientes a eliminar y reducir los riesgos que pueda sufrir una persona derivado de la acción de represalia eventual con motivo de su colaboración, o participación en un procedimiento penal, así como de personas o familiares cercanas a éste, mismas que son administradas y ejecutadas bajo el "Programa Federal de Protección a Personas" de manera independiente al desarrollo del procedimiento penal que en su caso se encuentre instaurado ante la Subprocuraduría y/o Fiscalía respectiva.

Lo anterior, considerando que para otorgar dichas medidas de protección es necesario que éstas pasen por el procedimiento contemplado en la **Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal**, mismo que en su parte conducente, se encuentra contemplado a través de los siguientes artículos:

CAPÍTULO VII

DE LA INCORPORACIÓN AL PROGRAMA

ARTÍCULO 20. La solicitud de incorporación al Programa, la deberá realizar el Titular de la Subprocuraduría o unidad administrativa equivalente a la que pertenezca el Ministerio Público o el juez a que se refiere este artículo que conozca del Procedimiento Penal en los que intervenga la persona a proteger, las cuales serán resueltas por el Director del Centro.

ARTÍCULO 22. La petición de otorgar Medidas de Protección deberá contener como elementos mínimos que permitan realizar el Estudio Técnico, los siguientes:

- a) Nombre completo del candidato a protección, su dirección o Jugar de ubicación.
- b) Datos acerca de la investigación o proceso penal en la que interviene.
- e) Papel que detenta en el procedimiento y la importancia que reviste su participación.
- d) Datos que hagan presumir que se encuentra en una situación de riesgo su integridad física o la de personas cercanas a él.
- e) No obstante que la solicitud no contenga toda la información requerida no impide iniciar el Estudio Técnico, pudiéndose recabar los datos necesarios para su elaboración en breve término.
- f) Cualquier otra que el Ministerio Público estime necesaria para justificar la necesidad de su protección.

ARTÍCULO 23. El Director deberá contar con el Estudio Técnico que le permita decidir sobre la procedencia de incorporación o no de una persona al Programa.

ARTÍCULO 24.- Recibida la solicitud de incorporación al Programa, el Director en un tiempo razonable, a fin de determinar su procedencia, tomará en consideración el resultado del Estudio Técnico, el cual deberá de contener por lo menos los siguientes aspectos:

- I. Que exista un nexo entre la intervención de la persona a proteger en el Procedimiento Penal y los factores de riesgo en que se encuentre la persona susceptible de recibir protección. En los casos en que se haya concluido la participación de la Persona Protegida en el procedimiento penal, se realizará un estudio a fin de determinar si subsisten las condiciones de riesgo para determinar su continuidad o su terminación de las medidas de protección.
- II. Que la persona otorgue su consentimiento y proporcione información fidedigna y confiable para la realización el Estudio Técnico, apercibido que la falsedad en su dicho pudiere tener como consecuencia la no incorporación al Programa.
- III. Que la persona a proteger no esté motivado por interés distinto que el de colaborar con la procuración y administración de justicia.
- IV. Que las Medidas de Protección sean las idóneas para garantizar la seguridad de la persona.
- V. Las obligaciones legales que tenga la persona con terceros.
- VI. Los antecedentes penales que tuviere.
- VII. Que la admisión de la persona, no sea un factor que afecte la seguridad del Programa, del Centro o de la Procuraduría.

ARTÍCULO 26. Una vez concluido el Estudio Técnico, el Director adoptará la decisión que corresponda, la cual podría ser reconsiderada a solicitud del Procurador, con independencia de lo previsto en el artículo 20, párrafo segundo de la presente Ley, la que será en el siguiente sentido:

- a) Incorporar a la persona al Programa y establecer las Medidas de Protección que se le aplicarán.
- b) No incorporar al Programa.

Así, se desprende que el Director del Centro Federal de Protección a Personas resolverá aquellas solicitudes de incorporación al "Programa Federal de Protección a Personas", misma que en todo momento deberá realizar el Titular de la Subprocuraduría y/o Fiscalía a la cual

se encuentra adscrito el Ministerio Público de la Federación encargado de la investigación correspondiente, cuya petición deberá contener, entre otros, los siguientes requisitos mínimos:

- Nombre completo del candidato a protección, su dirección o lugar de ubicación.
- Datos acerca de la investigación o proceso penal en la que interviene.
- Datos que hagan presumir que se encuentra en una situación de riesgo su integridad física o la de personas cercanas a él.
- Cualquier otra que el Ministerio Público estime necesaria para justificar la necesidad de su protección.

Ello, a efecto de poder emitir el "Estudio Técnico" respectivo, **del cual el Director del Órgano Desconcentrado en comento, en un tiempo razonable, determinará su procedencia al multicitado "Programa Federal de Protección a Personas"**, así como establecer las medidas de protección que se aplicarán.

Así, se desprende que **el Director de este Centro Federal de Protección a Personas resolverá aquellas solicitudes de incorporación al "Programa Federal de Protección a Personas"**, misma que en todo momento deberá realizar el Titular de la Subprocuraduría y/o Fiscalía a la cual se encuentra adscrito el Ministerio Público de la Federación encargado de la investigación correspondiente.

No obstante y expuesto lo anterior, es menester señalar que normativamente sí existe el Centro Federal de Protección a Personas; sin embargo, éste **se encuentra en proceso de estructuración**, toda vez que de la normativa antes descrita, es posible concluir que el Titular de dicho Centro, para el desahogo de sus funciones, necesita de un grupo de servidores públicos a los cuales les designará facultades a efecto de atender el objetivo de la **Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal**, **circunstancia que a la fecha de presentación de la solicitud no acontece**, toda vez que las designaciones recaen bajo un procedimiento de selección que garantice la idoneidad del personal, así como su capacitación para el ejercicio del cargo que se le designe, tal y como se desprende de los siguientes preceptos legales:

ARTÍCULO 8. Para el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley, se dotará a todo el personal responsable de la operación del Programa de las herramientas y el equipo necesario para un desempeño eficaz.

Además, se implementarán procedimientos de selección que garanticen la idoneidad del personal, así como su capacitación para el ejercicio del cargo.

ARTÍCULO 9. El Centro deberá contar con un grupo multidisciplinario de servidores públicos, integrado por abogados, médicos, psicólogos, trabajadores sociales y demás profesionistas que sean necesarios, así como con elementos de la Policía Federal Ministerial adscritos a la Unidad.

ARTÍCULO 10. La ejecución de las Medidas de Protección estará a cargo de la Unidad misma que dependerá del Director y se integrará con agentes de la Policía Federal Ministerial, entrenados y capacitados para tal fin.

Una vez expuesto lo anterior, es importante recordar que el particular requiere "versión pública de los programas Federal de Protección a Personas" del Centro Federal de Protección a Personas a la fecha de presentación del requerimiento.

Por lo que, como se le informó al particular en respuesta inicial, **el Centro Federal de Protección a Personas aún se encuentra en proceso de estructuración**, circunstancia que implica señalar que de manera interna se están llevando a cabo diversas actividades entre las que destacan los procedimientos de selección de personal que garantizaran la idoneidad y capacitación para el ejercicio del cargo y, en su caso, analicen las solicitudes de incorporación al "Programa Federal de Protección a Personas" que, en su momento, los Titulares de las Subprocuradurías y/o Fiscalías de la Procuraduría General de la República presenten y, que de acuerdo a su formalidad, éstas puedan ser determinadas como positivas o negativas.

Así las cosas, se insiste que a la fecha de presentación de la solicitud, normativamente se ha regulado las facultades generales de este Centro Federal de Protección a Personas, y no así se ha emitido aquella normativa, tales como lineamientos, protocolos, acuerdos y demás instrumentos necesarios para el debido funcionamiento del "Programa Federal de Protección a Personas", máxime que de acuerdo a las facultades del Titular de dicho Órgano Desconcentrado, es el servidor público que se encuentra realizando las gestiones necesarias para emitir los citados ordenamientos legales a efecto de poner en marcha al "Programa Federal de Protección a Personas" y, por ende, por conducto de los servidores públicos, los cuales se encuentran en proceso de designación, incorporen las solicitudes.

Robustece lo anterior, toda vez que este Centro Federal de Protección a Personas no es la autoridad para elaborar y determinar por propia cuenta la procedencia de una solicitud de incorporación al denominado Programa, siendo que éstas son solicitadas por los Titulares de las Subprocuradurías y/o Fiscalías en donde se encuentre adscrito el Agente del Ministerio Público de la Federación responsable del procedimiento penal, y las cuales, de conformidad con el artículo 3 de la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal, son independientes; tal y como se desprende a continuación:

ARTÍCULO 3. Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, en el ámbito de su competencia, están obligadas a prestar la colaboración que les requiera la Procuraduría General de la República, por conducto del Centro para la aplicación de las Medidas de Protección previstas en esta Ley.

La administración y ejecución de las medidas de protección contempladas en el Programa, son independientes del desarrollo del Procedimiento Penal, el cual sólo servirá para determinar y eliminar los factores de riesgo de la persona sujeta a protección.

En consecuencia, se desprende una imposibilidad material para que el Centro Federal de Protección a Personas se pronuncie respecto de la información solicitada por la particular, toda

vez que, no se advierte que el "Programa Federal de Protección a Personas" se encuentre en funcionamiento, siendo que no aún no se han emitido los lineamientos, protocolos, acuerdos y demás instrumentos para su funcionamiento, ni se ha designado a los servidores públicos que se encargarán de su administración, ni tampoco se desprenden elementos suficientes para afirmar o negar que se han recibido solicitudes de incorporación al programa por parte de las áreas sustantivas de la Procuraduría General de la República.

Lo anterior, toda vez que atendiendo la importancia de la materia por la cual fue creado este Centro, es necesario que su propio Titular, de acuerdo a su capacitación y conocimiento de los temas específicos, sea el único servidor público encargado de la elaboración de los lineamientos, protocolos, acuerdos y demás instrumentos para su funcionamiento, máxime que de conformidad con los siguientes preceptos legales cuenta con autonomía, principalmente técnica, operativa y presupuestal; como se desprende a continuación:

*ARTÍCULO 5. La protección de personas se regirá por los siguientes principios:
[...]*

V. Autonomía: El Director gozará de las más amplias facultades para dictar las medidas oportunas que sujeten y garanticen la exacta aplicación de la presente Ley.

...
ARTÍCULO 6. El Centro es un Órgano Desconcentrado y Especializado de la Procuraduría General de la República; con autonomía técnica y operativa en la aplicación de las Medidas de Protección, el cual estará a cargo de un Director, nombrado y removido libremente por el Presidente de la República, a propuesta del Procurador.

ARTÍCULO 7. El Director, para el cumplimiento de la presente Ley contará con las siguientes facultades:

I. Suscribir y emitir los instrumentos jurídicos que faciliten el funcionamiento y operación del Programa, previa consideración del Procurador.

II. Recibir y analizar las solicitudes de incorporación de una persona al Programa, en virtud de encontrarse en situación de riesgo o peligro por su intervención en un Procedimiento Penal. Estas solicitudes deberán ser presentadas por el Titular de la Subprocuraduría o de la unidad administrativa equivalente a las que se encuentre asignado el Ministerio Público responsable del Procedimiento Penal, en donde interviene o ha intervenido la persona a proteger.

...
X. Gestionar ante la Oficialía Mayor de la Procuraduría lo relativo a la obtención de los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros para la correcta aplicación de sus obligaciones, una vez que se haya autorizado el presupuesto para tal efecto.

RESOLUCIÓN PGR/CT/0024/2018: En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, el Comité de Transparencia **confirma** declarar la inexistencia de la información concerniente a "versión pública de los programas Federal de Protección a Personas" del Centro Federal de Protección a Personas, toda vez que tal y como ha quedado evidenciado con anterioridad, existe una imposibilidad material, siendo que aún se están realizando las gestiones necesarias para la emisión de los lineamientos, protocolos, acuerdos y demás instrumentos necesarios para el debido funcionamiento del "Programa Federal de Protección a Personas", así como la designación del personal que se encargara de la administración de dicho

programa, máxime que de acuerdo a la autonomía presupuestaria, técnica y operativa recaen en el propio Titular del Centro; de conformidad con el artículo 141 de la LFTAI, en relación con el Criterio de Interpretación del Pleno del INAI 12/10, el cual señala que:

***"Propósito de la declaración formal de inexistencia.* Atendiendo a lo dispuesto por los artículos 43, 46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 70 de su Reglamento, en los que se prevé el procedimiento a seguir para declarar la inexistencia de la información, el propósito de que los Comités de Información de los sujetos obligados por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental emitan una declaración que confirme, en su caso, la inexistencia de la información solicitada, es **garantizar al solicitante que efectivamente se realizaron las gestiones necesarias para la ubicación de la información de su interés, y que éstas fueron las adecuadas para atender a la particularidad del caso concreto.** En ese sentido, las declaraciones de inexistencia de los Comités de Información deben contener los elementos suficientes para generar en los solicitantes la certeza del carácter exhaustivo de la búsqueda de la información solicitada y de que su solicitud fue atendida debidamente; es decir, deben motivar o precisar las razones por las que se buscó la información en determinada(s) unidad (es) administrativa(s), los criterios de búsqueda utilizados, y las demás circunstancias que fueron tomadas en cuenta."**

Por lo anterior, se solicita a la Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental (UTAG), hacer del conocimiento del particular, así como del Órgano Garante en materia de Transparencia la presente resolución para los efectos a los que hay lugar.

La presente resolución forma parte del Acta de la Décima Octava Sesión Ordinaria celebrada el 15 de mayo del 2018 del Comité de Transparencia de la Procuraduría General de la República. Al efecto, se elabora por triplicado, firmando al calce los integrantes del Comité de Transparencia para constancia:

INTEGRANTES



Lcda. Adi Loza Barrera.

Titular de la Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental y
Presidenta del Comité de Transparencia.



Lic. Luis Grijalva Torrero.

Titular del Órgano Interno de Control



Lcda. Adriana Fabiola Rodríguez León.

Suplente del Director General de Recursos Materiales y
Servicios Generales, responsable del Área Coordinadora
de Archivos de la Dependencia.



Lcda. Gabriela Santillán García.

Secretaría Técnica del Comité de Transparencia
Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental
Elaboró

Lic. Miguel Ángel Cerón Cruz.

Director de Acceso a la Información
Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental
Vo. Bo.

RESOLUCIÓN

A. Solicitudes de Acceso a la Información en las que se analiza la inexistencia de la información solicitada:

A.2. Folio 1700300001218 – RRA 2242/18 – Centro Federal de Protección a Personas

Contenido de la Solicitud: *"Solicito el registro y expedientes y cuantas de las personas incorporadas al Programa Federal de Protección a Personas."* (Sic)

Otros datos para facilitar su localización:

"Solicito el registro y expedientes y cuantas de las personas incorporadas al Programa Federal de Protección a Personas." (Sic)

Antecedentes:

El pasado 10 de abril del 2018, el solicitante se inconformó con la respuesta otorgada por el Centro Federal de Protección a Personas (Órgano Desconcentrado de la Procuraduría General de la República), refiriendo que no se proporcionó la información solicitada, por lo que interpuso recurso de revisión ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Por lo que, con la finalidad de sobreseer el recurso de revisión citado y dar certeza al particular de la búsqueda de la información solicitada y de la veracidad de la respuesta que le fue otorgada inicialmente, se expone lo siguiente:

Es menester señalar que normativamente sí existe el Centro Federal de Protección a Personas; sin embargo, éste se encuentra en proceso de estructuración, toda vez que de la normativa antes descrita, es posible concluir que el Titular de dicho Centro, para el desahogo de sus funciones, necesita de un grupo de servidores públicos a los cuales les designará facultades a efecto de atender el objetivo de la ***Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal***, circunstancia que a la fecha de presentación de la solicitud no acontece, toda vez que las designaciones recaen bajo un procedimiento de selección que garantice la idoneidad del personal, así como su capacitación para el ejercicio del cargo que se le designe, tal y como se desprende de los siguientes preceptos legales:

ARTÍCULO 8. *Para el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley, **se dotará a todo el personal responsable de la operación del Programa de las herramientas y el equipo necesario para un desempeño eficaz.***

Además, se implementarán procedimientos de selección que garanticen la idoneidad del personal, así como su capacitación para el ejercicio del cargo.

ARTÍCULO 9. *El Centro deberá contar con un grupo multidisciplinario de servidores públicos integrado por abogados, médicos, psicólogos, trabajadores sociales y demás profesionistas que sean necesarios, así como con elementos de la Policía Federal Ministerial adscritos a la Unidad.*

ARTÍCULO 10. La ejecución de las Medidas de Protección estará a cargo de la Unidad misma que dependerá del Director y se integrará con agentes de la Policía Federal Ministerial, entrenados y capacitados para tal fin.

Una vez expuesto lo anterior, es importante recordar que el particular requiere conocer el registro, expedientes, y número de personas incorporadas al "Programa Federal de Protección a Personas" del Centro Federal de Protección a Personas a la fecha de presentación del requerimiento.

Por lo que, como se le informó al particular en respuesta inicial, **el Centro Federal de Protección a Personas aún se encuentra en proceso de estructuración**, circunstancia que implica señalar que de manera interna se están llevando a cabo diversas actividades entre las que destacan los procedimientos de selección de personal que garantizaran la idoneidad y capacitación para el ejercicio del cargo y, en su caso, analicen las solicitudes de incorporación al "Programa Federal de Protección a Personas" que, en su momento, los Titulares de las Subprocuradurías y/o Fiscalías de la Procuraduría General de la República presenten y, que de acuerdo a su formalidad, éstas puedan ser determinadas como positivas o negativas.

Así las cosas, se insiste que a la fecha de presentación de la solicitud, normativamente se ha regulado las facultades generales de este Centro Federal de Protección a Personas, y no así se ha emitido aquella normativa, tales como lineamientos, protocolos, acuerdos y demás instrumentos necesarios para el debido funcionamiento del "Programa Federal de Protección a Personas", máxime que de acuerdo a las facultades del Titular de dicho Órgano Desconcentrado, es el servidor público que se encuentra realizando las gestiones necesarias para emitir los citados ordenamientos legales a efecto de poner en marcha al "Programa Federal de Protección a Personas" y, por ende, por conducto de los servidores públicos, los cuales se encuentran en proceso de designación, incorporen las solicitudes.

Robustece lo anterior, toda vez que este Centro Federal de Protección a Personas no es la autoridad para elaborar y determinar por propia cuenta la procedencia de una solicitud de incorporación al denominado Programa, siendo que éstas son solicitadas por los Titulares de las Subprocuradurías y/o Fiscalías en donde se encuentre adscrito el Agente del Ministerio Público de la Federación responsable del procedimiento penal, y las cuales, de conformidad con el artículo 3 de la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal, son independientes; tal y como se desprende a continuación:

ARTÍCULO 3. Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, en el ámbito de su competencia, están obligadas a prestar la colaboración que les requiera la Procuraduría General de la República, por conducto del Centro para la aplicación de las Medidas de Protección previstas en esta Ley.

La administración y ejecución de las medidas de protección contempladas en el Programa, son independientes del desarrollo del Procedimiento Penal, el cual sólo servirá para determinar y eliminar los factores de riesgo de la persona sujeta a protección.

En consecuencia, se desprende una imposibilidad material para que el Centro Federal de Protección a Personas se pronuncie respecto de la información solicitada por la particular, toda vez que, no se advierte que el "Programa Federal de Protección a Personas" se encuentre en funcionamiento, siendo que no aún no se han emitido los lineamientos, protocolos, acuerdos y demás instrumentos para su funcionamiento, ni se ha designado a los servidores públicos que se encargarán de su administración, ni tampoco se deprenenden elementos suficientes para afirmar o negar que se han recibido solicitudes de incorporación al programa por parte de las áreas sustantivas de la Procuraduría General de la República.

Lo anterior, toda vez que atendiendo la importancia de la materia por la cual fue creado este Centro, es necesario que su propio Titular, de acuerdo a su capacitación y conocimiento de los temas específicos, sea el único servidor público encargado de la elaboración de los lineamientos, protocolos, acuerdos y demás instrumentos para su funcionamiento, máxime que de conformidad con los siguientes preceptos legales cuenta con autonomía, principalmente técnica, operativa y presupuestal; como se desprende a continuación:

*ARTÍCULO 5. La protección de personas se regirá por los siguientes principios:
[...]*

V. Autonomía: El Director gozará de las más amplias facultades para dictar las medidas oportunas que sujeten y garanticen la exacta aplicación de la presente Ley.

ARTÍCULO 6. El Centro es un Órgano Desconcentrado y Especializado de la Procuraduría General de la República; con autonomía técnica y operativa en la aplicación de las Medidas de Protección, el cual estará a cargo de un Director, nombrado y removido libremente por el Presidente de la República, a propuesta del Procurador.

ARTÍCULO 7. El Director, para el cumplimiento de la presente Ley contará con las siguientes facultades:

I. Suscribir y emitir los instrumentos jurídicos que faciliten el funcionamiento y operación del Programa, previa consideración del Procurador.

II. Recibir y analizar las solicitudes de incorporación de una persona al Programa, en virtud de encontrarse en situación de riesgo o peligro por su intervención en un Procedimiento Penal. Estas solicitudes deberán ser presentadas por el Titular de la Subprocuraduría o de la unidad administrativa equivalente a las que se encuentre asignado el Ministerio Público responsable del Procedimiento Penal, en donde interviene o ha intervenido la persona a proteger.

X. Gestionar ante la Oficialía Mayor de la Procuraduría lo relativo a la obtención de los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros para la correcta aplicación de sus obligaciones, una vez que se haya autorizado el presupuesto para tal efecto.

RESOLUCIÓN PGR/CT/0025/2018: En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, el Comité de Transparencia **confirma** declarar la inexistencia de la información concerniente al registro, expedientes y número de las personas incorporadas al Programa Federal de Protección a Personas, toda vez que tal y como ha quedado evidenciado con anterioridad, existe una imposibilidad material, siendo que aún se están realizando las gestiones necesarias para la emisión de los lineamientos, protocolos, acuerdos y demás

La presente resolución forma parte del Acta de la Décima Octava Sesión Ordinaria celebrada el 15 de mayo del 2018 del Comité de Transparencia de la Procuraduría General de la República. Al efecto, se elabora por triplicado, firmando al calce los integrantes del Comité de Transparencia para constancia:

INTEGRANTES



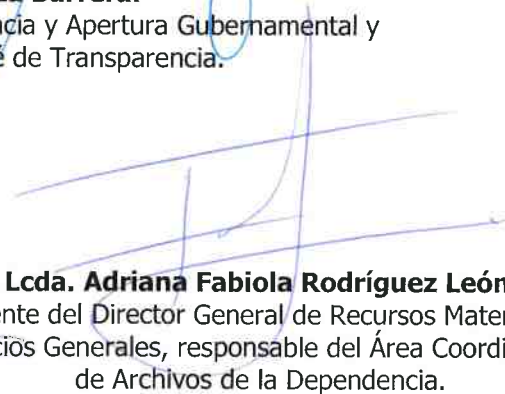
Lcda. Adi Loza Barrera.

Titular de la Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental y
Presidenta del Comité de Transparencia.



Lic. Luis Grijalva Torrero.

Titular del Órgano Interno de Control



Lcda. Adriana Fabiola Rodríguez León.

Suplente del Director General de Recursos Materiales y
Servicios Generales, responsable del Área Coordinadora
de Archivos de la Dependencia.



Lcda. Gabriela Santillán García.

Secretaría Técnica del Comité de Transparencia
Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental
Elaboró



Lic. Miguel Ángel Cerón Cruz.

Director de Acceso a la Información
Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental
Vo. Bo.

RESOLUCIÓN

A. Solicitudes de Acceso a la Información en las que se analiza la inexistencia de la información solicitada:

A.3. Folio 1700300001318 – RRA 2243/18 – Centro Federal de Protección a Personas

Contenido de la Solicitud: *"Solicito el nombramiento del titular del Centro Federal de Protección a Personas, así como el presupuesto asignado y ejercido desde la fecha de creación de ese Centro a la fecha."* (Sic)

Otros datos para facilitar su localización:

"Solicito el nombramiento del titular del Centro Federal de Protección a Personas, así como el presupuesto asignado y ejercido desde la fecha de creación de ese Centro a la fecha." (Sic)

Antecedentes:

En respuesta inicial, se informó al particular que a la fecha del ingreso de la solicitud de mérito, el Centro Federal de Protección a Personas **se encontraba en proceso de estructuración**, de ahí que fuera posible referir que al no contarse con una estructura orgánica no fuera posible otorgar la información de interés.

Por lo que, el pasado 10 de abril del 2018, el solicitante se inconformó con la respuesta otorgada por el Centro Federal de Protección a Personas (Órgano Desconcentrado de la Procuraduría General de la República), refiriendo que no se le proporcionó la información solicitada, por lo que interpuso recurso de revisión ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Por lo que, con la finalidad de sobreseer el recurso de revisión citado y dar certeza al particular de la búsqueda de la información solicitada y de la veracidad de la respuesta que le fue otorgada inicialmente, se expone lo siguiente:

Resulta necesario precisar que por medidas de protección debe entenderse como aquellas acciones tendientes a eliminar y reducir los riesgos que pueda sufrir una persona derivado de la acción de represalia eventual con motivo de su colaboración, o participación en un procedimiento penal, así como de personas o familiares cercanas a éste, mismas que son administradas y ejecutadas bajo el "Programa Federal de Protección a Personas" de manera independiente al desarrollo del procedimiento penal que en su caso se encuentre instaurado ante la Subprocuraduría y/o Fiscalía respectiva.

Lo anterior, considerando que para otorgar dichas medidas de protección es necesario que éstas pasen por el procedimiento contemplado en la **Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal**, mismo que en su parte conducente, se encuentra contemplado a través de los siguientes artículos:

CAPÍTULO VII

DE LA INCORPORACIÓN AL PROGRAMA

ARTÍCULO 20. La solicitud de incorporación al Programa, la deberá realizar el Titular de la Subprocuraduría o unidad administrativa equivalente a la que pertenezca el Ministerio Público o el juez a que se refiere este artículo que conozca del Procedimiento Penal en los que intervenga la persona a proteger, las cuales serán resueltas por el Director del Centro.

ARTÍCULO 22. La petición de otorgar Medidas de Protección deberá contener como elementos mínimos que permitan realizar el Estudio Técnico, los siguientes:

- a) Nombre completo del candidato a protección, su dirección o Jugar de ubicación.
- b) Datos acerca de la investigación o proceso penal en la que interviene.
- c) Papel que detenta en el procedimiento y la importancia que reviste su participación.
- d) Datos que hagan presumir que se encuentra en una situación de riesgo su integridad física o la de personas cercanas a él.
- e) No obstante que la solicitud no contenga toda la información requerida no impide iniciar el Estudio Técnico, pudiéndose recabar los datos necesarios para su elaboración en breve término.
- f) Cualquier otra que el Ministerio Público estime necesaria para justificar la necesidad de su protección.

ARTÍCULO 23. El Director deberá contar con el Estudio Técnico que le permita decidir sobre la procedencia de incorporación o no de una persona al Programa.

ARTÍCULO 24.- Recibida la solicitud de incorporación al Programa, el Director en un tiempo razonable, a fin de determinar su procedencia, tomará en consideración el resultado del Estudio Técnico, el cual deberá de contener por lo menos los siguientes aspectos:

- I. Que exista un nexo entre la intervención de la persona a proteger en el Procedimiento Penal y los factores de riesgo en que se encuentre la persona susceptible de recibir protección. En los casos en que se haya concluido la participación de la Persona Protegida en el procedimiento penal, se realizará un estudio a fin de determinar si subsisten las condiciones de riesgo para determinar su continuidad o su terminación de las medidas de protección.
- II. Que la persona otorgue su consentimiento y proporcione información fidedigna y confiable para la realización el Estudio Técnico, apercibido que la falsedad en su dicho pudiere tener como consecuencia la no incorporación al Programa.
- III. Que la persona a proteger no esté motivado por interés distinto que el de colaborar con la procuración y administración de justicia.
- IV. Que las Medidas de Protección sean las idóneas para garantizar la seguridad de la persona.
- V. Las obligaciones legales que tenga la persona con terceros.
- VI. Los antecedentes penales que tuviere.
- VII. Que la admisión de la persona, no sea un factor que afecte la seguridad del Programa, del Centro o de la Procuraduría.

ARTÍCULO 26. Una vez concluido el Estudio Técnico, el Director adoptará la decisión que corresponda, la cual podría ser reconsiderada a solicitud del Procurador, con independencia de lo previsto en el artículo 20, párrafo segundo de la presente Ley, la que será en el siguiente sentido:

- a) Incorporar a la persona al Programa y establecer las Medidas de Protección que se le aplicarán.
- b) No incorporar al Programa.

Así, se desprende que el Director del Centro Federal de Protección a Personas resolverá aquellas solicitudes de incorporación al "Programa Federal de Protección a Personas", misma que en todo momento deberá realizar el Titular de la Subprocuraduría y/o Fiscalía a la cual

se encuentra adscrito el Ministerio Público de la Federación encargado de la investigación correspondiente, cuya petición deberá contener, entre otros, los siguientes requisitos mínimos:

- Nombre completo del candidato a protección, su dirección o lugar de ubicación.
- Datos acerca de la investigación o proceso penal en la que interviene.
- Datos que hagan presumir que se encuentra en una situación de riesgo su integridad física o la de personas cercanas a él.
- Cualquier otra que el Ministerio Público estime necesaria para justificar la necesidad de su protección.

Ello, a efecto de poder emitir el "Estudio Técnico" respectivo, **del cual el Director del Órgano Desconcentrado en comento, en un tiempo razonable, determinará su procedencia al multicitado "Programa Federal de Protección a Personas"**, así como establecer las medidas de protección que se aplicarán.

Así, se desprende que **el Director de este Centro Federal de Protección a Personas resolverá aquellas solicitudes de incorporación al "Programa Federal de Protección a Personas"**, misma que en todo momento deberá realizar el Titular de la Subprocuraduría y/o Fiscalía a la cual se encuentra adscrito el Ministerio Público de la Federación encargado de la investigación correspondiente.

No obstante y expuesto lo anterior, es menester señalar que normativamente sí existe el Centro Federal de Protección a Personas; sin embargo, éste **se encuentra en proceso de estructuración**, toda vez que de la normativa antes descrita, es posible concluir que el Titular de dicho Centro, para el desahogo de sus funciones, necesita de un grupo de servidores públicos a los cuales les designará facultades a efecto de atender el objetivo de la **Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal**, **circunstancia que a la fecha de presentación de la solicitud no acontece**, toda vez que las designaciones recaen bajo un procedimiento de selección que garantice la idoneidad del personal, así como su capacitación para el ejercicio del cargo que se le designe, tal y como se desprende de los siguientes preceptos legales:

ARTÍCULO 8. Para el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley, se dotará a todo el personal responsable de la operación del Programa de las herramientas y el equipo necesario para un desempeño eficaz.

Además, se implementarán procedimientos de selección que garanticen la idoneidad del personal, así como su capacitación para el ejercicio del cargo.

ARTÍCULO 9. El Centro deberá contar con un grupo multidisciplinario de servidores públicos, integrado por abogados, médicos, psicólogos, trabajadores sociales y demás profesionistas que sean necesarios, así como con elementos de la Policía Federal Ministerial adscritos a la Unidad.

ARTÍCULO 10. La ejecución de las Medidas de Protección estará a cargo de la Unidad misma que dependerá del Director y se integrará con agentes de la Policía Federal Ministerial, entrenados y capacitados para tal fin.

Una vez expuesto lo anterior, es importante recordar que el particular requiere “nombramiento del titular del Centro Federal de Protección a Personas, así como el presupuesto asignado y ejercido desde la fecha de creación” del Centro Federal de Protección a Personas a la fecha de presentación del requerimiento.

Por lo que, como se le informó al particular en respuesta inicial, **el Centro Federal de Protección a Personas aún se encuentra en proceso de estructuración.** circunstancia que implica señalar que de manera interna se están llevando a cabo diversas actividades entre las que destacan los procedimientos de selección de personal que garantizaran la idoneidad y capacitación para el ejercicio del cargo y, en su caso, analicen las solicitudes de incorporación al “Programa Federal de Protección a Personas” que, en su momento, los Titulares de las Subprocuradurías y/o Fiscalías de la Procuraduría General de la República presenten y, que de acuerdo a su formalidad, éstas puedan ser determinadas como positivas o negativas.

Así las cosas, se insiste que a la fecha de presentación de la solicitud, **normativamente se ha regulado las facultades** generales de este Centro Federal de Protección a Personas, **y no así se ha emitido aquella normativa**, tales como lineamientos, protocolos, acuerdos y demás instrumentos necesarios para el debido funcionamiento del “Programa Federal de Protección a Personas”, máxime que de acuerdo a las facultades del Titular de dicho Órgano Desconcentrado, es el servidor público que se encuentra realizando las gestiones necesarias para emitir los citados ordenamientos legales a efecto de poner en marcha al “Programa Federal de Protección a Personas” y, por ende, por conducto de los servidores públicos, los cuales se encuentran en proceso de designación, incorporen las solicitudes.

Robustece lo anterior, toda vez que este Centro Federal de Protección a Personas no es la autoridad para elaborar y determinar por propia cuenta la procedencia de una solicitud de incorporación al denominado Programa, siendo que éstas son solicitadas por los Titulares de las Subprocuradurías y/o Fiscalías en donde se encuentre adscrito el Agente del Ministerio Público de la Federación responsable del procedimiento penal, y las cuales, de conformidad con el artículo 3 de la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal, son independientes; tal y como se desprende a continuación:

ARTÍCULO 3. Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, en el ámbito de su competencia, están obligadas a prestar la colaboración que les requiera la Procuraduría General de la República, por conducto del Centro para la aplicación de las Medidas de Protección previstas en esta Ley.

La administración y ejecución de las medidas de protección contempladas en el Programa, son independientes del desarrollo del Procedimiento Penal, el cual sólo servirá para determinar y eliminar los factores de riesgo de la persona sujeta a protección.

En consecuencia, se desprende una imposibilidad material para que el Centro Federal de Protección a Personas se pronuncie respecto de la información solicitada por la particular, toda vez que, no se advierte que el "Programa Federal de Protección a Personas" se encuentre en funcionamiento, siendo que no aún no se han emitido los lineamientos, protocolos, acuerdos y demás instrumentos para su funcionamiento, ni se ha designado a los servidores públicos que se encargarán de su administración, ni tampoco se deprenenden elementos suficientes para afirmar o negar que se han recibido solicitudes de incorporación al programa por parte de las áreas sustantivas de la Procuraduría General de la República.

Lo anterior, toda vez que atendiendo la importancia de la materia por la cual fue creado este Centro, es necesario que su propio Titular, de acuerdo a su capacitación y conocimiento de los temas específicos, sea el único servidor público encargado de la elaboración de los lineamientos, protocolos, acuerdos y demás instrumentos para su funcionamiento, máxime que de conformidad con los siguientes preceptos legales cuenta con autonomía, principalmente técnica, operativa y presupuestal; como se desprende a continuación:

*ARTÍCULO 5. La protección de personas se regirá por los siguientes principios:
[...]*

V. Autonomía: El Director gozará de las más amplias facultades para dictar las medidas oportunas que sujeten y garanticen la exacta aplicación de la presente Ley.

ARTÍCULO 6. El Centro es un Órgano Desconcentrado y Especializado de la Procuraduría General de la República; con autonomía técnica y operativa en la aplicación de las Medidas de Protección, el cual estará a cargo de un Director, nombrado y removido libremente por el Presidente de la República, a propuesta del Procurador.

ARTÍCULO 7. El Director, para el cumplimiento de la presente Ley contará con las siguientes facultades:

I. Suscribir y emitir los instrumentos jurídicos que faciliten el funcionamiento y operación del Programa, previa consideración del Procurador.

II. Recibir y analizar las solicitudes de incorporación de una persona al Programa, en virtud de encontrarse en situación de riesgo o peligro por su intervención en un Procedimiento Penal. Estas solicitudes deberán ser presentadas por el Titular de la Subprocuraduría o de la unidad administrativa equivalente a las que se encuentre asignado el Ministerio Público responsable del Procedimiento Penal, en donde interviene o ha intervenido la persona a proteger.

X. Gestionar ante la Oficialía Mayor de la Procuraduría lo relativo a la obtención de los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros para la correcta aplicación de sus obligaciones, una vez que se haya autorizado el presupuesto para tal efecto.

RESOLUCIÓN PGR/CT/0026/2018: En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, el Comité de Transparencia **confirma** declarar la inexistencia de la información concerniente al nombramiento del titular del Centro Federal de Protección a Personas, así como el presupuesto asignado y ejercido desde la fecha de creación del Centro Federal de Protección a Personas, toda vez que tal y como ha quedado evidenciado con anterioridad, existe una imposibilidad material, siendo que aún se están realizando las gestiones necesarias para la

La presente resolución forma parte del Acta de la Décima Octava Sesión Ordinaria celebrada el 15 de mayo del 2018 del Comité de Transparencia de la Procuraduría General de la República. Al efecto, se elabora por triplicado, firmando al calce los integrantes del Comité de Transparencia para constancia:

INTEGRANTES



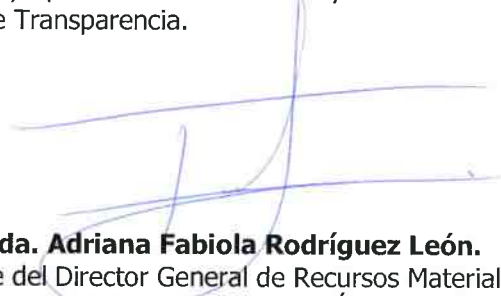
Lcda. Adi Loza Barrera.

Titular de la Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental y
Presidenta del Comité de Transparencia.



Lic. Luis Grijalva Torrero.

Titular del Órgano Interno de Control



Lcda. Adriana Fabiola Rodríguez León.

Suplente del Director General de Recursos Materiales y
Servicios Generales, responsable del Área Coordinadora
de Archivos de la Dependencia.



Lcda. Gabriela Santillán García.

Secretaría Técnica del Comité de Transparencia
Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental
Elaboró



Lic. Miguel Ángel Cerón Cruz.

Director de Acceso a la Información
Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental
Vo. Bo.

RESOLUCIÓN

A. Solicitudes de Acceso a la Información en las que se analiza la inexistencia de la información solicitada:

A.4. Folio 1700300001418 – RRA 2244/18 – Centro Federal de Protección a Personas

Contenido de la Solicitud: *"Deseo conocer quiénes conforman el grupo multidisciplinario de servidores públicos, integrado por abogados, médicos, psicólogos, trabajadores sociales y demás profesionistas que sean necesarios, así como con elementos de la Policía Federal Ministerial adscritos a la Unidad, desde la fecha de creación de ese Centro a la fecha."* (Sic)

Otros datos para facilitar su localización:

"Deseo conocer quiénes conforman el grupo multidisciplinario de servidores públicos, integrado por abogados, médicos, psicólogos, trabajadores sociales y demás profesionistas que sean necesarios, así como con elementos de la Policía Federal Ministerial adscritos a la Unidad, desde la fecha de creación de ese Centro a la fecha." (Sic)

Antecedentes:

En respuesta inicial, se informó al particular que a la fecha del ingreso de la solicitud de mérito, el Centro Federal de Protección a Personas **se encontraba en proceso de estructuración**, de ahí que fuera posible advertir que no se desprendieran elementos suficientes que permitieran suponer que se cuente con un documento que posiblemente contemple la estructura o listado de aquellos servidores públicos que compongan el grupo multidisciplinario adscrito a la Unidad de Protección a Personas.

Por lo que, el pasado 10 de abril del 2018, el solicitante se inconformó con la respuesta otorgada por el Centro Federal de Protección a Personas (Órgano Desconcentrado de la Procuraduría General de la República), refiriendo que no se le proporcionó la información solicitada, por lo que interpuso recurso de revisión ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Por lo que, con la finalidad de sobreseer el recurso de revisión citado y dar certeza al particular de la búsqueda de la información solicitada y de la veracidad de la respuesta que le fue otorgada inicialmente, se expone lo siguiente:

Resulta necesario precisar que por medidas de protección debe entenderse como aquellas acciones tendientes a eliminar y reducir los riesgos que pueda sufrir una persona derivado de la acción de represalia eventual con motivo de su colaboración, o participación en un procedimiento penal, así como de personas o familiares cercanas a éste, mismas que son administradas y ejecutadas bajo el "Programa Federal de Protección a Personas" de manera independiente al desarrollo del procedimiento penal que en su caso se encuentre instaurado ante la Subprocuraduría y/o Fiscalía respectiva.

Lo anterior, considerando que para otorgar dichas medidas de protección es necesario que éstas pasen por el procedimiento contemplado en la **Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal**, mismo que en su parte conducente, se encuentra contemplado a través de los siguientes artículos:

CAPÍTULO VII

DE LA INCORPORACIÓN AL PROGRAMA

ARTÍCULO 20. La solicitud de incorporación al Programa, la deberá realizar el Titular de la Subprocuraduría o unidad administrativa equivalente a la que pertenezca el Ministerio Público o el juez a que se refiere este artículo que conozca del Procedimiento Penal en los que intervenga la persona a proteger, las cuales serán resueltas por el Director del Centro.

ARTÍCULO 22. La petición de otorgar Medidas de Protección deberá contener como elementos mínimos que permitan realizar el Estudio Técnico, los siguientes:

- a) Nombre completo del candidato a protección, su dirección o Jugar de ubicación.
- b) Datos acerca de la investigación o proceso penal en la que interviene.
- c) Papel que detenta en el procedimiento y la importancia que reviste su participación.
- d) Datos que hagan presumir que se encuentra en una situación de riesgo su integridad física o la de personas cercanas a él.
- e) No obstante que la solicitud no contenga toda la información requerida no impide iniciar el Estudio Técnico, pudiéndose recabar los datos necesarios para su elaboración en breve término.
- f) Cualquier otra que el Ministerio Público estime necesaria para justificar la necesidad de su protección.

ARTÍCULO 23. El Director deberá contar con el Estudio Técnico que le permita decidir sobre la procedencia de incorporación o no de una persona al Programa.

ARTÍCULO 24.- Recibida la solicitud de incorporación al Programa, el Director en un tiempo razonable, a fin de determinar su procedencia, tomará en consideración el resultado del Estudio Técnico, el cual deberá de contener por lo menos los siguientes aspectos:

- I. Que exista un nexo entre la intervención de la persona a proteger en el Procedimiento Penal y los factores de riesgo en que se encuentre la persona susceptible de recibir protección. En los casos en que se haya concluido la participación de la Persona Protegida en el procedimiento penal, se realizará un estudio a fin de determinar si subsisten las condiciones de riesgo para determinar su continuidad o su terminación de las medidas de protección.
- II. Que la persona otorgue su consentimiento y proporcione información fidedigna y confiable para la realización el Estudio Técnico, apercibido que la falsedad en su dicho pudiere tener como consecuencia la no incorporación al Programa.
- III. Que la persona a proteger no esté motivado por interés distinto que el de colaborar con la procuración y administración de justicia.
- IV. Que las Medidas de Protección sean las idóneas para garantizar la seguridad de la persona.
- V. Las obligaciones legales que tenga la persona con terceros.
- VI. Los antecedentes penales que tuviere.
- VII. Que la admisión de la persona, no sea un factor que afecte la seguridad del Programa, del Centro o de la Procuraduría.

ARTÍCULO 26. Una vez concluido el Estudio Técnico, el Director adoptará la decisión que corresponda, la cual podría ser reconsiderada a solicitud del Procurador, con independencia de lo previsto en el artículo 20, párrafo segundo de la presente Ley, la que será en el siguiente sentido:

- a) Incorporar a la persona al Programa y establecer las Medidas de Protección que se le aplicarán.

b) No incorporar al Programa.

Así, se desprende que el Director del Centro Federal de Protección a Personas resolverá aquellas solicitudes de incorporación al "Programa Federal de Protección a Personas", misma que en todo momento deberá realizar el Titular de la Subprocuraduría y/o Fiscalía a la cual se encuentra adscrito el Ministerio Público de la Federación encargado de la investigación correspondiente, cuya petición deberá contener, entre otros, los siguientes requisitos mínimos:

- Nombre completo del candidato a protección, su dirección o lugar de ubicación.
- Datos acerca de la investigación o proceso penal en la que interviene.
- Datos que hagan presumir que se encuentra en una situación de riesgo su integridad física o la de personas cercanas a él.
- Cualquier otra que el Ministerio Público estime necesaria para justificar la necesidad de su protección.

Ello, a efecto de poder emitir el "Estudio Técnico" respectivo, **del cual el Director del Órgano Desconcentrado en comento, en un tiempo razonable, determinará su procedencia al multicitado "Programa Federal de Protección a Personas"**, así como establecer las medidas de protección que se aplicarán.

Así, se desprende que **el Director de este Centro Federal de Protección a Personas resolverá aquellas solicitudes de incorporación al "Programa Federal de Protección a Personas"**, misma que en todo momento deberá realizar el Titular de la Subprocuraduría y/o Fiscalía a la cual se encuentra adscrito el Ministerio Público de la Federación encargado de la investigación correspondiente.

No obstante y expuesto lo anterior, es menester señalar que normativamente sí existe el Centro Federal de Protección a Personas; sin embargo, éste **se encuentra en proceso de estructuración**, toda vez que de la normativa antes descrita, es posible concluir que el Titular de dicho Centro, para el desahogo de sus funciones, necesita de un grupo de servidores públicos a los cuales les designará facultades a efecto de atender el objetivo de la **Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal**, circunstancia que a la fecha de presentación de la solicitud no acontece, toda vez que las designaciones recaen bajo un procedimiento de selección que garantice la idoneidad del personal, así como su capacitación para el ejercicio del cargo que se le designe, tal y como se desprende de los siguientes preceptos legales:

ARTÍCULO 8. Para el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley, se dotará a todo el personal responsable de la operación del Programa de las herramientas y el equipo necesario para un desempeño eficaz.

Además, se implementarán procedimientos de selección que garanticen la idoneidad del personal, así como su capacitación para el ejercicio del cargo.

ARTÍCULO 9. El Centro deberá contar con un grupo multidisciplinario de servidores públicos, integrado por abogados, médicos, psicólogos, trabajadores sociales y demás profesionistas que sean necesarios, así como con elementos de la Policía Federal Ministerial adscritos a la Unidad.

ARTÍCULO 10. La ejecución de las Medidas de Protección estará a cargo de la Unidad misma que dependerá del Director y se integrará con agentes de la Policía Federal Ministerial, entrenados y capacitados para tal fin.

Una vez expuesto lo anterior, es importante recordar que el particular requiere “quiénes conforman el grupo multidisciplinario de servidores públicos, integrado por abogados, médicos, psicólogos, trabajadores sociales y demás profesionistas que sean necesarios, así como con elementos de la Policía Federal Ministerial adscritos a la Unidad, desde la fecha de creación de ese Centro a la fecha” del Centro Federal de Protección a Personas a la fecha de presentación del requerimiento.

Por lo que, como se le informó al particular en respuesta inicial, **el Centro Federal de Protección a Personas aún se encuentra en proceso de estructuración,** circunstancia que implica señalar que de manera interna se están llevando a cabo diversas actividades entre las que destacan los procedimientos de selección de personal que garantizaran la idoneidad y capacitación para el ejercicio del cargo y, en su caso, analicen las solicitudes de incorporación al “Programa Federal de Protección a Personas” que, en su momento, los Titulares de las Subprocuradurías y/o Fiscalías de la Procuraduría General de la República presenten y, que de acuerdo a su formalidad, éstas puedan ser determinadas como positivas o negativas.

Así las cosas, se insiste que a la fecha de presentación de la solicitud, **normativamente se ha regulado las facultades** generales de este Centro Federal de Protección a Personas, **y no así se ha emitido aquella normativa,** tales como lineamientos, protocolos, acuerdos y demás instrumentos necesarios para el debido funcionamiento del “Programa Federal de Protección a Personas”, máxime que de acuerdo a las facultades del Titular de dicho Órgano Desconcentrado, es el servidor público que se encuentra realizando las gestiones necesarias para emitir los citados ordenamientos legales a efecto de poner en marcha al “Programa Federal de Protección a Personas” y, por ende, por conducto de los servidores públicos, los cuales se encuentran en proceso de designación, incorporen las solicitudes.

Robustece lo anterior, toda vez que este Centro Federal de Protección a Personas no es la autoridad para elaborar y determinar por propia cuenta la procedencia de una solicitud de incorporación al denominado Programa, siendo que éstas son solicitadas por los Titulares de las Subprocuradurías y/o Fiscalías en donde se encuentre adscrito el Agente del Ministerio Público de la Federación responsable del procedimiento penal, y las cuales, de conformidad con el artículo 3 de la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal, son independientes; tal y como se depende a continuación:

ARTÍCULO 3. Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, en el ámbito de su competencia, están obligadas a prestar la colaboración que les requiera la Procuraduría General de la República, por conducto del Centro para la aplicación de las Medidas de Protección previstas en esta Ley.

La administración y ejecución de las medidas de protección contempladas en el Programa, son independientes del desarrollo del Procedimiento Penal, el cual sólo servirá para determinar y eliminar los factores de riesgo de la persona sujeta a protección.

En consecuencia, se desprende una imposibilidad material para que el Centro Federal de Protección a Personas se pronuncie respecto de la información solicitada por la particular, toda vez que, no se advierte que el "Programa Federal de Protección a Personas" se encuentre en funcionamiento, siendo que no aún no se han emitido los lineamientos, protocolos, acuerdos y demás instrumentos para su funcionamiento, ni se ha designado a los servidores públicos que se encargarán de su administración, ni tampoco se dependen elementos suficientes para afirmar o negar que se han recibido solicitudes de incorporación al programa por parte de las áreas sustantivas de la Procuraduría General de la República.

Lo anterior, toda vez que atendiendo la importancia de la materia por la cual fue creado este Centro, es necesario que su propio Titular, de acuerdo a su capacitación y conocimiento de los temas específicos, sea el único servidor público encargado de la elaboración de los lineamientos, protocolos, acuerdos y demás instrumentos para su funcionamiento, máxime que de conformidad con los siguientes preceptos legales cuenta con autonomía, principalmente técnica, operativa y presupuestal; como se desprende a continuación:

*ARTÍCULO 5. La protección de personas se regirá por los siguientes principios:
[...]*

V. Autonomía: El Director gozará de las más amplias facultades para dictar las medidas oportunas que sujeten y garanticen la exacta aplicación de la presente Ley.

...
ARTÍCULO 6. El Centro es un Órgano Desconcentrado y Especializado de la Procuraduría General de la República; con autonomía técnica y operativa en la aplicación de las Medidas de Protección, el cual estará a cargo de un Director, nombrado y removido libremente por el Presidente de la República, a propuesta del Procurador.

ARTÍCULO 7. El Director, para el cumplimiento de la presente Ley contará con las siguientes facultades:

I. Suscribir y emitir los instrumentos jurídicos que faciliten el funcionamiento y operación del Programa, previa consideración del Procurador.

II. Recibir y analizar las solicitudes de incorporación de una persona al Programa, en virtud de encontrarse en situación de riesgo o peligro por su intervención en un Procedimiento Penal. Estas solicitudes deberán ser presentadas por el Titular de la Subprocuraduría o de la unidad administrativa equivalente a las que se encuentre asignado el Ministerio Público responsable del Procedimiento Penal, en donde interviene o ha intervenido la persona a proteger.

...
X. Gestionar ante la Oficialía Mayor de la Procuraduría lo relativo a la obtención de los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros para la correcta aplicación de sus obligaciones, una vez que se haya autorizado el presupuesto para tal efecto.

La presente resolución forma parte del Acta de la Décima Octava Sesión Ordinaria celebrada el 15 de mayo del 2018 del Comité de Transparencia de la Procuraduría General de la República. Al efecto, se elabora por triplicado, firmando al calce los integrantes del Comité de Transparencia para constancia:


INTEGRANTES



Lcda. Adi Loza Barrera.
Titular de la Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental y
Presidenta del Comité de Transparencia.




Lic. Luis Grijalva Torrero.
Titular del Órgano Interno de Control



Lcda. Adriana Fabiola Rodríguez León.
Suplente del Director General de Recursos Materiales y
Servicios Generales, responsable del Área Coordinadora
de Archivos de la Dependencia.



Lcda. Gabriela Santillán García.
Secretaría Técnica del Comité de Transparencia
Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental
Elaboró



Lic. Miguel Ángel Cerón Cruz.
Director de Acceso a la Información
Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental
Vo. Bo.

RESOLUCIÓN

A. Solicitudes de Acceso a la Información en las que se analiza la inexistencia de la información solicitada:

A.7. Folio 1700300001718 – RRA 2247/18 – Centro Federal de Protección a Personas

Contenido de la Solicitud: *"Solicito los informes anuales presentados por el titular del Centro Federal de Protección a Personas al Procurador sobre los resultados y las operaciones del Programa Federal de Protección a Personas, desde la fecha de creación de ese Centro a la fecha."* (Sic)

Otros datos para facilitar su localización:

"Solicito los informes anuales presentados por el titular del Centro Federal de Protección a Personas al Procurador sobre los resultados y las operaciones del Programa Federal de Protección a Personas, desde la fecha de creación de ese Centro a la fecha." (Sic)

Antecedentes:

En respuesta inicial, se informó al particular que a la fecha del ingreso de la solicitud de mérito, el Centro Federal de Protección a Personas **se encontraba en proceso de estructuración**, de ahí que fuera posible advertir que no se desprendieran elementos suficientes que permitieran materialmente suponer que se cuente en primer momento con informes de resultados y operaciones del Programa en mención.

Por lo que, el pasado 10 de abril del 2018, el solicitante se inconformó con la respuesta otorgada por el Centro Federal de Protección a Personas (Órgano Desconcentrado de la Procuraduría General de la República), refiriendo que no se le proporcionó la información solicitada, por lo que interpuso recurso de revisión ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Por lo que, con la finalidad de sobreseer el recurso de revisión citado y dar certeza al particular de la búsqueda de la información solicitada y de la veracidad de la respuesta que le fue otorgada inicialmente, se expone lo siguiente:

Resulta necesario precisar que por medidas de protección debe entenderse como aquellas acciones tendientes a eliminar y reducir los riesgos que pueda sufrir una persona derivado de la acción de represalia eventual con motivo de su colaboración, o participación en un procedimiento penal, así como de personas o familiares cercanas a éste, mismas que son administradas y ejecutadas bajo el "Programa Federal de Protección a Personas" de manera independiente al desarrollo del procedimiento penal que en su caso se encuentre instaurado ante la Subprocuraduría y/o Fiscalía respectiva.

Lo anterior, considerando que para otorgar dichas medidas de protección es necesario que éstas pasen por el procedimiento contemplado en la **Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal**, mismo que en su parte conducente, se encuentra contemplado a través de los siguientes artículos:

CAPÍTULO VII

DE LA INCORPORACIÓN AL PROGRAMA

ARTÍCULO 20. La solicitud de incorporación al Programa, la deberá realizar el Titular de la Subprocuraduría o unidad administrativa equivalente a la que pertenezca el Ministerio Público o el juez a que se refiere este artículo que conozca del Procedimiento Penal en los que intervenga la persona a proteger, las cuales serán resueltas por el Director del Centro.

ARTÍCULO 22. La petición de otorgar Medidas de Protección deberá contener como elementos mínimos que permitan realizar el Estudio Técnico, los siguientes:

- a) Nombre completo del candidato a protección, su dirección o lugar de ubicación.
- b) Datos acerca de la investigación o proceso penal en la que interviene.
- c) Papel que detenta en el procedimiento y la importancia que reviste su participación.
- d) Datos que hagan presumir que se encuentra en una situación de riesgo su integridad física o la de personas cercanas a él.
- e) No obstante que la solicitud no contenga toda la información requerida no impide iniciar el Estudio Técnico, pudiéndose recabar los datos necesarios para su elaboración en breve término.
- f) Cualquier otra que el Ministerio Público estime necesaria para justificar la necesidad de su protección.

ARTÍCULO 23. El Director deberá contar con el Estudio Técnico que le permita decidir sobre la procedencia de incorporación o no de una persona al Programa.

ARTÍCULO 24.- Recibida la solicitud de incorporación al Programa, el Director en un tiempo razonable, a fin de determinar su procedencia, tomará en consideración el resultado del Estudio Técnico, el cual deberá de contener por lo menos los siguientes aspectos:

- I. Que exista un nexo entre la intervención de la persona a proteger en el Procedimiento Penal y los factores de riesgo en que se encuentre la persona susceptible de recibir protección. En los casos en que se haya concluido la participación de la Persona Protegida en el procedimiento penal, se realizará un estudio a fin de determinar si subsisten las condiciones de riesgo para determinar su continuidad o su terminación de las medidas de protección.
- II. Que la persona otorgue su consentimiento y proporcione información fidedigna y confiable para la realización el Estudio Técnico, apercibido que la falsedad en su dicho pudiere tener como consecuencia la no incorporación al Programa.
- III. Que la persona a proteger no esté motivado por interés distinto que el de colaborar con la procuración y administración de justicia.
- IV. Que las Medidas de Protección sean las idóneas para garantizar la seguridad de la persona.
- V. Las obligaciones legales que tenga la persona con terceros.
- VI. Los antecedentes penales que tuviere.
- VII. Que la admisión de la persona, no sea un factor que afecte la seguridad del Programa, del Centro o de la Procuraduría.

ARTÍCULO 26. Una vez concluido el Estudio Técnico, el Director adoptará la decisión que corresponda, la cual podría ser reconsiderada a solicitud del Procurador, con independencia de lo previsto en el artículo 20, párrafo segundo de la presente Ley, la que será en el siguiente sentido:

- a) Incorporar a la persona al Programa y establecer las Medidas de Protección que se le aplicarán.
b) No incorporar al Programa.

Así, se desprende que el Director del Centro Federal de Protección a Personas resolverá aquellas solicitudes de incorporación al "Programa Federal de Protección a Personas", misma que en todo momento deberá realizar el Titular de la Subprocuraduría y/o Fiscalía a la cual se encuentra adscrito el Ministerio Público de la Federación encargado de la investigación correspondiente, cuya petición deberá contener, entre otros, los siguientes requisitos mínimos:

- Nombre completo del candidato a protección, su dirección o lugar de ubicación.
- Datos acerca de la investigación o proceso penal en la que interviene.
- Datos que hagan presumir que se encuentra en una situación de riesgo su integridad física o la de personas cercanas a él.
- Cualquier otra que el Ministerio Público estime necesaria para justificar la necesidad de su protección.

Ello, a efecto de poder emitir el "Estudio Técnico" respectivo, **del cual el Director del Órgano Desconcentrado en comento, en un tiempo razonable, determinará su procedencia al multicitado "Programa Federal de Protección a Personas"**, así como establecer las medidas de protección que se aplicarán.

Así, se desprende que **el Director de este Centro Federal de Protección a Personas resolverá aquellas solicitudes de incorporación al "Programa Federal de Protección a Personas"**, misma que en todo momento deberá realizar el Titular de la Subprocuraduría y/o Fiscalía a la cual se encuentra adscrito el Ministerio Público de la Federación encargado de la investigación correspondiente.

No obstante y expuesto lo anterior, es menester señalar que normativamente sí existe el Centro Federal de Protección a Personas; sin embargo, éste **se encuentra en proceso de estructuración**, toda vez que de la normativa antes descrita, es posible concluir que el Titular de dicho Centro, para el desahogo de sus funciones, necesita de un grupo de servidores públicos a los cuales les designará facultades a efecto de atender el objetivo de la **Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal**, circunstancia que a la fecha de presentación de la solicitud no acontece, toda vez que las designaciones recaen bajo un procedimiento de selección que garantice la idoneidad del personal, así como su capacitación para el ejercicio del cargo que se le designe, tal y como se desprende de los siguientes preceptos legales:

ARTÍCULO 8. Para el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley, se dotará a todo el personal responsable de la operación del Programa de las herramientas y el equipo necesario para un desempeño eficaz.

Además, se implementarán procedimientos de selección que garanticen la idoneidad del personal, así como su capacitación para el ejercicio del cargo.

ARTÍCULO 9. El Centro deberá contar con un grupo multidisciplinario de servidores públicos, integrado por abogados, médicos, psicólogos, trabajadores sociales y demás profesionistas que sean necesarios, así como con elementos de la Policía Federal Ministerial adscritos a la Unidad.

ARTÍCULO 10. La ejecución de las Medidas de Protección estará a cargo de la Unidad misma que dependerá del Director y se integrará con agentes de la Policía Federal Ministerial, entrenados y capacitados para tal fin.

Una vez expuesto lo anterior, es importante recordar que el particular requiere los informes anuales presentados por el titular del Centro Federal de Protección a Personas al Procurador sobre los resultados y las operaciones del Programa Federal de Protección a Personas desde su fecha de creación a la fecha.

Por lo que, como se le informó al particular en respuesta inicial, **el Centro Federal de Protección a Personas aún se encuentra en proceso de estructuración**, circunstancia que implica señalar que de manera interna se están llevando a cabo diversas actividades entre las que destacan los procedimientos de selección de personal que garantizaran la idoneidad y capacitación para el ejercicio del cargo y, en su caso, analicen las solicitudes de incorporación al "Programa Federal de Protección a Personas" que, en su momento, los Titulares de las Subprocuradurías y/o Fiscalías de la Procuraduría General de la República presenten y, que de acuerdo a su formalidad, éstas puedan ser determinadas como positivas o negativas.

Así las cosas, se insiste que a la fecha de presentación de la solicitud, **normativamente se ha regulado las facultades** generales de este Centro Federal de Protección a Personas, y **no así se ha emitido aquella normativa**, tales como lineamientos, protocolos, acuerdos y demás instrumentos necesarios para el debido funcionamiento del "Programa Federal de Protección a Personas", máxime que de acuerdo a las facultades del Titular de dicho Órgano Desconcentrado, es el servidor público que se encuentra realizando las gestiones necesarias para emitir los citados ordenamientos legales a efecto de poner en marcha al "Programa Federal de Protección a Personas" y, por ende, por conducto de los servidores públicos, los cuales se encuentran en proceso de designación, incorporen las solicitudes.

Robustece lo anterior, toda vez que este Centro Federal de Protección a Personas no es la autoridad para elaborar y determinar por propia cuenta la procedencia de una solicitud de incorporación al denominado Programa, siendo que éstas son solicitadas por los Titulares de las Subprocuradurías y/o Fiscalías en donde se encuentre adscrito el Agente del Ministerio Público de la Federación responsable del procedimiento penal, y las cuales, de conformidad con el artículo 3 de la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal, son independientes; tal y como se desprende a continuación:

ARTÍCULO 3. Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, en el ámbito de su competencia, están obligadas a prestar la colaboración que les requiera la Procuraduría General de la República, por conducto del Centro para la aplicación de las Medidas de Protección previstas en esta Ley.

La administración y ejecución de las medidas de protección contempladas en el Programa, son independientes del desarrollo del Procedimiento Penal, el cual sólo servirá para determinar y eliminar los factores de riesgo de la persona sujeta a protección.

En consecuencia, se desprende una imposibilidad material para que el Centro Federal de Protección a Personas se pronuncie respecto de la información solicitada por la particular, toda vez que, no se advierte que el "Programa Federal de Protección a Personas" se encuentre en funcionamiento, siendo que no aún no se han emitido los lineamientos, protocolos, acuerdos y demás instrumentos para su funcionamiento, ni se ha designado a los servidores públicos que se encargarán de su administración, ni tampoco se deprenden elementos suficientes para afirmar o negar que se han recibido solicitudes de incorporación al programa por parte de las áreas sustantivas de la Procuraduría General de la República.

Lo anterior, toda vez que atendiendo la importancia de la materia por la cual fue creado este Centro, es necesario que su propio Titular, de acuerdo a su capacitación y conocimiento de los temas específicos, sea el único servidor público encargado de la elaboración de los lineamientos, protocolos, acuerdos y demás instrumentos para su funcionamiento, máxime que de conformidad con los siguientes preceptos legales cuenta con autonomía, principalmente técnica, operativa y presupuestal; como se desprende a continuación:

*ARTÍCULO 5. La protección de personas se regirá por los siguientes principios:
[...]*

V. Autonomía: El Director gozará de las más amplias facultades para dictar las medidas oportunas que sujeten y garanticen la exacta aplicación de la presente Ley.

*...
ARTÍCULO 6. El Centro es un Órgano Desconcentrado y Especializado de la Procuraduría General de la República; con autonomía técnica y operativa en la aplicación de las Medidas de Protección, el cual estará a cargo de un Director, nombrado y removido libremente por el Presidente de la República, a propuesta del Procurador.*

ARTÍCULO 7. El Director, para el cumplimiento de la presente Ley contará con las siguientes facultades:

I. Suscribir y emitir los instrumentos jurídicos que faciliten el funcionamiento y operación del Programa, previa consideración del Procurador.

II. Recibir y analizar las solicitudes de incorporación de una persona al Programa, en virtud de encontrarse en situación de riesgo o peligro por su intervención en un Procedimiento Penal. Estas solicitudes deberán ser presentadas por el Titular de la Subprocuraduría o de la unidad administrativa equivalente a las que se encuentre asignado el Ministerio Público responsable del Procedimiento Penal, en donde interviene o ha intervenido la persona a proteger.

*...
X. Gestionar ante la Oficialía Mayor de la Procuraduría lo relativo a la obtención de los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros para la correcta aplicación de sus obligaciones, una vez que se haya autorizado el presupuesto para tal efecto.*

RESOLUCIÓN PGR/CT/0030/2018: En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, el Comité de Transparencia **confirma** declarar la inexistencia de los informes

La presente resolución forma parte del Acta de la Décima Octava Sesión Ordinaria celebrada el 15 de mayo del 2018 del Comité de Transparencia de la Procuraduría General de la República. Al efecto, se elabora por triplicado, firmando al calce los integrantes del Comité de Transparencia para constancia:

INTEGRANTES



Lcda. Adi Loza Barrera.

Titular de la Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental y
Presidenta del Comité de Transparencia.



Lic. Luis Grijalva Torrero.

Titular del Órgano Interno de Control



Lcda. Adriana Fabiola Rodríguez León.

Suplente del Director General de Recursos Materiales y
Servicios Generales, responsable del Área Coordinadora
de Archivos de la Dependencia.



Lcda. Gabriela Santillán García.

Secretaría Técnica del Comité de Transparencia
Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental
Elaboró



Lic. Miguel Ángel Cerón Cruz.

Director de Acceso a la Información
Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental
Vo. Bo.

RESOLUCIÓN

A. Solicitudes de Acceso a la Información en las que se analiza la inexistencia de la información solicitada:

A.8. Folio 1700300001818 – RRA 2248/18 – Centro Federal de Protección a Personas

Contenido de la Solicitud: *"Solicito todos y cada uno de los lineamientos, protocolos, acuerdos y demás instrumentos necesarios para el debido funcionamiento del Programa Federal de Protección a Personas y del Centro Federal de Protección a Personas."* (Sic)

Otros datos para facilitar su localización:

"Solicito todos y cada uno de los lineamientos, protocolos, acuerdos y demás instrumentos necesarios para el debido funcionamiento del Programa Federal de Protección a Personas y del Centro Federal de Protección a Personas." (Sic)

Antecedentes:

En respuesta inicial, se informó al particular que a la fecha del ingreso de la solicitud de mérito, el Centro Federal de Protección a Personas **se encontraba en proceso de estructuración**, de ahí que fuera posible advertir que no se desprendieran elementos suficientes que permitieran suponer que se cuente con la información de interés.

Por lo que, el pasado 10 de abril del 2018, el solicitante se inconformó con la respuesta otorgada por el Centro Federal de Protección a Personas (Órgano Desconcentrado de la Procuraduría General de la República), refiriendo que no se le proporcionó la información solicitada, por lo que interpuso recurso de revisión ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Por lo que, con la finalidad de sobreseer el recurso de revisión citado y dar certeza al particular de la búsqueda de la información solicitada y de la veracidad de la respuesta que le fue otorgada inicialmente, se expone lo siguiente:

Resulta necesario precisar que por medidas de protección debe entenderse como aquellas acciones tendientes a eliminar y reducir los riesgos que pueda sufrir una persona derivado de la acción de represalia eventual con motivo de su colaboración, o participación en un procedimiento penal, así como de personas o familiares cercanas a éste, mismas que son administradas y ejecutadas bajo el "Programa Federal de Protección a Personas" de manera independiente al desarrollo del procedimiento penal que en su caso se encuentre instaurado ante la Subprocuraduría y/o Fiscalía respectiva.

Lo anterior, considerando que para otorgar dichas medidas de protección es necesario que éstas pasen por el procedimiento contemplado en la **Ley Federal para la Protección a Personas**

que Intervienen en el Procedimiento Penal, mismo que en su parte conducente, se encuentra contemplado a través de los siguientes artículos:

CAPÍTULO VII

DE LA INCORPORACIÓN AL PROGRAMA

ARTÍCULO 20. La solicitud de incorporación al Programa, la deberá realizar el Titular de la Subprocuraduría o unidad administrativa equivalente a la que pertenezca el Ministerio Público o el juez a que se refiere este artículo que conozca del Procedimiento Penal en los que intervenga la persona a proteger, las cuales serán resueltas por el Director del Centro.

ARTÍCULO 22. La petición de otorgar Medidas de Protección deberá contener como elementos mínimos que permitan realizar el Estudio Técnico, los siguientes:

- a) Nombre completo del candidato a protección, su dirección o Jugar de ubicación.
- b) Datos acerca de la investigación o proceso penal en la que interviene.
- c) Papel que detenta en el procedimiento y la importancia que reviste su participación.
- d) Datos que hagan presumir que se encuentra en una situación de riesgo su integridad física o la de personas cercanas a él.
- e) No obstante que la solicitud no contenga toda la información requerida no impide iniciar el Estudio Técnico, pudiéndose recabar los datos necesarios para su elaboración en breve término.
- f) Cualquier otra que el Ministerio Público estime necesaria para justificar la necesidad de su protección.

ARTÍCULO 23. El Director deberá contar con el Estudio Técnico que le permita decidir sobre la procedencia de incorporación o no de una persona al Programa.

ARTÍCULO 24.- Recibida la solicitud de incorporación al Programa, el Director en un tiempo razonable, a fin de determinar su procedencia, tomará en consideración el resultado del Estudio Técnico, el cual deberá de contener por lo menos los siguientes aspectos:

- I. Que exista un nexo entre la intervención de la persona a proteger en el Procedimiento Penal y los factores de riesgo en que se encuentre la persona susceptible de recibir protección. En los casos en que se haya concluido la participación de la Persona Protegida en el procedimiento penal, se realizará un estudio a fin de determinar si subsisten las condiciones de riesgo para determinar su continuidad o su terminación de las medidas de protección.
- II. Que la persona otorgue su consentimiento y proporcione información fidedigna y confiable para la realización el Estudio Técnico, apercibido que la falsedad en su dicho pudiere tener como consecuencia la no incorporación al Programa.
- III. Que la persona a proteger no esté motivado por interés distinto que el de colaborar con la procuración y administración de justicia.
- IV. Que las Medidas de Protección sean las idóneas para garantizar la seguridad de la persona.
- V. Las obligaciones legales que tenga la persona con terceros.
- VI. Los antecedentes penales que tuviere.
- VII. Que la admisión de la persona, no sea un factor que afecte la seguridad del Programa, del Centro o de la Procuraduría.

ARTÍCULO 26. Una vez concluido el Estudio Técnico, el Director adoptará la decisión que corresponda, la cual podría ser reconsiderada a solicitud del Procurador, con independencia de lo previsto en el artículo 20, párrafo segundo de la presente Ley, la que será en el siguiente sentido:

- a) Incorporar a la persona al Programa y establecer las Medidas de Protección que se le aplicarán.
- b) No incorporar al Programa.

Así, se desprende que el Director del Centro Federal de Protección a Personas resolverá aquellas solicitudes de incorporación al "Programa Federal de Protección a Personas", misma que en todo momento deberá realizar el Titular de la Subprocuraduría y/o Fiscalía a la cual se encuentra adscrito el Ministerio Público de la Federación encargado de la investigación correspondiente, cuya petición deberá contener, entre otros, los siguientes requisitos mínimos:

- Nombre completo del candidato a protección, su dirección o lugar de ubicación.
- Datos acerca de la investigación o proceso penal en la que interviene.
- Datos que hagan presumir que se encuentra en una situación de riesgo su integridad física o la de personas cercanas a él.
- Cualquier otra que el Ministerio Público estime necesaria para justificar la necesidad de su protección.

Ello, a efecto de poder emitir el "Estudio Técnico" respectivo, **del cual el Director del Órgano Desconcentrado en comento, en un tiempo razonable, determinará su procedencia al multicitado "Programa Federal de Protección a Personas"**, así como establecer las medidas de protección que se aplicarán.

Así, se desprende que **el Director de este Centro Federal de Protección a Personas resolverá aquellas solicitudes de incorporación al "Programa Federal de Protección a Personas"**, misma que en todo momento deberá realizar el Titular de la Subprocuraduría y/o Fiscalía a la cual se encuentra adscrito el Ministerio Público de la Federación encargado de la investigación correspondiente.

No obstante y expuesto lo anterior, es menester señalar que normativamente sí existe el Centro Federal de Protección a Personas; sin embargo, éste **se encuentra en proceso de estructuración**, toda vez que de la normativa antes descrita, es posible concluir que el Titular de dicho Centro, para el desahogo de sus funciones, necesita de un grupo de servidores públicos a los cuales les designará facultades a efecto de atender el objetivo de la **Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal**, circunstancia que a la fecha de presentación de la solicitud no acontece, toda vez que las designaciones recaen bajo un procedimiento de selección que garantice la idoneidad del personal, así como su capacitación para el ejercicio del cargo que se le designe, tal y como se desprende de los siguientes preceptos legales:

ARTÍCULO 8. Para el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley, se dotará a todo el personal responsable de la operación del Programa de las herramientas y el equipo necesario para un desempeño eficaz.

Además, se implementarán procedimientos de selección que garanticen la idoneidad del personal, así como su capacitación para el ejercicio del cargo.

ARTÍCULO 9. El Centro deberá contar con un grupo multidisciplinario de servidores públicos, integrado por abogados, médicos, psicólogos, trabajadores sociales y demás profesionistas que sean necesarios, así como con elementos de la Policía Federal Ministerial adscritos a la Unidad.

ARTÍCULO 10. La ejecución de las Medidas de Protección estará a cargo de la Unidad misma que dependerá del Director y se integrará con agentes de la Policía Federal Ministerial, entrenados y capacitados para tal fin.

Una vez expuesto lo anterior, es importante recordar que el particular requiere los lineamientos, protocolos, acuerdos y demás instrumentos necesarios para el debido funcionamiento del Programa Federal de Protección a Personas y del Centro Federal de Protección a Personas.

Por lo que, como se le informó al particular en respuesta inicial, **el Centro Federal de Protección a Personas aún se encuentra en proceso de estructuración**, circunstancia que implica señalar que de manera interna se están llevando a cabo diversas actividades entre las que destacan los procedimientos de selección de personal que garantizaran la idoneidad y capacitación para el ejercicio del cargo y, en su caso, analicen las solicitudes de incorporación al "Programa Federal de Protección a Personas" que, en su momento, los Titulares de las Subprocuradurías y/o Fiscalías de la Procuraduría General de la República presenten y, que de acuerdo a su formalidad, éstas puedan ser determinadas como positivas o negativas.

Así las cosas, se insiste que a la fecha de presentación de la solicitud, normativamente se ha regulado las facultades generales de este Centro Federal de Protección a Personas, y no así se ha emitido aquella normativa, tales como lineamientos, protocolos, acuerdos y demás instrumentos necesarios para el debido funcionamiento del "Programa Federal de Protección a Personas", máxime que de acuerdo a las facultades del Titular de dicho Órgano Desconcentrado, es el servidor público que se encuentra realizando las gestiones necesarias para emitir los citados ordenamientos legales a efecto de poner en marcha al "Programa Federal de Protección a Personas" y, por ende, por conducto de los servidores públicos, los cuales se encuentran en proceso de designación, incorporen las solicitudes.

Robustece lo anterior, toda vez que este Centro Federal de Protección a Personas no es la autoridad para elaborar y determinar por propia cuenta la procedencia de una solicitud de incorporación al denominado Programa, siendo que éstas son solicitadas por los Titulares de las Subprocuradurías y/o Fiscalías en donde se encuentre adscrito el Agente del Ministerio Público de la Federación responsable del procedimiento penal, y las cuales, de conformidad con el artículo 3 de la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal, son independientes; tal y como se desprende a continuación:

ARTÍCULO 3. Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, en el ámbito de su competencia, están obligadas a prestar la colaboración que les requiera la Procuraduría General de la República, por conducto del Centro para la aplicación de las Medidas de Protección previstas en esta Ley.

La administración y ejecución de las medidas de protección contempladas en el Programa, son independientes del desarrollo del Procedimiento Penal, el cual sólo servirá para determinar y eliminar los factores de riesgo de la persona sujeta a protección.

En consecuencia, se desprende una imposibilidad material para que el Centro Federal de Protección a Personas se pronuncie respecto de la información solicitada por la particular, toda vez que, no se advierte que el "Programa Federal de Protección a Personas" se encuentre en funcionamiento, siendo que no aún no se han emitido los lineamientos, protocolos, acuerdos y demás instrumentos para su funcionamiento, ni se ha designado a los servidores públicos que se encargarán de su administración, ni tampoco se dependen elementos suficientes para afirmar o negar que se han recibido solicitudes de incorporación al programa por parte de las áreas sustantivas de la Procuraduría General de la República.

Lo anterior, toda vez que atendiendo la importancia de la materia por la cual fue creado este Centro, es necesario que su propio Titular, de acuerdo a su capacitación y conocimiento de los temas específicos, sea el único servidor público encargado de la elaboración de los lineamientos, protocolos, acuerdos y demás instrumentos para su funcionamiento, máxime que de conformidad con los siguientes preceptos legales cuenta con autonomía, principalmente técnica, operativa y presupuestal; como se desprende a continuación:

*ARTÍCULO 5. La protección de personas se regirá por los siguientes principios:
[...]*

V. Autonomía: El Director gozará de las más amplias facultades para dictar las medidas oportunas que sujeten y garanticen la exacta aplicación de la presente Ley.

*...
ARTÍCULO 6. El Centro es un Órgano Desconcentrado y Especializado de la Procuraduría General de la República; con autonomía técnica y operativa en la aplicación de las Medidas de Protección, el cual estará a cargo de un Director, nombrado y removido libremente por el Presidente de la República, a propuesta del Procurador.*

ARTÍCULO 7. El Director, para el cumplimiento de la presente Ley contará con las siguientes facultades:

I. Suscribir y emitir los instrumentos jurídicos que faciliten el funcionamiento y operación del Programa, previa consideración del Procurador.

II. Recibir y analizar las solicitudes de incorporación de una persona al Programa, en virtud de encontrarse en situación de riesgo o peligro por su intervención en un Procedimiento Penal. Estas solicitudes deberán ser presentadas por el Titular de la Subprocuraduría o de la unidad administrativa equivalente a las que se encuentre asignado el Ministerio Público responsable del Procedimiento Penal, en donde interviene o ha intervenido la persona a proteger.

*...
X. Gestionar ante la Oficialía Mayor de la Procuraduría lo relativo a la obtención de los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros para la correcta aplicación de sus obligaciones, una vez que se haya autorizado el presupuesto para tal efecto.*

RESOLUCIÓN PGR/CT/0031/2018: En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, el Comité de Transparencia **confirma** declarar la inexistencia de los lineamientos, protocolos, acuerdos y demás instrumentos necesarios para el debido funcionamiento del Programa Federal de Protección a Personas y del Centro Federal de Protección a Personas, vez que tal y como ha quedado evidenciado con anterioridad, existe una imposibilidad material siendo que aún se están realizando las gestiones necesarias para la emisión de los

La presente resolución forma parte del Acta de la Décima Octava Sesión Ordinaria celebrada el 15 de mayo del 2018 del Comité de Transparencia de la Procuraduría General de la República. Al efecto, se elabora por triplicado, firmando al calce los integrantes del Comité de Transparencia para constancia:

INTEGRANTES



Lcda. Adi Loza Barrera.

Titular de la Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental y
Presidenta del Comité de Transparencia.



Lic. Luis Grijalva Torrero.

Titular del Órgano Interno de Control



Lcda. Adriana Fabiola Rodríguez León.

Suplente del Director General de Recursos Materiales y
Servicios Generales, responsable del Área Coordinadora
de Archivos de la Dependencia.



Lcda. Gabriela Santillán García.

Secretaría Técnica del Comité de Transparencia
Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental
Elaboró



Lic. Miguel Ángel Cerón Cruz.

Director de Acceso a la Información
Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental
Vo. Bo.

RESOLUCIÓN

A. Solicitudes de Acceso a la Información en las que se analiza la inexistencia de la información solicitada:

A.9. Folio 1700300001918 – RRA 2249/18 – Centro Federal de Protección a Personas

Contenido de la Solicitud: *"Solicito saber cuántos y cuáles son los Convenios de Entendimiento suscritos por las personas protegidas y el director del Centro Federal de Protección a Personas, desde la fecha de creación de ese Centro a la fecha."* (Sic)

Otros datos para facilitar su localización:

"Solicito saber cuántos y cuáles son los Convenios de Entendimiento suscritos por las personas protegidas y el director del Centro Federal de Protección a Personas, desde la fecha de creación de ese Centro a la fecha." (Sic)

Antecedentes:

En respuesta inicial, se informó al particular que a la fecha del ingreso de la solicitud de mérito, el Centro Federal de Protección a Personas **se encontraba en proceso de estructuración**, de ahí que fuera posible advertir que no se desprenderían elementos suficientes que permitieran suponer que se cuente con la información de interés del peticionario.

Por lo que, el pasado 10 de abril del 2018, el solicitante se inconformó con la respuesta otorgada por el Centro Federal de Protección a Personas (Órgano Desconcentrado de la Procuraduría General de la República), refiriendo que no se le proporcionó la información solicitada, por lo que interpuso recurso de revisión ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Por lo que, con la finalidad de sobreseer el recurso de revisión citado y dar certeza al particular de la búsqueda de la información solicitada y de la veracidad de la respuesta que le fue otorgada inicialmente, se expone lo siguiente:

Resulta necesario precisar que por medidas de protección debe entenderse como aquellas acciones tendientes a eliminar y reducir los riesgos que pueda sufrir una persona derivado de la acción de represalia eventual con motivo de su colaboración, o participación en un procedimiento penal, así como de personas o familiares cercanas a éste, mismas que son administradas y ejecutadas bajo el "Programa Federal de Protección a Personas" de manera independiente al desarrollo del procedimiento penal que en su caso se encuentre instaurado ante la Subprocuraduría y/o Fiscalía respectiva.

Lo anterior, considerando que para otorgar dichas medidas de protección es necesario que éstas pasen por el procedimiento contemplado en la **Ley Federal para la Protección a Personas**

que Intervienen en el Procedimiento Penal, mismo que en su parte conducente, se encuentra contemplado a través de los siguientes artículos:

CAPÍTULO VII

DE LA INCORPORACIÓN AL PROGRAMA

ARTÍCULO 20. La solicitud de incorporación al Programa, la deberá realizar el Titular de la Subprocuraduría o unidad administrativa equivalente a la que pertenezca el Ministerio Público o el juez a que se refiere este artículo que conozca del Procedimiento Penal en los que intervenga la persona a proteger, las cuales serán resueltas por el Director del Centro.

ARTÍCULO 22. La petición de otorgar Medidas de Protección deberá contener como elementos mínimos que permitan realizar el Estudio Técnico, los siguientes:

- a) Nombre completo del candidato a protección, su dirección o Jugar de ubicación.
- b) Datos acerca de la investigación o proceso penal en la que interviene.
- c) Papel que detenta en el procedimiento y la importancia que reviste su participación.
- d) Datos que hagan presumir que se encuentra en una situación de riesgo su integridad física o la de personas cercanas a él.
- e) No obstante que la solicitud no contenga toda la información requerida no impide iniciar el Estudio Técnico, pudiéndose recabar los datos necesarios para su elaboración en breve término.
- f) Cualquier otra que el Ministerio Público estime necesaria para justificar la necesidad de su protección.

ARTÍCULO 23. El Director deberá contar con el Estudio Técnico que le permita decidir sobre la procedencia de incorporación o no de una persona al Programa.

ARTÍCULO 24.- Recibida la solicitud de incorporación al Programa, el Director en un tiempo razonable, a fin de determinar su procedencia, tomará en consideración el resultado del Estudio Técnico, el cual deberá de contener por lo menos los siguientes aspectos:

- I. Que exista un nexo entre la intervención de la persona a proteger en el Procedimiento Penal y los factores de riesgo en que se encuentre la persona susceptible de recibir protección. En los casos en que se haya concluido la participación de la Persona Protegida en el procedimiento penal, se realizará un estudio a fin de determinar si subsisten las condiciones de riesgo para determinar su continuidad o su terminación de las medidas de protección.
- II. Que la persona otorgue su consentimiento y proporcione información fidedigna y confiable para la realización el Estudio Técnico, apercibido que la falsedad en su dicho pudiere tener como consecuencia la no incorporación al Programa.
- III. Que la persona a proteger no esté motivado por interés distinto que el de colaborar con la procuración y administración de justicia.
- IV. Que las Medidas de Protección sean las idóneas para garantizar la seguridad de la persona.
- V. Las obligaciones legales que tenga la persona con terceros.
- VI. Los antecedentes penales que tuviere.
- VII. Que la admisión de la persona, no sea un factor que afecte la seguridad del Programa, del Centro o de la Procuraduría.

ARTÍCULO 26. Una vez concluido el Estudio Técnico, el Director adoptará la decisión que corresponda, la cual podría ser reconsiderada a solicitud del Procurador, con independencia de lo previsto en el artículo 20, párrafo segundo de la presente Ley, la que será en el siguiente sentido:

- a) Incorporar a la persona al Programa y establecer las Medidas de Protección que se le aplicarán.
- b) No incorporar al Programa.

Así, se desprende que el Director del Centro Federal de Protección a Personas resolverá aquellas solicitudes de incorporación al "Programa Federal de Protección a Personas", misma que en todo momento deberá realizar el Titular de la Subprocuraduría y/o Fiscalía a la cual se encuentra adscrito el Ministerio Público de la Federación encargado de la investigación correspondiente, cuya petición deberá contener, entre otros, los siguientes requisitos mínimos:

- Nombre completo del candidato a protección, su dirección o lugar de ubicación.
- Datos acerca de la investigación o proceso penal en la que interviene.
- Datos que hagan presumir que se encuentra en una situación de riesgo su integridad física o la de personas cercanas a él.
- Cualquier otra que el Ministerio Público estime necesaria para justificar la necesidad de su protección.

Ello, a efecto de poder emitir el "Estudio Técnico" respectivo, **del cual el Director del Órgano Desconcentrado en comento, en un tiempo razonable, determinará su procedencia al multicitado "Programa Federal de Protección a Personas"**, así como establecer las medidas de protección que se aplicarán.

Así, se desprende que **el Director de este Centro Federal de Protección a Personas resolverá aquellas solicitudes de incorporación al "Programa Federal de Protección a Personas"**, misma que en todo momento deberá realizar el Titular de la Subprocuraduría y/o Fiscalía a la cual se encuentra adscrito el Ministerio Público de la Federación encargado de la investigación correspondiente.

No obstante y expuesto lo anterior, es menester señalar que normativamente sí existe el Centro Federal de Protección a Personas; sin embargo, éste **se encuentra en proceso de estructuración**, toda vez que de la normativa antes descrita, es posible concluir que el Titular de dicho Centro, para el desahogo de sus funciones, necesita de un grupo de servidores públicos a los cuales les designará facultades a efecto de atender el objetivo de la **Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal**, circunstancia que a la fecha de presentación de la solicitud no acontece, toda vez que las designaciones recaen bajo un procedimiento de selección que garantice la idoneidad del personal, así como su capacitación para el ejercicio del cargo que se le designe, tal y como se desprende de los siguientes preceptos legales:

ARTÍCULO 8. Para el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley, se dotará a todo el personal responsable de la operación del Programa de las herramientas y el equipo necesario para un desempeño eficaz.

Además, se implementarán procedimientos de selección que garanticen la idoneidad del personal, así como su capacitación para el ejercicio del cargo.

ARTÍCULO 9. El Centro deberá contar con un grupo multidisciplinario de servidores públicos, integrado por abogados, médicos, psicólogos, trabajadores sociales y demás profesionistas que sean necesarios, así como con elementos de la Policía Federal Ministerial adscritos a la Unidad.

ARTÍCULO 10. La ejecución de las Medidas de Protección estará a cargo de la Unidad misma que dependerá del Director y se integrará con agentes de la Policía Federal Ministerial, entrenados y capacitados para tal fin.

Una vez expuesto lo anterior, es importante recordar que el particular requiere cuántos y cuáles son los Convenios de Entendimiento suscritos por las personas protegidas y el director del Centro Federal de Protección a Personas, desde la fecha de creación de ese Centro a la fecha.

Por lo que, como se le informó al particular en respuesta inicial, **el Centro Federal de Protección a Personas aún se encuentra en proceso de estructuración**, circunstancia que implica señalar que de manera interna se están llevando a cabo diversas actividades entre las que destacan los procedimientos de selección de personal que garantizaran la idoneidad y capacitación para el ejercicio del cargo y, en su caso, analicen las solicitudes de incorporación al "Programa Federal de Protección a Personas" que, en su momento, los Titulares de las Subprocuradurías y/o Fiscalías de la Procuraduría General de la República presenten y, que de acuerdo a su formalidad, éstas puedan ser determinadas como positivas o negativas.

Así las cosas, se insiste que a la fecha de presentación de la solicitud, **normativamente se ha regulado las facultades** generales de este Centro Federal de Protección a Personas, **y no así se ha emitido aquella normativa**, tales como lineamientos, protocolos, acuerdos y demás instrumentos necesarios para el debido funcionamiento del "Programa Federal de Protección a Personas", máxime que de acuerdo a las facultades del Titular de dicho Órgano Desconcentrado, es el servidor público que se encuentra realizando las gestiones necesarias para emitir los citados ordenamientos legales a efecto de poner en marcha al "Programa Federal de Protección a Personas" y, por ende, por conducto de los servidores públicos, los cuales se encuentran en proceso de designación, incorporen las solicitudes.

Robustece lo anterior, toda vez que este Centro Federal de Protección a Personas no es la autoridad para elaborar y determinar por propia cuenta la procedencia de una solicitud de incorporación al denominado Programa, siendo que éstas son solicitadas por los Titulares de las Subprocuradurías y/o Fiscalías en donde se encuentre adscrito el Agente del Ministerio Público de la Federación responsable del procedimiento penal, y las cuales, de conformidad con el artículo 3 de la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal, son independientes; tal y como se desprende a continuación:

ARTÍCULO 3. Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, en el ámbito de su competencia, están obligadas a prestar la colaboración que les requiera la Procuraduría General de la República, por conducto del Centro para la aplicación de las Medidas de Protección previstas en esta Ley.

La administración y ejecución de las medidas de protección contempladas en el Programa, son independientes del desarrollo del Procedimiento Penal, el cual sólo servirá para determinar y eliminar los factores de riesgo de la persona sujeta a protección.

En consecuencia, se desprende una imposibilidad material para que el Centro Federal de Protección a Personas se pronuncie respecto de la información solicitada por la particular, toda vez que, no se advierte que el "Programa Federal de Protección a Personas" se encuentre en funcionamiento, **siendo que no aún no se han emitido los lineamientos, protocolos, acuerdos y demás instrumentos para su funcionamiento, ni se ha designado a los servidores públicos que se encargarán de su administración, ni tampoco se dependen elementos suficientes para afirmar o negar que se han recibido solicitudes de incorporación al programa por parte de las áreas sustantivas de la Procuraduría General de la República.**

Lo anterior, toda vez que atendiendo la importancia de la materia por la cual fue creado este Centro, es necesario que su propio Titular, de acuerdo a su capacitación y conocimiento de los temas específicos, sea el único servidor público encargado de la elaboración de los lineamientos, protocolos, acuerdos y demás instrumentos para su funcionamiento, máxime que de conformidad con los siguientes preceptos legales cuenta con autonomía, principalmente técnica, operativa y presupuestal; como se desprende a continuación:

*ARTÍCULO 5. La protección de personas se regirá por los siguientes principios:
[...]*

V. Autonomía: El Director gozará de las más amplias facultades para dictar las medidas oportunas que sujeten y garanticen la exacta aplicación de la presente Ley.

...
ARTÍCULO 6. El Centro es un Órgano Desconcentrado y Especializado de la Procuraduría General de la República; con autonomía técnica y operativa en la aplicación de las Medidas de Protección, el cual estará a cargo de un Director, nombrado y removido libremente por el Presidente de la República, a propuesta del Procurador.

ARTÍCULO 7. El Director, para el cumplimiento de la presente Ley contará con las siguientes facultades:

I. Suscribir y emitir los instrumentos jurídicos que faciliten el funcionamiento y operación del Programa, previa consideración del Procurador.

II. Recibir y analizar las solicitudes de incorporación de una persona al Programa, en virtud de encontrarse en situación de riesgo o peligro por su intervención en un Procedimiento Penal. Estas solicitudes deberán ser presentadas por el Titular de la Subprocuraduría o de la unidad administrativa equivalente a las que se encuentre asignado el Ministerio Público responsable del Procedimiento Penal, en donde interviene o ha intervenido la persona a proteger.

...
X. Gestionar ante la Oficialía Mayor de la Procuraduría lo relativo a la obtención de los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros para la correcta aplicación de sus obligaciones, una vez que se haya autorizado el presupuesto para tal efecto.

RESOLUCIÓN PGR/CT/0032/2018: En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, el Comité de Transparencia **confirma** declarar la inexistencia de cuántos y cuáles son los Convenios de Entendimiento suscritos por las personas protegidas y el director del Centro Federal de Protección a Personas, desde la fecha de creación de ese Centro a la fecha, toda vez que tal y como ha quedado evidenciado con anterioridad, existe una imposibilidad material, siendo que aún se están realizando las gestiones necesarias para la emisión de los

La presente resolución forma parte del Acta de la Décima Octava Sesión Ordinaria celebrada el 15 de mayo del 2018 del Comité de Transparencia de la Procuraduría General de la República. Al efecto, se elabora por triplicado, firmando al calce los integrantes del Comité de Transparencia para constancia:

INTEGRANTES



Lcda. Adi Loza Barrera.

Titular de la Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental y
Presidenta del Comité de Transparencia.



Lic. Luis Grijalva Torrero.

Titular del Órgano Interno de Control



Lcda. Adriana Fabiola Rodríguez León.

Suplente del Director General de Recursos Materiales y
Servicios Generales, responsable del Área Coordinadora
de Archivos de la Dependencia.



Lcda. Gabriela Santillán García.

Secretaría Técnica del Comité de Transparencia
Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental
Elaboró



Lic. Miguel Ángel Cerón Cruz.

Director de Acceso a la Información
Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental
Vo. Bo.

RESOLUCIÓN

A. Solicitudes de Acceso a la Información en las que se analiza la inexistencia de la información solicitada:

A.10. Folio 1700300002318 – RRA 2286/18 – Centro Federal de Protección a Personas

Contenido de la Solicitud: "1. Instrumentos jurídicos suscritos y/o emitidos por el o los diferentes directores del Centro Federal de Protección a Personas, ello de conformidad con lo señalado en la Ley Federal para la protección a personas que intervienen en el procedimiento penal federal." (Sic)

Otros datos para facilitar su localización:

"Periodo de tiempo: 18 de junio de 2016 a 09 de marzo de 2018." (Sic)

Antecedentes:

En respuesta inicial, se informó al particular que a la fecha del ingreso de la solicitud de mérito, el Centro Federal de Protección a Personas **se encontraba en proceso de estructuración**, de ahí que fuera posible advertir que no se desprendieran elementos suficientes que permitieran suponer que se cuente con una expresión documental que reúna las características que requiere el particular.

Por lo que, el pasado 10 de abril del 2018, el solicitante se inconformó con la respuesta otorgada por el Centro Federal de Protección a Personas (Órgano Desconcentrado de la Procuraduría General de la República), refiriendo que no se le proporcionó la información solicitada, por lo que interpuso recurso de revisión ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Por lo que, con la finalidad de sobreseer el recurso de revisión citado y dar certeza al particular de la búsqueda de la información solicitada y de la veracidad de la respuesta que le fue otorgada inicialmente, se expone lo siguiente:

Resulta necesario precisar que por medidas de protección debe entenderse como aquellas acciones tendientes a eliminar y reducir los riesgos que pueda sufrir una persona derivado de la acción de represalia eventual con motivo de su colaboración, o participación en un procedimiento penal, así como de personas o familiares cercanas a éste, mismas que son administradas y ejecutadas bajo el "Programa Federal de Protección a Personas" de manera independiente al desarrollo del procedimiento penal que en su caso se encuentre instaurado ante la Subprocuraduría y/o Fiscalía respectiva.

Lo anterior, considerando que para otorgar dichas medidas de protección es necesario que éstas pasen por el procedimiento contemplado en la **Ley Federal para la Protección a Personas**

que Intervienen en el Procedimiento Penal, mismo que en su parte conducente, se encuentra contemplado a través de los siguientes artículos:

CAPÍTULO VII

DE LA INCORPORACIÓN AL PROGRAMA

ARTÍCULO 20. La solicitud de incorporación al Programa, la deberá realizar el Titular de la Subprocuraduría o unidad administrativa equivalente a la que pertenezca el Ministerio Público o el juez a que se refiere este artículo que conozca del Procedimiento Penal en los que intervenga la persona a proteger, las cuales serán resueltas por el Director del Centro.

ARTÍCULO 22. La petición de otorgar Medidas de Protección deberá contener como elementos mínimos que permitan realizar el Estudio Técnico, los siguientes:

- a) Nombre completo del candidato a protección, su dirección o Jugar de ubicación.
- b) Datos acerca de la investigación o proceso penal en la que interviene.
- c) Papel que detenta en el procedimiento y la importancia que reviste su participación.
- d) Datos que hagan presumir que se encuentra en una situación de riesgo su integridad física o la de personas cercanas a él.
- e) No obstante que la solicitud no contenga toda la información requerida no impide iniciar el Estudio Técnico, pudiéndose recabar los datos necesarios para su elaboración en breve término.
- f) Cualquier otra que el Ministerio Público estime necesaria para justificar la necesidad de su protección.

ARTÍCULO 23. El Director deberá contar con el Estudio Técnico que le permita decidir sobre la procedencia de incorporación o no de una persona al Programa.

ARTÍCULO 24.- Recibida la solicitud de incorporación al Programa, el Director en un tiempo razonable, a fin de determinar su procedencia, tomará en consideración el resultado del Estudio Técnico, el cual deberá de contener por lo menos los siguientes aspectos:

- I. Que exista un nexo entre la intervención de la persona a proteger en el Procedimiento Penal y los factores de riesgo en que se encuentre la persona susceptible de recibir protección. En los casos en que se haya concluido la participación de la Persona Protegida en el procedimiento penal, se realizará un estudio a fin de determinar si subsisten las condiciones de riesgo para determinar su continuidad o su terminación de las medidas de protección.
- II. Que la persona otorgue su consentimiento y proporcione información fidedigna y confiable para la realización el Estudio Técnico, apercibido que la falsedad en su dicho pudiere tener como consecuencia la no incorporación al Programa.
- III. Que la persona a proteger no esté motivado por interés distinto que el de colaborar con la procuración y administración de justicia.
- IV. Que las Medidas de Protección sean las idóneas para garantizar la seguridad de la persona.
- V. Las obligaciones legales que tenga la persona con terceros.
- VI. Los antecedentes penales que tuviere.
- VII. Que la admisión de la persona, no sea un factor que afecte la seguridad del Programa, del Centro o de la Procuraduría.

ARTÍCULO 26. Una vez concluido el Estudio Técnico, el Director adoptará la decisión que corresponda, la cual podría ser reconsiderada a solicitud del Procurador, con independencia de lo previsto en el artículo 20, párrafo segundo de la presente Ley, la que será en el siguiente sentido:

- a) Incorporar a la persona al Programa y establecer las Medidas de Protección que se le aplicarán.
- b) No incorporar al Programa.

Así, se desprende que el Director del Centro Federal de Protección a Personas resolverá aquellas solicitudes de incorporación al "Programa Federal de Protección a Personas", misma que en todo momento deberá realizar el Titular de la Subprocuraduría y/o Fiscalía a la cual se encuentra adscrito el Ministerio Público de la Federación encargado de la investigación correspondiente, cuya petición deberá contener, entre otros, los siguientes requisitos mínimos:

- Nombre completo del candidato a protección, su dirección o lugar de ubicación.
- Datos acerca de la investigación o proceso penal en la que interviene.
- Datos que hagan presumir que se encuentra en una situación de riesgo su integridad física o la de personas cercanas a él.
- Cualquier otra que el Ministerio Público estime necesaria para justificar la necesidad de su protección.

Ello, a efecto de poder emitir el "Estudio Técnico" respectivo, **del cual el Director del Órgano Desconcentrado en comento, en un tiempo razonable, determinará su procedencia al multicitado "Programa Federal de Protección a Personas"**, así como establecer las medidas de protección que se aplicarán.

Así, se desprende que **el Director de este Centro Federal de Protección a Personas resolverá aquellas solicitudes de incorporación al "Programa Federal de Protección a Personas"**, misma que en todo momento deberá realizar el Titular de la Subprocuraduría y/o Fiscalía a la cual se encuentra adscrito el Ministerio Público de la Federación encargado de la investigación correspondiente.

No obstante y expuesto lo anterior, es menester señalar que normativamente sí existe el Centro Federal de Protección a Personas; sin embargo, éste **se encuentra en proceso de estructuración**, toda vez que de la normativa antes descrita, es posible concluir que el Titular de dicho Centro, para el desahogo de sus funciones, necesita de un grupo de servidores públicos a los cuales les designará facultades a efecto de atender el objetivo de la **Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal**, circunstancia que a la fecha de presentación de la solicitud no acontece, toda vez que las designaciones recaen bajo un procedimiento de selección que garantice la idoneidad del personal, así como su capacitación para el ejercicio del cargo que se le designe, tal y como se desprende de los siguientes preceptos legales:

ARTÍCULO 8. Para el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley, se dotará a todo el personal responsable de la operación del Programa de las herramientas y el equipo necesario para un desempeño eficaz.

Además, se implementarán procedimientos de selección que garanticen la idoneidad del personal, así como su capacitación para el ejercicio del cargo.

ARTÍCULO 9. El Centro deberá contar con un grupo multidisciplinario de servidores públicos, integrado por abogados, médicos, psicólogos, trabajadores sociales y demás profesionistas que sean necesarios, así como con elementos de la Policía Federal Ministerial adscritos a la Unidad.

ARTÍCULO 10. La ejecución de las Medidas de Protección estará a cargo de la Unidad misma que dependerá del Director y se integrará con agentes de la Policía Federal Ministerial, entrenados y capacitados para tal fin.

Una vez expuesto lo anterior, es importante recordar que el particular requiere conocer sobre los instrumentos jurídicos suscritos y/o emitidos por el o los diferentes directores del Centro Federal de Protección a Personas, ello de conformidad con lo señalado en la Ley Federal para la protección a personas que intervienen en el procedimiento penal federal.

Por lo que, como se le informó al particular en respuesta inicial, **el Centro Federal de Protección a Personas aún se encuentra en proceso de estructuración**, circunstancia que implica señalar que de manera interna se están llevando a cabo diversas actividades entre las que destacan los procedimientos de selección de personal que garanticen la idoneidad y capacitación para el ejercicio del cargo y, en su caso, analicen las solicitudes de incorporación al "Programa Federal de Protección a Personas" que, en su momento, los Titulares de las Subprocuradurías y/o Fiscalías de la Procuraduría General de la República presenten y, que de acuerdo a su formalidad, éstas puedan ser determinadas como positivas o negativas.

Así las cosas, se insiste que a la fecha de presentación de la solicitud, normativamente se ha regulado las facultades generales de este Centro Federal de Protección a Personas, y no así se ha emitido aquella normativa, tales como lineamientos, protocolos, acuerdos y demás instrumentos necesarios para el debido funcionamiento del "Programa Federal de Protección a Personas", máxime que de acuerdo a las facultades del Titular de dicho Órgano Desconcentrado, es el servidor público que se encuentra realizando las gestiones necesarias para emitir los citados ordenamientos legales a efecto de poner en marcha al "Programa Federal de Protección a Personas" y, por ende, por conducto de los servidores públicos, los cuales se encuentran en proceso de designación, incorporen las solicitudes.

Robustece lo anterior, toda vez que este Centro Federal de Protección a Personas no es la autoridad para elaborar y determinar por propia cuenta la procedencia de una solicitud de incorporación al denominado Programa, siendo que éstas son solicitadas por los Titulares de las Subprocuradurías y/o Fiscalías en donde se encuentre adscrito el Agente del Ministerio Público de la Federación responsable del procedimiento penal, y las cuales, de conformidad con el artículo 3 de la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal, son independientes; tal y como se desprende a continuación:

ARTÍCULO 3. Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, en el ámbito de su competencia, están obligadas a prestar la colaboración que les requiera la Procuraduría General de la República, por conducto del Centro para la aplicación de las Medidas de Protección previstas en esta Ley.

La administración y ejecución de las medidas de protección contempladas en el Programa, son independientes del desarrollo del Procedimiento Penal, el cual sólo servirá para determinar y eliminar los factores de riesgo de la persona sujeta a protección.

En consecuencia, se desprende una imposibilidad material para que el Centro Federal de Protección a Personas se pronuncie respecto de la información solicitada por la particular, toda vez que, no se advierte que el "Programa Federal de Protección a Personas" se encuentre en funcionamiento, siendo que no aún no se han emitido los lineamientos, protocolos, acuerdos y demás instrumentos para su funcionamiento, ni se ha designado a los servidores públicos que se encargarán de su administración, ni tampoco se dependen elementos suficientes para afirmar o negar que se han recibido solicitudes de incorporación al programa por parte de las áreas sustantivas de la Procuraduría General de la República.

Lo anterior, toda vez que atendiendo la importancia de la materia por la cual fue creado este Centro, es necesario que su propio Titular, de acuerdo a su capacitación y conocimiento de los temas específicos, sea el único servidor público encargado de la elaboración de los lineamientos, protocolos, acuerdos y demás instrumentos para su funcionamiento, máxime que de conformidad con los siguientes preceptos legales cuenta con autonomía, principalmente técnica, operativa y presupuestal; como se desprende a continuación:

*ARTÍCULO 5. La protección de personas se regirá por los siguientes principios:
[...]*

V. Autonomía: El Director gozará de las más amplias facultades para dictar las medidas oportunas que sujeten y garanticen la exacta aplicación de la presente Ley.

*...
ARTÍCULO 6. El Centro es un Órgano Desconcentrado y Especializado de la Procuraduría General de la República; con autonomía técnica y operativa en la aplicación de las Medidas de Protección, el cual estará a cargo de un Director, nombrado y removido libremente por el Presidente de la República, a propuesta del Procurador.*

ARTÍCULO 7. El Director, para el cumplimiento de la presente Ley contará con las siguientes facultades:

I. Suscribir y emitir los instrumentos jurídicos que faciliten el funcionamiento y operación del Programa, previa consideración del Procurador.

II. Recibir y analizar las solicitudes de incorporación de una persona al Programa, en virtud de encontrarse en situación de riesgo o peligro por su intervención en un Procedimiento Penal. Estas solicitudes deberán ser presentadas por el Titular de la Subprocuraduría o de la unidad administrativa equivalente a las que se encuentre asignado el Ministerio Público responsable del Procedimiento Penal, en donde interviene o ha intervenido la persona a proteger.

*...
X. Gestionar ante la Oficialía Mayor de la Procuraduría lo relativo a la obtención de los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros para la correcta aplicación de sus obligaciones, una vez que se haya autorizado el presupuesto para tal efecto.*

RESOLUCIÓN PGR/CT/0033/2018: En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, el Comité de Transparencia **confirma** declarar la inexistencia de los instrumentos jurídicos suscritos y/o emitidos por el o los diferentes directores del Centro Federal de Protección a Personas, ello de conformidad con lo señalado en la Ley Federal para la protección a personas que intervienen en el procedimiento penal federal, toda vez que tal y como ha quedado evidenciado con anterioridad, existe una imposibilidad material, siendo que aún se

La presente resolución forma parte del Acta de la Décima Octava Sesión Ordinaria celebrada el 15 de mayo del 2018 del Comité de Transparencia de la Procuraduría General de la República. Al efecto, se elabora por triplicado, firmando al calce los integrantes del Comité de Transparencia para constancia:

INTEGRANTES




Lcda. Adi Loza Barrera.

Titular de la Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental y
Presidenta del Comité de Transparencia.




Lic. Luis Grijalva Torrero.
Titular del Órgano Interno de Control



Lcda. Adriana Fabiola Rodríguez León.
Suplente del Director General de Recursos Materiales y
Servicios Generales, responsable del Área Coordinadora
de Archivos de la Dependencia.



Lcda. Gabriela Santillán García.
Secretaría Técnica del Comité de Transparencia
Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental
Elaboró



Lic. Miguel Ángel Cerón Cruz.
Director de Acceso a la Información
Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental
Vo. Bo.

RESOLUCIÓN

A. Solicitudes de Acceso a la Información en las que se analiza la inexistencia de la información solicitada:

A.11. Folio 1700300002418 – RRA 2288/18 – Centro Federal de Protección a Personas

Contenido de la Solicitud: "2. Número de personal adscrito al Centro Federal de Protección a Personas." (Sic)

Antecedentes:

En respuesta inicial, se informó al particular que a la fecha del ingreso de la solicitud de mérito, el Centro Federal de Protección a Personas se encontraba en proceso de estructuración, de ahí que fuera posible advertir que no se desprendieran elementos suficientes que permitieran suponer que se cuente con una expresión documental que contemple la estructura orgánica y por ende, que sea posible obtener el número de servidores públicos que, en su caso, se encuentren adscritos a las diversas áreas del Centro Federal de Protección a Personas.

Por lo que, el pasado 11 de abril del 2018, el solicitante se inconformó con la respuesta otorgada por el Centro Federal de Protección a Personas (Órgano Desconcentrado de la Procuraduría General de la República), refiriendo que no se le proporcionó la información solicitada, por lo que interpuso recurso de revisión ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Por lo que, con la finalidad de sobreseer el recurso de revisión citado y dar certeza al particular de la búsqueda de la información solicitada y de la veracidad de la respuesta que le fue otorgada inicialmente, se expone lo siguiente:

Resulta necesario precisar que por medidas de protección debe entenderse como aquellas acciones tendientes a eliminar y reducir los riesgos que pueda sufrir una persona derivado de la acción de represalia eventual con motivo de su colaboración, o participación en un procedimiento penal, así como de personas o familiares cercanas a éste, mismas que son administradas y ejecutadas bajo el "Programa Federal de Protección a Personas" de manera independiente al desarrollo del procedimiento penal que en su caso se encuentre instaurado ante la Subprocuraduría y/o Fiscalía respectiva.

Lo anterior, considerando que para otorgar dichas medidas de protección es necesario que éstas pasen por el procedimiento contemplado en la Lev Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal, mismo que en su parte conducente, se encuentra contemplado a través de los siguientes artículos:

CAPÍTULO VII DE LA INCORPORACIÓN AL PROGRAMA

ARTÍCULO 20. La solicitud de incorporación al Programa, la deberá realizar el Titular de la Subprocuraduría o unidad administrativa equivalente a la que pertenezca el Ministerio Público o el juez a que se refiere este artículo que conozca del Procedimiento Penal en los que intervenga la persona a proteger, las cuales serán resueltas por el Director del Centro.

ARTÍCULO 22. La petición de otorgar Medidas de Protección deberá contener como elementos mínimos que permitan realizar el Estudio Técnico, los siguientes:

- a) Nombre completo del candidato a protección, su dirección o Lugar de ubicación.
- b) Datos acerca de la investigación o proceso penal en la que interviene.
- e) Papel que detenta en el procedimiento y la importancia que reviste su participación.
- d) Datos que hagan presumir que se encuentra en una situación de riesgo su integridad física o la de personas cercanas a él.
- e) No obstante que la solicitud no contenga toda la información requerida no impide iniciar el Estudio Técnico, pudiéndose recabar los datos necesarios para su elaboración en breve término.
- f) Cualquier otra que el Ministerio Público estime necesaria para justificar la necesidad de su protección.

ARTÍCULO 23. El Director deberá contar con el Estudio Técnico que le permita decidir sobre la procedencia de incorporación o no de una persona al Programa.

ARTÍCULO 24.- Recibida la solicitud de incorporación al Programa, el Director en un tiempo razonable, a fin de determinar su procedencia, tomará en consideración el resultado del Estudio Técnico, el cual deberá de contener por lo menos los siguientes aspectos:

- I. Que exista un nexo entre la intervención de la persona a proteger en el Procedimiento Penal y los factores de riesgo en que se encuentre la persona susceptible de recibir protección. En los casos en que se haya concluido la participación de la Persona Protegida en el procedimiento penal, se realizará un estudio a fin de determinar si subsisten las condiciones de riesgo para determinar su continuidad o su terminación de las medidas de protección.
- II. Que la persona otorgue su consentimiento y proporcione información fidedigna y confiable para la realización el Estudio Técnico, apercibido que la falsedad en su dicho pudiere tener como consecuencia la no incorporación al Programa.
- III. Que la persona a proteger no esté motivado por interés distinto que el de colaborar con la procuración y administración de justicia.
- IV. Que las Medidas de Protección sean las idóneas para garantizar la seguridad de la persona.
- V. Las obligaciones legales que tenga la persona con terceros.
- VI. Los antecedentes penales que tuviere.
- VII. Que la admisión de la persona, no sea un factor que afecte la seguridad del Programa, del Centro o de la Procuraduría.

ARTÍCULO 26. Una vez concluido el Estudio Técnico, el Director adoptará la decisión que corresponda, la cual podría ser reconsiderada a solicitud del Procurador, con independencia de lo previsto en el artículo 20, párrafo segundo de la presente Ley, la que será en el siguiente sentido:

- a) Incorporar a la persona al Programa y establecer las Medidas de Protección que se le aplicarán.
- b) No incorporar al Programa.

Así, se desprende que el Director del Centro Federal de Protección a Personas resolverá aquellas solicitudes de incorporación al "Programa Federal de Protección a Personas", misma que en todo momento deberá realizar el Titular de la Subprocuraduría y/o Fiscalía a la cual se encuentra adscrito el Ministerio Público de la Federación encargado de la investigación correspondiente, cuya petición deberá contener, entre otros, los siguientes requisitos mínimos:

- Nombre completo del candidato a protección, su dirección o lugar de ubicación.
- Datos acerca de la investigación o proceso penal en la que interviene.
- Datos que hagan presumir que se encuentra en una situación de riesgo su integridad física o la de personas cercanas a él.
- Cualquier otra que el Ministerio Público estime necesaria para justificar la necesidad de su protección.

Ello, a efecto de poder emitir el "Estudio Técnico" respectivo, **del cual el Director del Órgano Desconcentrado en comento, en un tiempo razonable, determinará su procedencia al multicitado "Programa Federal de Protección a Personas"**, así como establecer las medidas de protección que se aplicarán.

Así, se desprende que **el Director de este Centro Federal de Protección a Personas resolverá aquellas solicitudes de incorporación al "Programa Federal de Protección a Personas"**, misma que en todo momento deberá realizar el Titular de la Subprocuraduría y/o Fiscalía a la cual se encuentra adscrito el Ministerio Público de la Federación encargado de la investigación correspondiente.

No obstante y expuesto lo anterior, es menester señalar que normativamente sí existe el Centro Federal de Protección a Personas; sin embargo, éste **se encuentra en proceso de estructuración**, toda vez que de la normativa antes descrita, es posible concluir que el Titular de dicho Centro, para el desahogo de sus funciones, necesita de un grupo de servidores públicos a los cuales les designará facultades a efecto de atender el objetivo de la **Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal**, circunstancia que a la fecha de presentación de la solicitud no acontece, toda vez que las designaciones recaen bajo un procedimiento de selección que garantice la idoneidad del personal, así como su capacitación para el ejercicio del cargo que se le designe, tal y como se desprende de los siguientes preceptos legales:

*ARTÍCULO 8. Para el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley, **se dotará a todo el personal responsable de la operación del Programa de las herramientas y el equipo necesario para un desempeño eficaz.***

Además, se implementarán procedimientos de selección que garanticen la idoneidad del personal, así como su capacitación para el ejercicio del cargo.

*ARTÍCULO 9. El Centro deberá contar con un grupo multidisciplinario de servidores públicos, **integrado por abogados, médicos, psicólogos, trabajadores sociales y demás profesionistas que sean necesarios, así como con elementos de la Policía Federal Ministerial adscritos a la Unidad.***

*ARTÍCULO 10. La ejecución de las Medidas de Protección estará a cargo de la Unidad misma que **dependerá del Director** y se integrará con agentes de la Policía Federal Ministerial, **entrenados y capacitados para tal fin.***

Una vez expuesto lo anterior, es importante recordar que el particular requiere conocer el número de personal adscrito al Centro Federal de Protección a Personas.

Por lo que, como se le informó al particular en respuesta inicial, **el Centro Federal de Protección a Personas aún se encuentra en proceso de estructuración**, circunstancia que implica señalar que de manera interna se están llevando a cabo diversas actividades entre las que destacan los procedimientos de selección de personal que garantizaran la idoneidad y capacitación para el ejercicio del cargo y, en su caso, analicen las solicitudes de incorporación al "Programa Federal de Protección a Personas" que, en su momento, los Titulares de las Subprocuradurías y/o Fiscalías de la Procuraduría General de la República presenten y, que de acuerdo a su formalidad, éstas puedan ser determinadas como positivas o negativas.

Así las cosas, se insiste que a la fecha de presentación de la solicitud, **normativamente se ha regulado las facultades** generales de este Centro Federal de Protección a Personas, **y no así se ha emitido aquella normativa**, tales como lineamientos, protocolos, acuerdos y demás instrumentos necesarios para el debido funcionamiento del "Programa Federal de Protección a Personas", máxime que de acuerdo a las facultades del Titular de dicho Órgano Desconcentrado, es el servidor público que se encuentra realizando las gestiones necesarias para emitir los citados ordenamientos legales a efecto de poner en marcha al "Programa Federal de Protección a Personas" y, por ende, por conducto de los servidores públicos, los cuales se encuentran en proceso de designación, incorporen las solicitudes.

Robustece lo anterior, toda vez que este Centro Federal de Protección a Personas no es la autoridad para elaborar y determinar por propia cuenta la procedencia de una solicitud de incorporación al denominado Programa, siendo que éstas son solicitadas por los Titulares de las Subprocuradurías y/o Fiscalías en donde se encuentre adscrito el Agente del Ministerio Público de la Federación responsable del procedimiento penal, y las cuales, de conformidad con el artículo 3 de la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal, son independientes; tal y como se desprende a continuación:

ARTÍCULO 3. Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, en el ámbito de su competencia, están obligadas a prestar la colaboración que les requiera la Procuraduría General de la República, por conducto del Centro para la aplicación de las Medidas de Protección previstas en esta Ley.

La administración y ejecución de las medidas de protección contempladas en el Programa, son independientes del desarrollo del Procedimiento Penal, el cual sólo servirá para determinar y eliminar los factores de riesgo de la persona sujeta a protección.

En consecuencia, se desprende una imposibilidad material para que el Centro Federal de Protección a Personas se pronuncie respecto de la información solicitada por la particular, toda vez que, **no se advierte que el "Programa Federal de Protección a Personas" se encuentre en funcionamiento, siendo que no aún no se han emitido los lineamientos, protocolos, acuerdos y demás instrumentos para su funcionamiento, ni se ha designado a los servidores públicos que se encargarán de su administración, ni tampoco se**

dependen elementos suficientes para afirmar o negar que se han recibido solicitudes de incorporación al programa por parte de las áreas sustantivas de la Procuraduría General de la República.

Lo anterior, toda vez que atendiendo la importancia de la materia por la cual fue creado este Centro, es necesario que su propio Titular, de acuerdo a su capacitación y conocimiento de los temas específicos, sea el único servidor público encargado de la elaboración de los lineamientos, protocolos, acuerdos y demás instrumentos para su funcionamiento, máxime que de conformidad con los siguientes preceptos legales cuenta con autonomía, principalmente técnica, operativa y presupuestal; como se desprende a continuación:

*ARTÍCULO 5. La protección de personas se regirá por los siguientes principios:
[...]*

V. Autonomía: El Director gozará de las más amplias facultades para dictar las medidas oportunas que sujeten y garanticen la exacta aplicación de la presente Ley.

*...
ARTÍCULO 6. El Centro es un Órgano Desconcentrado y Especializado de la Procuraduría General de la República; con autonomía técnica y operativa en la aplicación de las Medidas de Protección, el cual estará a cargo de un Director, nombrado y removido libremente por el Presidente de la República, a propuesta del Procurador.*

ARTÍCULO 7. El Director, para el cumplimiento de la presente Ley contará con las siguientes facultades:

I. Suscribir y emitir los instrumentos jurídicos que faciliten el funcionamiento y operación del Programa, previa consideración del Procurador.

II. Recibir y analizar las solicitudes de incorporación de una persona al Programa, en virtud de encontrarse en situación de riesgo o peligro por su intervención en un Procedimiento Penal. Estas solicitudes deberán ser presentadas por el Titular de la Subprocuraduría o de la unidad administrativa equivalente a las que se encuentre asignado el Ministerio Público responsable del Procedimiento Penal, en donde interviene o ha intervenido la persona a proteger.

*...
X. Gestionar ante la Oficialía Mayor de la Procuraduría lo relativo a la obtención de los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros para la correcta aplicación de sus obligaciones, una vez que se haya autorizado el presupuesto para tal efecto.*

RESOLUCIÓN PGR/CT/0034/2018: En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, el Comité de Transparencia **confirma** declarar la inexistencia del Número de personal adscrito al Centro Federal de Protección a Personas, toda vez que tal y como ha quedado evidenciado con anterioridad, existe una imposibilidad material, siendo que aún se están realizando las gestiones necesarias para la emisión de los lineamientos, protocolos, acuerdos y demás instrumentos necesarios para el debido funcionamiento del "Programa Federal de Protección a Personas", así como la designación del personal que se encargara de la administración de dicho programa, máxime que de acuerdo a la autonomía presupuestaria, técnica y operativa recae en el propio Titular del Centro; de conformidad con el artículo 141 de la LFTAIP, en relación con el Criterio de Interpretación del Pleno del INAI 12/10, el cual señala que:

***"Propósito de la declaración formal de inexistencia.* Atendiendo a lo dispuesto por los artículos 43, 46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 70 de su Reglamento, en los que se prevé el procedimiento a seguir para declarar la inexistencia de la información, el propósito de que los Comités de Información de los sujetos obligados por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental emitan una declaración que confirme, en su caso, la inexistencia de la información solicitada, es **garantizar al solicitante que efectivamente se realizaron las gestiones necesarias para la ubicación de la información de su interés, y que éstas fueron las adecuadas para atender a la particularidad del caso concreto.** En ese sentido, las declaraciones de inexistencia de los Comités de Información deben contener los elementos suficientes para generar en los solicitantes la certeza del carácter exhaustivo de la búsqueda de la información solicitada y de que su solicitud fue atendida debidamente; es decir, deben motivar o precisar las razones por las que se buscó la información en determinada(s) unidad (es) administrativa(s), los criterios de búsqueda utilizados, y las demás circunstancias que fueron tomadas en cuenta."**

Por lo anterior, se solicita a la Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental (UTAG), hacer del conocimiento del particular, así como del Órgano Garante en materia de Transparencia la presente resolución para los efectos a los que hay lugar.

[illegible]

La presente resolución forma parte del Acta de la Décima Octava Sesión Ordinaria celebrada el 15 de mayo del 2018 del Comité de Transparencia de la Procuraduría General de la República. Al efecto, se elabora por triplicado, firmando al calce los integrantes del Comité de Transparencia para constancia:

INTEGRANTES

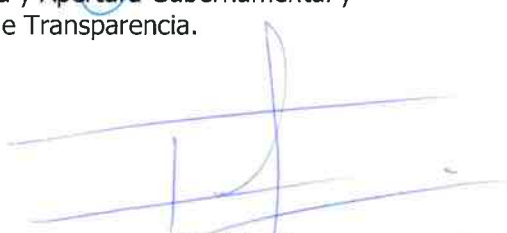


Lcda. Adi Loza Barrera.

Titular de la Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental y
Presidenta del Comité de Transparencia.




Lic. Luis Grijalva Torrero.
Titular del Órgano Interno de Control



Lcda. Adriana Fabiola Rodríguez León.
Suplente del Director General de Recursos Materiales y
Servicios Generales, responsable del Área Coordinadora
de Archivos de la Dependencia.



Lcda. Gabriela Santillán García.
Secretaría Técnica del Comité de Transparencia
Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental
Elaboró



Lic. Miguel Ángel Cerón Cruz.
Director de Acceso a la Información
Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental
Vo. Bo.

RESOLUCIÓN

A. Solicitudes de Acceso a la Información en las que se analiza la inexistencia de la información solicitada:

A.12. Folio 1700300002518 – RRA 2289/18 – Centro Federal de Protección a Personas

Contenido de la Solicitud: "3. Convenios de celebración celebrados entre la Procuraduría General de la República y el Centro Federal de Protección a Personas para establecer los mecanismos necesarios para incorporar al Programa a personas que deban ser sujetas de protección." (Sic)

Otros datos para facilitar su localización:

"Periodo de tiempo: 18 de junio de 2016 a 09 de marzo de 2018." (Sic)

Antecedentes:

En respuesta inicial, se informó al particular que a la fecha del ingreso de la solicitud de mérito, el Centro Federal de Protección a Personas **se encontraba en proceso de estructuración**, de ahí que no se desprendiera elemento alguno que permitiera suponer que se cuente materialmente con los documentos que el particular refirió.

Por lo que, el pasado 11 de abril del 2018, el solicitante se inconformó con la respuesta otorgada por el Centro Federal de Protección a Personas (Órgano Desconcentrado de la Procuraduría General de la República), refiriendo que no se le proporcionó la información solicitada, por lo que interpuso recurso de revisión ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Por lo que, con la finalidad de sobreseer el recurso de revisión citado y dar certeza al particular de la búsqueda de la información solicitada y de la veracidad de la respuesta que le fue otorgada inicialmente, se expone lo siguiente:

Resulta necesario precisar que por medidas de protección debe entenderse como aquellas acciones tendientes a eliminar y reducir los riesgos que pueda sufrir una persona derivado de la acción de represalia eventual con motivo de su colaboración, o participación en un procedimiento penal, así como de personas o familiares cercanas a éste, mismas que son administradas y ejecutadas bajo el "Programa Federal de Protección a Personas" de manera independiente al desarrollo del procedimiento penal que en su caso se encuentre instaurado ante la Subprocuraduría y/o Fiscalía respectiva.

Lo anterior, considerando que para otorgar dichas medidas de protección es necesario que éstas pasen por el procedimiento contemplado en la **Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal**, mismo que en su parte conducente, se encuentra contemplado a través de los siguientes artículos:

CAPÍTULO VII

DE LA INCORPORACIÓN AL PROGRAMA

ARTÍCULO 20. La solicitud de incorporación al Programa, la deberá realizar el Titular de la Subprocuraduría o unidad administrativa equivalente a la que pertenezca el Ministerio Público o el juez a que se refiere este artículo que conozca del Procedimiento Penal en los que intervenga la persona a proteger, las cuales serán resueltas por el Director del Centro.

ARTÍCULO 22. La petición de otorgar Medidas de Protección deberá contener como elementos mínimos que permitan realizar el Estudio Técnico, los siguientes:

- a) Nombre completo del candidato a protección, su dirección o Jugar de ubicación.
- b) Datos acerca de la investigación o proceso penal en la que interviene.
- c) Papel que detenta en el procedimiento y la importancia que reviste su participación.
- d) Datos que hagan presumir que se encuentra en una situación de riesgo su integridad física o la de personas cercanas a él.
- e) No obstante que la solicitud no contenga toda la información requerida no impide iniciar el Estudio Técnico, pudiéndose recabar los datos necesarios para su elaboración en breve término.
- f) Cualquier otra que el Ministerio Público estime necesaria para justificar la necesidad de su protección.

ARTÍCULO 23. El Director deberá contar con el Estudio Técnico que le permita decidir sobre la procedencia de incorporación o no de una persona al Programa.

ARTÍCULO 24.- Recibida la solicitud de incorporación al Programa, el Director en un tiempo razonable, a fin de determinar su procedencia, tomará en consideración el resultado del Estudio Técnico, el cual deberá de contener por lo menos los siguientes aspectos:

- I. Que exista un nexo entre la intervención de la persona a proteger en el Procedimiento Penal y los factores de riesgo en que se encuentre la persona susceptible de recibir protección. En los casos en que se haya concluido la participación de la Persona Protegida en el procedimiento penal, se realizará un estudio a fin de determinar si subsisten las condiciones de riesgo para determinar su continuidad o su terminación de las medidas de protección.
- II. Que la persona otorgue su consentimiento y proporcione información fidedigna y confiable para la realización del Estudio Técnico, apercibido que la falsedad en su dicho pudiere tener como consecuencia la no incorporación al Programa.
- III. Que la persona a proteger no esté motivado por interés distinto que el de colaborar con la procuración y administración de justicia.
- IV. Que las Medidas de Protección sean las idóneas para garantizar la seguridad de la persona.
- V. Las obligaciones legales que tenga la persona con terceros.
- VI. Los antecedentes penales que tuviere.
- VII. Que la admisión de la persona, no sea un factor que afecte la seguridad del Programa, del Centro o de la Procuraduría.

ARTÍCULO 26. Una vez concluido el Estudio Técnico, el Director adoptará la decisión que corresponda, la cual podría ser reconsiderada a solicitud del Procurador, con independencia de lo previsto en el artículo 20, párrafo segundo de la presente Ley, la que será en el siguiente sentido:

- a) Incorporar a la persona al Programa y establecer las Medidas de Protección que se le aplicarán.
- b) No incorporar al Programa.

Así, se desprende que el Director del Centro Federal de Protección a Personas resolverá aquellas solicitudes de incorporación al "Programa Federal de Protección a Personas", misma

que en todo momento deberá realizar el Titular de la Subprocuraduría y/o Fiscalía a la cual se encuentra adscrito el Ministerio Público de la Federación encargado de la investigación correspondiente, cuya petición deberá contener, entre otros, los siguientes requisitos mínimos:

- Nombre completo del candidato a protección, su dirección o lugar de ubicación.
- Datos acerca de la investigación o proceso penal en la que interviene.
- Datos que hagan presumir que se encuentra en una situación de riesgo su integridad física o la de personas cercanas a él.
- Cualquier otra que el Ministerio Público estime necesaria para justificar la necesidad de su protección.

Ello, a efecto de poder emitir el "Estudio Técnico" respectivo, **del cual el Director del Órgano Desconcentrado en comento, en un tiempo razonable, determinará su procedencia al multicitado "Programa Federal de Protección a Personas"**, así como establecer las medidas de protección que se aplicarán.

Así, se desprende que **el Director de este Centro Federal de Protección a Personas resolverá aquellas solicitudes de incorporación al "Programa Federal de Protección a Personas"**, misma que en todo momento deberá realizar el Titular de la Subprocuraduría y/o Fiscalía a la cual se encuentra adscrito el Ministerio Público de la Federación encargado de la investigación correspondiente.

No obstante y expuesto lo anterior, es menester señalar que normativamente sí existe el Centro Federal de Protección a Personas; sin embargo, éste **se encuentra en proceso de estructuración**, toda vez que de la normativa antes descrita, es posible concluir que el Titular de dicho Centro, para el desahogo de sus funciones, necesita de un grupo de servidores públicos a los cuales les designará facultades a efecto de atender el objetivo de la **Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal**, circunstancia que a la fecha de presentación de la solicitud no acontece, toda vez que las designaciones recaen bajo un procedimiento de selección que garantice la idoneidad del personal, así como su capacitación para el ejercicio del cargo que se le designe, tal y como se desprende de los siguientes preceptos legales:

ARTÍCULO 8. Para el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley, se dotará a todo el personal responsable de la operación del Programa de las herramientas y el equipo necesario para un desempeño eficaz.

Además, se implementarán procedimientos de selección que garanticen la idoneidad del personal, así como su capacitación para el ejercicio del cargo.

ARTÍCULO 9. El Centro deberá contar con un grupo multidisciplinario de servidores públicos, integrado por abogados, médicos, psicólogos, trabajadores sociales y demás profesionistas que sean necesarios, así como con elementos de la Policía Federal Ministerial adscritos a la Unidad.

ARTÍCULO 10. La ejecución de las Medidas de Protección estará a cargo de la Unidad misma que dependerá del Director y se integrará con agentes de la Policía Federal Ministerial, entrenados y capacitados para tal fin.

Una vez expuesto lo anterior, es importante recordar que el particular requiere conocer Convenios de celebración celebrados entre la Procuraduría General de la República y el Centro Federal de Protección a Personas para establecer los mecanismos necesarios para incorporar al Programa a personas que deban ser sujetas de protección.

Por lo que, como se le informó al particular en respuesta inicial, **el Centro Federal de Protección a Personas aún se encuentra en proceso de estructuración**, circunstancia que implica señalar que de manera interna se están llevando a cabo diversas actividades entre las que destacan los procedimientos de selección de personal que garantizaran la idoneidad y capacitación para el ejercicio del cargo y, en su caso, analicen las solicitudes de incorporación al "Programa Federal de Protección a Personas" que, en su momento, los Titulares de las Subprocuradurías y/o Fiscalías de la Procuraduría General de la República presenten y, que de acuerdo a su formalidad, éstas puedan ser determinadas como positivas o negativas.

Así las cosas, se insiste que a la fecha de presentación de la solicitud, **normativamente se ha regulado las facultades** generales de este Centro Federal de Protección a Personas, **y no así se ha emitido aquella normativa**, tales como lineamientos, protocolos, acuerdos y demás instrumentos necesarios para el debido funcionamiento del "Programa Federal de Protección a Personas", máxime que de acuerdo a las facultades del Titular de dicho Órgano Desconcentrado, es el servidor público que se encuentra realizando las gestiones necesarias para emitir los citados ordenamientos legales a efecto de poner en marcha al "Programa Federal de Protección a Personas" y, por ende, por conducto de los servidores públicos, los cuales se encuentran en proceso de designación, incorporen las solicitudes.

Robustece lo anterior, toda vez que este Centro Federal de Protección a Personas no es la autoridad para elaborar y determinar por propia cuenta la procedencia de una solicitud de incorporación al denominado Programa, siendo que éstas son solicitadas por los Titulares de las Subprocuradurías y/o Fiscalías en donde se encuentre adscrito el Agente del Ministerio Público de la Federación responsable del procedimiento penal, y las cuales, de conformidad con el artículo 3 de la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal, son independientes; tal y como se desprende a continuación:

ARTÍCULO 3. Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, en el ámbito de su competencia, están obligadas a prestar la colaboración que les requiera la Procuraduría General de la República, por conducto del Centro para la aplicación de las Medidas de Protección previstas en esta Ley.

La administración y ejecución de las medidas de protección contempladas en el Programa, son independientes del desarrollo del Procedimiento Penal, el cual sólo servirá para determinar y eliminar los factores de riesgo de la persona sujeta a protección.

En consecuencia, se desprende una imposibilidad material para que el Centro Federal de Protección a Personas se pronuncie respecto de la información solicitada por la particular, toda vez que, no se advierte que el "Programa Federal de Protección a Personas" se encuentre en funcionamiento, siendo que no aún no se han emitido los lineamientos, protocolos, acuerdos y demás instrumentos para su funcionamiento, ni se ha designado a los servidores públicos que se encargarán de su administración, ni tampoco se dependen elementos suficientes para afirmar o negar que se han recibido solicitudes de incorporación al programa por parte de las áreas sustantivas de la Procuraduría General de la República.

Lo anterior, toda vez que atendiendo la importancia de la materia por la cual fue creado este Centro, es necesario que su propio Titular, de acuerdo a su capacitación y conocimiento de los temas específicos, sea el único servidor público encargado de la elaboración de los lineamientos, protocolos, acuerdos y demás instrumentos para su funcionamiento, máxime que de conformidad con los siguientes preceptos legales cuenta con autonomía, principalmente técnica, operativa y presupuestal; como se desprende a continuación:

ARTÍCULO 5. La protección de personas se regirá por los siguientes principios:

[...]

V. Autonomía: El Director gozará de las más amplias facultades para dictar las medidas oportunas que sujeten y garanticen la exacta aplicación de la presente Ley.

...

ARTÍCULO 6. El Centro es un Órgano Desconcentrado y Especializado de la Procuraduría General de la República; con autonomía técnica y operativa en la aplicación de las Medidas de Protección, el cual estará a cargo de un Director, nombrado y removido libremente por el Presidente de la República, a propuesta del Procurador.

ARTÍCULO 7. El Director, para el cumplimiento de la presente Ley contará con las siguientes facultades:

I. Suscribir y emitir los instrumentos jurídicos que faciliten el funcionamiento y operación del Programa, previa consideración del Procurador.

II. Recibir y analizar las solicitudes de incorporación de una persona al Programa, en virtud de encontrarse en situación de riesgo o peligro por su intervención en un Procedimiento Penal. Estas solicitudes deberán ser presentadas por el Titular de la Subprocuraduría o de la unidad administrativa equivalente a las que se encuentre asignado el Ministerio Público responsable del Procedimiento Penal, en donde interviene o ha intervenido la persona a proteger.

...

X. Gestionar ante la Oficialía Mayor de la Procuraduría lo relativo a la obtención de los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros para la correcta aplicación de sus obligaciones, una vez que se haya autorizado el presupuesto para tal efecto.

RESOLUCIÓN PGR/CT/0035/2018: En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, el Comité de Transparencia **confirma** declarar la inexistencia de convenios celebrados entre la Procuraduría General de la República y el Centro Federal de Protección a Personas para establecer los mecanismos necesarios para incorporar al Programa a personas que deban ser sujetas de protección, toda vez que tal y como ha quedado evidenciado con anterioridad, existe una imposibilidad material, siendo que aún se están realizando las

La presente resolución forma parte del Acta de la Décima Octava Sesión Ordinaria celebrada el 15 de mayo del 2018 del Comité de Transparencia de la Procuraduría General de la República. Al efecto, se elabora por triplicado, firmando al calce los integrantes del Comité de Transparencia para constancia:

INTEGRANTES



Lcda. Adi Loza Barrera.
Titular de la Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental y
Presidenta del Comité de Transparencia.



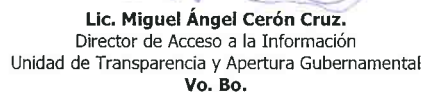
Lic. Luis Grijalva Torrero.
Titular del Órgano Interno de Control



Lcda. Adriana Fabiola Rodríguez León.
Suplente del Director General de Recursos Materiales y
Servicios Generales, responsable del Área Coordinadora
de Archivos de la Dependencia.



Lcda. Gabriela Santillán García.
Secretaría Técnica del Comité de Transparencia
Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental
Elaboró



Lic. Miguel Ángel Cerón Cruz.
Director de Acceso a la Información
Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental
Vo. Bo.

RESOLUCIÓN

A. Solicitudes de Acceso a la Información en las que se analiza la inexistencia de la información solicitada:

A.14. Folio 1700300002718 – RRA 2291/18 – Centro Federal de Protección a Personas

Contenido de la Solicitud: "5. Número de solicitudes recibidas y/o analizadas de incorporación de una persona al Programa de protección a Personas, ante el Centro Federal de Protección a Personas Periodo de tiempo: 18 de junio de 2016 a 09 de marzo de 2018." (Sic)

Antecedentes:

En respuesta inicial, se informó al particular que a la fecha del ingreso de la solicitud de mérito, el Centro Federal de Protección a Personas **se encontraba en proceso de estructuración**, de ahí que no se desprendiera elemento alguno que permitiera suponer que se cuente con la información requerida

Por lo que, el pasado 11 de abril del 2018, el solicitante se inconformó con la respuesta otorgada por el Centro Federal de Protección a Personas (Órgano Desconcentrado de la Procuraduría General de la República), refiriendo que no se le proporcionó la información solicitada, por lo que interpuso recurso de revisión ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Por lo que, con la finalidad de sobrepasar el recurso de revisión citado y dar certeza al particular de la búsqueda de la información solicitada y de la veracidad de la respuesta que le fue otorgada inicialmente, se expone lo siguiente:

Resulta necesario precisar que por medidas de protección debe entenderse como aquellas acciones tendientes a eliminar y reducir los riesgos que pueda sufrir una persona derivado de la acción de represalia eventual con motivo de su colaboración, o participación en un procedimiento penal, así como de personas o familiares cercanas a éste, mismas que son administradas y ejecutadas bajo el "Programa Federal de Protección a Personas" de manera independiente al desarrollo del procedimiento penal que en su caso se encuentre instaurado ante la Subprocuraduría y/o Fiscalía respectiva.

Lo anterior, considerando que para otorgar dichas medidas de protección es necesario que éstas pasen por el procedimiento contemplado en la **Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal**, mismo que en su parte conducente, se encuentra contemplado a través de los siguientes artículos:

CAPÍTULO VII DE LA INCORPORACIÓN AL PROGRAMA

ARTÍCULO 20. La solicitud de incorporación al Programa, la deberá realizar el Titular de la Subprocuraduría o unidad administrativa equivalente a la que pertenezca el Ministerio Público o el juez a que se refiere este artículo que conozca del Procedimiento Penal en los que intervenga la persona a proteger, las cuales serán resueltas por el Director del Centro.

ARTÍCULO 22. La petición de otorgar Medidas de Protección deberá contener como elementos mínimos que permitan realizar el Estudio Técnico, los siguientes:

- a) Nombre completo del candidato a protección, su dirección o Jugar de ubicación.
- b) Datos acerca de la investigación o proceso penal en la que interviene.
- e) Papel que detenta en el procedimiento y la importancia que reviste su participación.
- d) Datos que hagan presumir que se encuentra en una situación de riesgo su integridad física o la de personas cercanas a él.
- e) No obstante que la solicitud no contenga toda la información requerida no impide iniciar el Estudio Técnico, pudiéndose recabar los datos necesarios para su elaboración en breve término.
- f) Cualquier otra que el Ministerio Público estime necesaria para justificar la necesidad de su protección.

ARTÍCULO 23. El Director deberá contar con el Estudio Técnico que le permita decidir sobre la procedencia de incorporación o no de una persona al Programa.

ARTÍCULO 24.- Recibida la solicitud de incorporación al Programa, el Director en un tiempo razonable, a fin de determinar su procedencia, tomará en consideración el resultado del Estudio Técnico, el cual deberá de contener por lo menos los siguientes aspectos:

- I. Que exista un nexo entre la intervención de la persona a proteger en el Procedimiento Penal y los factores de riesgo en que se encuentre la persona susceptible de recibir protección. En los casos en que se haya concluido la participación de la Persona Protegida en el procedimiento penal, se realizará un estudio a fin de determinar si subsisten las condiciones de riesgo para determinar su continuidad o su terminación de las medidas de protección.
- II. Que la persona otorgue su consentimiento y proporcione información fidedigna y confiable para la realización el Estudio Técnico, apercibido que la falsedad en su dicho pudiere tener como consecuencia la no incorporación al Programa.
- III. Que la persona a proteger no esté motivado por interés distinto que el de colaborar con la procuración y administración de justicia.
- IV. Que las Medidas de Protección sean las idóneas para garantizar la seguridad de la persona.
- V. Las obligaciones legales que tenga la persona con terceros.
- VI. Los antecedentes penales que tuviere.
- VII. Que la admisión de la persona, no sea un factor que afecte la seguridad del Programa, del Centro o de la Procuraduría.

ARTÍCULO 26. Una vez concluido el Estudio Técnico, el Director adoptará la decisión que corresponda, la cual podría ser reconsiderada a solicitud del Procurador, con independencia de lo previsto en el artículo 20, párrafo segundo de la presente Ley, la que será en el siguiente sentido:

- a) Incorporar a la persona al Programa y establecer las Medidas de Protección que se le aplicarán.
- b) No incorporar al Programa.

Así, se desprende que el Director del Centro Federal de Protección a Personas resolverá aquellas solicitudes de incorporación al "Programa Federal de Protección a Personas", misma que en todo momento deberá realizar el Titular de la Subprocuraduría y/o Fiscalía a la cual se encuentra adscrito el Ministerio Público de la Federación encargado de la investigación

correspondiente, cuya petición deberá contener, entre otros, los siguientes requisitos mínimos:

- Nombre completo del candidato a protección, su dirección o lugar de ubicación.
- Datos acerca de la investigación o proceso penal en la que interviene.
- Datos que hagan presumir que se encuentra en una situación de riesgo su integridad física o la de personas cercanas a él.
- Cualquier otra que el Ministerio Público estime necesaria para justificar la necesidad de su protección.

Ello, a efecto de poder emitir el "Estudio Técnico" respectivo, **del cual el Director del Órgano Desconcentrado en comento, en un tiempo razonable, determinará su procedencia al multicitado "Programa Federal de Protección a Personas"**, así como establecer las medidas de protección que se aplicarán.

Así, se desprende que **el Director de este Centro Federal de Protección a Personas resolverá aquellas solicitudes de incorporación al "Programa Federal de Protección a Personas"**, misma que en todo momento deberá realizar el Titular de la Subprocuraduría y/o Fiscalía a la cual se encuentra adscrito el Ministerio Público de la Federación encargado de la investigación correspondiente.

No obstante y expuesto lo anterior, es menester señalar que normativamente sí existe el Centro Federal de Protección a Personas; sin embargo, éste **se encuentra en proceso de estructuración**, toda vez que de la normativa antes descrita, es posible concluir que el Titular de dicho Centro, para el desahogo de sus funciones, necesita de un grupo de servidores públicos a los cuales les designará facultades a efecto de atender el objetivo de la **Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal**, circunstancia que a la fecha de presentación de la solicitud no acontece, toda vez que las designaciones recaen bajo un procedimiento de selección que garantice la idoneidad del personal, así como su capacitación para el ejercicio del cargo que se le designe, tal y como se desprende de los siguientes preceptos legales:

*ARTÍCULO 8. Para el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley, **se dotará a todo el personal responsable de la operación del Programa de las herramientas y el equipo necesario para un desempeño eficaz.***

Además, se implementarán procedimientos de selección que garanticen la idoneidad del personal, así como su capacitación para el ejercicio del cargo.

*ARTÍCULO 9. El Centro deberá contar con un grupo multidisciplinario de servidores públicos, **integrado por abogados, médicos, psicólogos, trabajadores sociales y demás profesionistas que sean necesarios, así como con elementos de la Policía Federal Ministerial adscritos a la Unidad.***

*ARTÍCULO 10. La ejecución de las Medidas de Protección estará a cargo de la Unidad misma que **dependerá del Director** y se integrará con agentes de la Policía Federal Ministerial, entrenados y capacitados para tal fin.*

Una vez expuesto lo anterior, es importante recordar que el particular requiere conocer el número de solicitudes recibidas y/o analizadas de incorporación de una persona al Programa de protección a Personas, ante el Centro Federal de Protección a Personas.

Por lo que, como se le informó al particular en respuesta inicial, **el Centro Federal de Protección a Personas aún se encuentra en proceso de estructuración**, circunstancia que implica señalar que de manera interna se están llevando a cabo diversas actividades entre las que destacan los procedimientos de selección de personal que garantizaran la idoneidad y capacitación para el ejercicio del cargo y, en su caso, analicen las solicitudes de incorporación al "Programa Federal de Protección a Personas" que, en su momento, los Titulares de las Subprocuradurías y/o Fiscalías de la Procuraduría General de la República presenten y, que de acuerdo a su formalidad, éstas puedan ser determinadas como positivas o negativas.

Así las cosas, se insiste que a la fecha de presentación de la solicitud, **normativamente se ha regulado las facultades** generales de este Centro Federal de Protección a Personas, **y no así se ha emitido aquella normativa**, tales como lineamientos, protocolos, acuerdos y demás instrumentos necesarios para el debido funcionamiento del "Programa Federal de Protección a Personas", máxime que de acuerdo a las facultades del Titular de dicho Órgano Desconcentrado, es el servidor público que se encuentra realizando las gestiones necesarias para emitir los citados ordenamientos legales a efecto de poner en marcha al "Programa Federal de Protección a Personas" y, por ende, por conducto de los servidores públicos, los cuales se encuentran en proceso de designación, incorporen las solicitudes.

Robustece lo anterior, toda vez que este Centro Federal de Protección a Personas no es la autoridad para elaborar y determinar por propia cuenta la procedencia de una solicitud de incorporación al denominado Programa, siendo que éstas son solicitadas por los Titulares de las Subprocuradurías y/o Fiscalías en donde se encuentre adscrito el Agente del Ministerio Público de la Federación responsable del procedimiento penal, y las cuales, de conformidad con el artículo 3 de la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal, son independientes; tal y como se desprende a continuación:

ARTÍCULO 3. Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, en el ámbito de su competencia, están obligadas a prestar la colaboración que les requiera la Procuraduría General de la República, por conducto del Centro para la aplicación de las Medidas de Protección previstas en esta Ley.

La administración y ejecución de las medidas de protección contempladas en el Programa, son independientes del desarrollo del Procedimiento Penal, el cual sólo servirá para determinar y eliminar los factores de riesgo de la persona sujeta a protección.

En consecuencia, se desprende una imposibilidad material para que el Centro Federal de Protección a Personas se pronuncie respecto de la información solicitada por la particular, toda vez que, **no se advierte que el "Programa Federal de Protección a Personas" se encuentre en funcionamiento, siendo que no aún no se han emitido los lineamientos, protocolos,**

acuerdos y demás instrumentos para su funcionamiento, ni se ha designado a los servidores públicos que se encargarán de su administración, ni tampoco se dependen elementos suficientes para afirmar o negar que se han recibido solicitudes de incorporación al programa por parte de las áreas sustantivas de la Procuraduría General de la República.

Lo anterior, toda vez que atendiendo la importancia de la materia por la cual fue creado este Centro, es necesario que su propio Titular, de acuerdo a su capacitación y conocimiento de los temas específicos, sea el único servidor público encargado de la elaboración de los lineamientos, protocolos, acuerdos y demás instrumentos para su funcionamiento, máxime que de conformidad con los siguientes preceptos legales cuenta con autonomía, principalmente técnica, operativa y presupuestal; como se desprende a continuación:

ARTÍCULO 5. La protección de personas se regirá por los siguientes principios:

[...]

V. Autonomía: El Director gozará de las más amplias facultades para dictar las medidas oportunas que sujeten y garanticen la exacta aplicación de la presente Ley.

...

ARTÍCULO 6. El Centro es un Órgano Desconcentrado y Especializado de la Procuraduría General de la República; con autonomía técnica y operativa en la aplicación de las Medidas de Protección, el cual estará a cargo de un Director, nombrado y removido libremente por el Presidente de la República, a propuesta del Procurador.

ARTÍCULO 7. El Director, para el cumplimiento de la presente Ley contará con las siguientes facultades:

I. Suscribir y emitir los instrumentos jurídicos que faciliten el funcionamiento y operación del Programa, previa consideración del Procurador.

II. Recibir y analizar las solicitudes de incorporación de una persona al Programa, en virtud de encontrarse en situación de riesgo o peligro por su intervención en un Procedimiento Penal. Estas solicitudes deberán ser presentadas por el Titular de la Subprocuraduría o de la unidad administrativa equivalente a las que se encuentre asignado el Ministerio Público responsable del Procedimiento Penal, en donde interviene o ha intervenido la persona a proteger.

...

X. Gestionar ante la Oficialía Mayor de la Procuraduría lo relativo a la obtención de los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros para la correcta aplicación de sus obligaciones, una vez que se haya autorizado el presupuesto para tal efecto.

RESOLUCIÓN PGR/CT/0037/2018: En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, el Comité de Transparencia **confirma** declarar la inexistencia del número de solicitudes recibidas y/o analizadas de incorporación de una persona al Programa de protección a Personas, ante el Centro Federal de Protección a Personas, toda vez que tal y como ha quedado evidenciado con anterioridad, existe una imposibilidad material, siendo que aún se están realizando las gestiones necesarias para la emisión de los lineamientos, protocolos, acuerdos y demás instrumentos necesarios para el debido funcionamiento del "Programa Federal de Protección a Personas", así como la designación del personal que se encargara de la administración de dicho programa, máxime que de acuerdo a la autonomía presupuestaria, técnica y operativa recae en el propio Titular del Centro; de conformidad con el artículo 141

de la LFTAIP, en relación con el Criterio de Interpretación del Pleno del INAI 12/10, el cual señala que:

***"Propósito de la declaración formal de inexistencia.* Atendiendo a lo dispuesto por los artículos 43, 46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 70 de su Reglamento, en los que se prevé el procedimiento a seguir para declarar la inexistencia de la información, el propósito de que los Comités de Información de los sujetos obligados por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental emitan una declaración que confirme, en su caso, la inexistencia de la información solicitada, es **garantizar al solicitante que efectivamente se realizaron las gestiones necesarias para la ubicación de la información de su interés, y que éstas fueron las adecuadas para atender a la particularidad del caso concreto.** En ese sentido, las declaraciones de inexistencia de los Comités de Información deben contener los elementos suficientes para generar en los solicitantes la certeza del carácter exhaustivo de la búsqueda de la información solicitada y de que su solicitud fue atendida debidamente; es decir, deben motivar o precisar las razones por las que se buscó la información en determinada(S) unidad (es) administrativa(s), los criterios de búsqueda utilizados, y las demás circunstancias que fueron tomadas en cuenta."**

Por lo anterior, se solicita a la Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental (UTAG), hacer del conocimiento del particular, así como del Órgano Garante en materia de Transparencia la presente resolución para los efectos a los que hay lugar.

This image shows a full page of handwriting practice paper. It features numerous horizontal dashed lines spaced evenly across the page to guide letter height. In the bottom right corner, there is a small, stylized illustration of a blue pencil pointing upwards and to the left. The rest of the page is completely blank, providing space for writing practice.

La presente resolución forma parte del Acta de la Décima Octava Sesión Ordinaria celebrada el 15 de mayo del 2018 del Comité de Transparencia de la Procuraduría General de la República. Al efecto, se elabora por triplicado, firmando al calce los integrantes del Comité de Transparencia para constancia:

INTEGRANTES



Lcda. Adi Loza Barrera.

Titular de la Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental y
Presidenta del Comité de Transparencia.



Lic. Luis Grijalva Torrero.

Titular del Órgano Interno de Control



Lcda. Adriana Fabiola Rodríguez León.

Suplente del Director General de Recursos Materiales y
Servicios Generales, responsable del Área Coordinadora
de Archivos de la Dependencia.



Lcda. Gabriela Santillán García.

Secretaría Técnica del Comité de Transparencia
Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental
Elaboró



Lic. Miguel Ángel Cerón Cruz.

Director de Acceso a la Información
Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental
Vo. Bo.

RESOLUCIÓN

A. Solicitudes de Acceso a la Información en las que se analiza la inexistencia de la información solicitada:

A.15. Folio 1700300002818 – RRA 2292/18 – Centro Federal de Protección a Personas

Contenido de la Solicitud: "6. Número de solicitudes recibidas y/o analizadas de incorporación de una persona al Programa de protección a Personas, ante el Centro Federal de Protección a Personas, desglosando la información por unidad administrativa que presentó tales solicitudes. Periodo de tiempo: 18 de junio de 2016 a 09 de marzo de 2018." (Sic)

Antecedentes:

En respuesta inicial, se informó al particular que a la fecha del ingreso de la solicitud de mérito, el Centro Federal de Protección a Personas se encontraba en proceso de estructuración, de ahí que no se desprendiera elemento alguno que permitiera suponer que se cuente con la información requerida

Por lo que, el pasado 11 de abril del 2018, el solicitante se inconformó con la respuesta otorgada por el Centro Federal de Protección a Personas (Órgano Desconcentrado de la Procuraduría General de la República), refiriendo que no se le proporcionó la información solicitada, por lo que interpuso recurso de revisión ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Por lo que, con la finalidad de sobreseer el recurso de revisión citado y dar certeza al particular de la búsqueda de la información solicitada y de la veracidad de la respuesta que le fue otorgada inicialmente, se expone lo siguiente:

Resulta necesario precisar que por medidas de protección debe entenderse como aquellas acciones tendientes a eliminar y reducir los riesgos que pueda sufrir una persona derivado de la acción de represalia eventual con motivo de su colaboración, o participación en un procedimiento penal, así como de personas o familiares cercanas a éste, mismas que son administradas y ejecutadas bajo el "Programa Federal de Protección a Personas" de manera independiente al desarrollo del procedimiento penal que en su caso se encuentre instaurado ante la Subprocuraduría y/o Fiscalía respectiva.

Lo anterior, considerando que para otorgar dichas medidas de protección es necesario que éstas pasen por el procedimiento contemplado en la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal, mismo que en su parte conducente, se encuentra contemplado a través de los siguientes artículos:

CAPÍTULO VII

DE LA INCORPORACIÓN AL PROGRAMA

ARTÍCULO 20. La solicitud de incorporación al Programa, la deberá realizar el Titular de la Subprocuraduría o unidad administrativa equivalente a la que pertenezca el Ministerio Público o el juez a que se refiere este artículo que conozca del Procedimiento Penal en los que intervenga la persona a proteger, las cuales serán resueltas por el Director del Centro.

ARTÍCULO 22. La petición de otorgar Medidas de Protección deberá contener como elementos mínimos que permitan realizar el Estudio Técnico, los siguientes:

- a) Nombre completo del candidato a protección, su dirección o lugar de ubicación.
- b) Datos acerca de la investigación o proceso penal en la que interviene.
- e) Papel que detenta en el procedimiento y la importancia que reviste su participación.
- d) Datos que hagan presumir que se encuentra en una situación de riesgo su integridad física o la de personas cercanas a él.
- e) No obstante que la solicitud no contenga toda la información requerida no impide iniciar el Estudio Técnico, pudiéndose recabar los datos necesarios para su elaboración en breve término.
- f) Cualquier otra que el Ministerio Público estime necesaria para justificar la necesidad de su protección.

ARTÍCULO 23. El Director deberá contar con el Estudio Técnico que le permita decidir sobre la procedencia de incorporación o no de una persona al Programa.

ARTÍCULO 24.- Recibida la solicitud de incorporación al Programa, el Director en un tiempo razonable, a fin de determinar su procedencia, tomará en consideración el resultado del Estudio Técnico, el cual deberá de contener por lo menos los siguientes aspectos:

- I. Que exista un nexo entre la intervención de la persona a proteger en el Procedimiento Penal y los factores de riesgo en que se encuentre la persona susceptible de recibir protección. En los casos en que se haya concluido la participación de la Persona Protegida en el procedimiento penal, se realizará un estudio a fin de determinar si subsisten las condiciones de riesgo para determinar su continuidad o su terminación de las medidas de protección.
- II. Que la persona otorgue su consentimiento y proporcione información fidedigna y confiable para la realización del Estudio Técnico, apercibido que la falsedad en su dicho pudiere tener como consecuencia la no incorporación al Programa.
- III. Que la persona a proteger no esté motivado por interés distinto que el de colaborar con la procuración y administración de justicia.
- IV. Que las Medidas de Protección sean las idóneas para garantizar la seguridad de la persona.
- V. Las obligaciones legales que tenga la persona con terceros.
- VI. Los antecedentes penales que tuviere.
- VII. Que la admisión de la persona, no sea un factor que afecte la seguridad del Programa, del Centro o de la Procuraduría.

ARTÍCULO 26. Una vez concluido el Estudio Técnico, el Director adoptará la decisión que corresponda, la cual podría ser reconsiderada a solicitud del Procurador, con independencia de lo previsto en el artículo 20, párrafo segundo de la presente Ley, la que será en el siguiente sentido:

- a) Incorporar a la persona al Programa y establecer las Medidas de Protección que se le aplicarán.
- b) No incorporar al Programa.

Así, se desprende que el Director del Centro Federal de Protección a Personas resolverá aquellas solicitudes de incorporación al "Programa Federal de Protección a Personas", misma que en todo momento deberá realizar el Titular de la Subprocuraduría y/o Fiscalía a la cual

se encuentra adscrito el Ministerio Público de la Federación encargado de la investigación correspondiente, cuya petición deberá contener, entre otros, los siguientes requisitos mínimos:

- Nombre completo del candidato a protección, su dirección o lugar de ubicación.
- Datos acerca de la investigación o proceso penal en la que interviene.
- Datos que hagan presumir que se encuentra en una situación de riesgo su integridad física o la de personas cercanas a él.
- Cualquier otra que el Ministerio Público estime necesaria para justificar la necesidad de su protección.

Ello, a efecto de poder emitir el "Estudio Técnico" respectivo, **del cual el Director del Órgano Desconcentrado en comento, en un tiempo razonable, determinará su procedencia al multicitado "Programa Federal de Protección a Personas"**, así como establecer las medidas de protección que se aplicarán.

Así, se desprende que **el Director de este Centro Federal de Protección a Personas resolverá aquellas solicitudes de incorporación al "Programa Federal de Protección a Personas"**, misma que en todo momento deberá realizar el Titular de la Subprocuraduría y/o Fiscalía a la cual se encuentra adscrito el Ministerio Público de la Federación encargado de la investigación correspondiente.

No obstante y expuesto lo anterior, es menester señalar que normativamente sí existe el Centro Federal de Protección a Personas; sin embargo, éste **se encuentra en proceso de estructuración**, toda vez que de la normativa antes descrita, es posible concluir que el Titular de dicho Centro, para el desahogo de sus funciones, necesita de un grupo de servidores públicos a los cuales les designará facultades a efecto de atender el objetivo de la **Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal**, circunstancia que a la fecha de presentación de la solicitud no acontece, toda vez que las designaciones recaen bajo un procedimiento de selección que garantice la idoneidad del personal, así como su capacitación para el ejercicio del cargo que se le designe, tal y como se desprende de los siguientes preceptos legales:

*ARTÍCULO 8. Para el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley, **se dotará a todo el personal responsable de la operación del Programa de las herramientas y el equipo necesario para un desempeño eficaz.***

Además, se implementarán procedimientos de selección que garanticen la idoneidad del personal, así como su capacitación para el ejercicio del cargo.

*ARTÍCULO 9. El Centro deberá contar con un grupo multidisciplinario de servidores públicos, **integrado por abogados, médicos, psicólogos, trabajadores sociales y demás profesionistas que sean necesarios, así como con elementos de la Policía Federal Ministerial adscritos a la Unidad.***

ARTÍCULO 10. La ejecución de las Medidas de Protección estará a cargo de la Unidad misma que dependerá del Director y se integrará con agentes de la Policía Federal Ministerial, entrenados y capacitados para tal fin.

Una vez expuesto lo anterior, es importante recordar que el particular requiere conocer número de solicitudes recibidas y/o analizadas de incorporación de una persona al Programa de protección a Personas, ante el Centro Federal de Protección a Personas, desglosando la información por unidad administrativa que presentó tales solicitudes, para el periodo del 18 de junio de 2016 a 09 de marzo de 2018.

Por lo que, como se le informó al particular en respuesta inicial, **el Centro Federal de Protección a Personas aún se encuentra en proceso de estructuración**, circunstancia que implica señalar que de manera interna se están llevando a cabo diversas actividades entre las que destacan los procedimientos de selección de personal que garantizaran la idoneidad y capacitación para el ejercicio del cargo y, en su caso, analicen las solicitudes de incorporación al "Programa Federal de Protección a Personas" que, en su momento, los Titulares de las Subprocuradurías y/o Fiscalías de la Procuraduría General de la República presenten y, que de acuerdo a su formalidad, éstas puedan ser determinadas como positivas o negativas.

Así las cosas, se insiste que a la fecha de presentación de la solicitud, normativamente se ha regulado las facultades generales de este Centro Federal de Protección a Personas, y no así se ha emitido aquella normativa, tales como lineamientos, protocolos, acuerdos y demás instrumentos necesarios para el debido funcionamiento del "Programa Federal de Protección a Personas", máxime que de acuerdo a las facultades del Titular de dicho Órgano Desconcentrado, es el servidor público que se encuentra realizando las gestiones necesarias para emitir los citados ordenamientos legales a efecto de poner en marcha al "Programa Federal de Protección a Personas" y, por ende, por conducto de los servidores públicos, los cuales se encuentran en proceso de designación, incorporen las solicitudes.

Robustece lo anterior, toda vez que este Centro Federal de Protección a Personas no es la autoridad para elaborar y determinar por propia cuenta la procedencia de una solicitud de incorporación al denominado Programa, siendo que éstas son solicitadas por los Titulares de las Subprocuradurías y/o Fiscalías en donde se encuentre adscrito el Agente del Ministerio Público de la Federación responsable del procedimiento penal, y las cuales, de conformidad con el artículo 3 de la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal, son independientes; tal y como se desprende a continuación:

ARTÍCULO 3. Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, en el ámbito de su competencia, están obligadas a prestar la colaboración que les requiera la Procuraduría General de la República, por conducto del Centro para la aplicación de las Medidas de Protección previstas en esta Ley.

La administración y ejecución de las medidas de protección contempladas en el Programa, son independientes del desarrollo del Procedimiento Penal, el cual sólo servirá para determinar y eliminar los factores de riesgo de la persona sujeta a protección.

En consecuencia, se desprende una imposibilidad material para que el Centro Federal de Protección a Personas se pronuncie respecto de la información solicitada por la particular, toda vez que, no se advierte que el "Programa Federal de Protección a Personas" se encuentre en funcionamiento, siendo que no aún no se han emitido los lineamientos, protocolos, acuerdos y demás instrumentos para su funcionamiento, ni se ha designado a los servidores públicos que se encargarán de su administración, ni tampoco se dependen elementos suficientes para afirmar o negar que se han recibido solicitudes de incorporación al programa por parte de las áreas sustantivas de la Procuraduría General de la República.

Lo anterior, toda vez que atendiendo la importancia de la materia por la cual fue creado este Centro, es necesario que su propio Titular, de acuerdo a su capacitación y conocimiento de los temas específicos, sea el único servidor público encargado de la elaboración de los lineamientos, protocolos, acuerdos y demás instrumentos para su funcionamiento, máxime que de conformidad con los siguientes preceptos legales cuenta con autonomía, principalmente técnica, operativa y presupuestal; como se desprende a continuación:

ARTÍCULO 5. La protección de personas se regirá por los siguientes principios:

[...]

V. Autonomía: El Director gozará de las más amplias facultades para dictar las medidas oportunas que sujeten y garanticen la exacta aplicación de la presente Ley.

...

ARTÍCULO 6. El Centro es un Órgano Desconcentrado y Especializado de la Procuraduría General de la República; con autonomía técnica y operativa en la aplicación de las Medidas de Protección, el cual estará a cargo de un Director, nombrado y removido libremente por el Presidente de la República, a propuesta del Procurador.

ARTÍCULO 7. El Director, para el cumplimiento de la presente Ley contará con las siguientes facultades:

I. Suscribir y emitir los instrumentos jurídicos que faciliten el funcionamiento y operación del Programa, previa consideración del Procurador.

II. Recibir y analizar las solicitudes de incorporación de una persona al Programa, en virtud de encontrarse en situación de riesgo o peligro por su intervención en un Procedimiento Penal.

Estas solicitudes deberán ser presentadas por el Titular de la Subprocuraduría o de la unidad administrativa equivalente a las que se encuentre asignado el Ministerio Público responsable del Procedimiento Penal, en donde interviene o ha intervenido la persona a proteger.

...

X. Gestionar ante la Oficialía Mayor de la Procuraduría lo relativo a la obtención de los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros para la correcta aplicación de sus obligaciones, una vez que se haya autorizado el presupuesto para tal efecto.

RESOLUCIÓN PGR/CT/0038/2018: En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, el Comité de Transparencia **confirma** declarar la inexistencia del número de solicitudes recibidas y/o analizadas de incorporación de una persona al Programa de protección a Personas, ante el Centro Federal de Protección a Personas, toda vez que tal y como ha quedado evidenciado con anterioridad, existe una imposibilidad material, siendo que aun se están realizando las gestiones necesarias para la emisión de los lineamientos, protocolos,

La presente resolución forma parte del Acta de la Décima Octava Sesión Ordinaria celebrada el 15 de mayo del 2018 del Comité de Transparencia de la Procuraduría General de la República. Al efecto, se elabora por triplicado, firmando al calce los integrantes del Comité de Transparencia para constancia:

INTEGRANTES



Lcda. Adi Loza Barrera.
Titular de la Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental y
Presidenta del Comité de Transparencia.



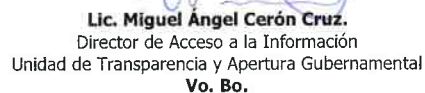
Lic. Luis Grijalva Torrero.
Titular del Órgano Interno de Control



Lcda. Adriana Fabiola Rodríguez León.
Suplente del Director General de Recursos Materiales y
Servicios Generales, responsable del Área Coordinadora
de Archivos de la Dependencia.



Lcda. Gabriela Santillán García.
Secretaría Técnica del Comité de Transparencia
Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental
Elaboró



Lic. Miguel Ángel Cerón Cruz.
Director de Acceso a la Información
Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental
Vo. Bo.

RESOLUCIÓN

A. Solicitudes de Acceso a la Información en las que se analiza la inexistencia de la información solicitada:

A.16. Folio 1700300002918 – RRA 2293/18 – Centro Federal de Protección a Personas

Contenido de la Solicitud: *"Número de solicitudes recibidas y/o analizadas de incorporación de una persona al Programa de protección a Personas, ante el Centro Federal de Protección a Personas, desglosando la información por recibidas y rechazadas. Periodo de tiempo: 18 de junio de 2016 a 09 de marzo de 2018."* (Sic)

Antecedentes:

En respuesta inicial, se informó al particular que a la fecha del ingreso de la solicitud de mérito, el Centro Federal de Protección a Personas **se encontraba en proceso de estructuración**, de ahí que no se desprendiera elemento alguno que permitiera suponer que se cuente con la información requerida

Por lo que, el pasado 11 de abril del 2018, el solicitante se inconformó con la respuesta otorgada por el Centro Federal de Protección a Personas (Órgano Desconcentrado de la Procuraduría General de la República), refiriendo que no se le proporcionó la información solicitada, por lo que interpuso recurso de revisión ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Por lo que, con la finalidad de sobreseer el recurso de revisión citado y dar certeza al particular de la búsqueda de la información solicitada y de la veracidad de la respuesta que le fue otorgada inicialmente, se expone lo siguiente:

Resulta necesario precisar que por medidas de protección debe entenderse como aquellas acciones tendientes a eliminar y reducir los riesgos que pueda sufrir una persona derivado de la acción de represalia eventual con motivo de su colaboración, o participación en un procedimiento penal, así como de personas o familiares cercanas a éste, mismas que son administradas y ejecutadas bajo el "Programa Federal de Protección a Personas" de manera independiente al desarrollo del procedimiento penal que en su caso se encuentre instaurado ante la Subprocuraduría y/o Fiscalía respectiva.

Lo anterior, considerando que para otorgar dichas medidas de protección es necesario que éstas pasen por el procedimiento contemplado en la **Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal**, mismo que en su parte conducente, se encuentra contemplado a través de los siguientes artículos:

CAPÍTULO VII

DE LA INCORPORACIÓN AL PROGRAMA

ARTÍCULO 20. La solicitud de incorporación al Programa, la deberá realizar el Titular de la Subprocuraduría o unidad administrativa equivalente a la que pertenezca el Ministerio Público o el juez a que se refiere este artículo que conozca del Procedimiento Penal en los que intervenga la persona a proteger, las cuales serán resueltas por el Director del Centro.

ARTÍCULO 22. La petición de otorgar Medidas de Protección deberá contener como elementos mínimos que permitan realizar el Estudio Técnico, los siguientes:

- a) Nombre completo del candidato a protección, su dirección o Jugar de ubicación.
- b) Datos acerca de la investigación o proceso penal en la que interviene.
- e) Papel que detenta en el procedimiento y la importancia que reviste su participación.
- d) Datos que hagan presumir que se encuentra en una situación de riesgo su integridad física o la de personas cercanas a él.
- e) No obstante que la solicitud no contenga toda la información requerida no impide iniciar el Estudio Técnico, pudiéndose recabar los datos necesarios para su elaboración en breve término.
- f) Cualquier otra que el Ministerio Público estime necesaria para justificar la necesidad de su protección.

ARTÍCULO 23. El Director deberá contar con el Estudio Técnico que le permita decidir sobre la procedencia de incorporación o no de una persona al Programa.

ARTÍCULO 24.- Recibida la solicitud de incorporación al Programa, el Director en un tiempo razonable, a fin de determinar su procedencia, tomará en consideración el resultado del Estudio Técnico, el cual deberá de contener por lo menos los siguientes aspectos:

- I. Que exista un nexo entre la intervención de la persona a proteger en el Procedimiento Penal y los factores de riesgo en que se encuentre la persona susceptible de recibir protección. En los casos en que se haya concluido la participación de la Persona Protegida en el procedimiento penal, se realizará un estudio a fin de determinar si subsisten las condiciones de riesgo para determinar su continuidad o su terminación de las medidas de protección.
- II. Que la persona otorgue su consentimiento y proporcione información fidedigna y confiable para la realización el Estudio Técnico, apercibido que la falsedad en su dicho pudiere tener como consecuencia la no incorporación al Programa.
- III. Que la persona a proteger no esté motivado por interés distinto que el de colaborar con la procuración y administración de justicia.
- IV. Que las Medidas de Protección sean las idóneas para garantizar la seguridad de la persona.
- V. Las obligaciones legales que tenga la persona con terceros.
- VI. Los antecedentes penales que tuviere.
- VII. Que la admisión de la persona, no sea un factor que afecte la seguridad del Programa, del Centro o de la Procuraduría.

ARTÍCULO 26. Una vez concluido el Estudio Técnico, el Director adoptará la decisión que corresponda, la cual podría ser reconsiderada a solicitud del Procurador, con independencia de lo previsto en el artículo 20, párrafo segundo de la presente Ley, la que será en el siguiente sentido:

- a) Incorporar a la persona al Programa y establecer las Medidas de Protección que se le aplicarán.
- b) No incorporar al Programa.

Así, se desprende que el Director del Centro Federal de Protección a Personas resolverá aquellas solicitudes de incorporación al "Programa Federal de Protección a Personas", misma que en todo momento deberá realizar el Titular de la Subprocuraduría y/o Fiscalía a la cual

se encuentra adscrito el Ministerio Público de la Federación encargado de la investigación correspondiente, cuya petición deberá contener, entre otros, los siguientes requisitos mínimos:

- Nombre completo del candidato a protección, su dirección o lugar de ubicación.
- Datos acerca de la investigación o proceso penal en la que interviene.
- Datos que hagan presumir que se encuentra en una situación de riesgo su integridad física o la de personas cercanas a él.
- Cualquier otra que el Ministerio Público estime necesaria para justificar la necesidad de su protección.

Ello, a efecto de poder emitir el "Estudio Técnico" respectivo, **del cual el Director del Órgano Desconcentrado en comento, en un tiempo razonable, determinará su procedencia al multicitado "Programa Federal de Protección a Personas"**, así como establecer las medidas de protección que se aplicarán.

Así, se desprende que **el Director de este Centro Federal de Protección a Personas resolverá aquellas solicitudes de incorporación al "Programa Federal de Protección a Personas"**, misma que en todo momento deberá realizar el Titular de la Subprocuraduría y/o Fiscalía a la cual se encuentra adscrito el Ministerio Público de la Federación encargado de la investigación correspondiente.

No obstante y expuesto lo anterior, es menester señalar que normativamente sí existe el Centro Federal de Protección a Personas; sin embargo, éste **se encuentra en proceso de estructuración**, toda vez que de la normativa antes descrita, es posible concluir que el Titular de dicho Centro, para el desahogo de sus funciones, necesita de un grupo de servidores públicos a los cuales les designará facultades a efecto de atender el objetivo de la **Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal**, circunstancia que a la fecha de presentación de la solicitud no acontece, toda vez que las designaciones recaen bajo un procedimiento de selección que garantice la idoneidad del personal, así como su capacitación para el ejercicio del cargo que se le designe, tal y como se desprende de los siguientes preceptos legales:

ARTÍCULO 8. Para el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley, se dotará a todo el personal responsable de la operación del Programa de las herramientas y el equipo necesario para un desempeño eficaz.

Además, se implementarán procedimientos de selección que garanticen la idoneidad del personal, así como su capacitación para el ejercicio del cargo.

ARTÍCULO 9. El Centro deberá contar con un grupo multidisciplinario de servidores públicos, integrado por abogados, médicos, psicólogos, trabajadores sociales y demás profesionistas que sean necesarios, así como con elementos de la Policía Federal Ministerial adscritos a la Unidad.

ARTÍCULO 10. La ejecución de las Medidas de Protección estará a cargo de la Unidad misma que dependerá del Director y se integrará con agentes de la Policía Federal Ministerial, entrenados y capacitados para tal fin.

Una vez expuesto lo anterior, es importante recordar que el particular requiere conocer número de solicitudes recibidas y/o analizadas de incorporación de una persona al Programa de protección a Personas, ante el Centro Federal de Protección a Personas, desglosando la información por unidad administrativa que presentó tales solicitudes, para el periodo del 18 de junio de 2016 a 09 de marzo de 2018.

Por lo que, como se le informó al particular en respuesta inicial, **el Centro Federal de Protección a Personas aún se encuentra en proceso de estructuración**, circunstancia que implica señalar que de manera interna se están llevando a cabo diversas actividades entre las que destacan los procedimientos de selección de personal que garantizaran la idoneidad y capacitación para el ejercicio del cargo y, en su caso, analicen las solicitudes de incorporación al "Programa Federal de Protección a Personas" que, en su momento, los Titulares de las Subprocuradurías y/o Fiscalías de la Procuraduría General de la República presenten y, que de acuerdo a su formalidad, éstas puedan ser determinadas como positivas o negativas.

Así las cosas, se insiste que a la fecha de presentación de la solicitud, normativamente se ha regulado las facultades generales de este Centro Federal de Protección a Personas, y no así se ha emitido aquella normativa, tales como lineamientos, protocolos, acuerdos y demás instrumentos necesarios para el debido funcionamiento del "Programa Federal de Protección a Personas", máxime que de acuerdo a las facultades del Titular de dicho Órgano Desconcentrado, es el servidor público que se encuentra realizando las gestiones necesarias para emitir los citados ordenamientos legales a efecto de poner en marcha al "Programa Federal de Protección a Personas" y, por ende, por conducto de los servidores públicos, los cuales se encuentran en proceso de designación, incorporen las solicitudes.

Robustece lo anterior, toda vez que este Centro Federal de Protección a Personas no es la autoridad para elaborar y determinar por propia cuenta la procedencia de una solicitud de incorporación al denominado Programa, siendo que éstas son solicitadas por los Titulares de las Subprocuradurías y/o Fiscalías en donde se encuentre adscrito el Agente del Ministerio Público de la Federación responsable del procedimiento penal, y las cuales, de conformidad con el artículo 3 de la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal, son independientes; tal y como se desprende a continuación:

ARTÍCULO 3. Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, en el ámbito de su competencia, están obligadas a prestar la colaboración que les requiera la Procuraduría General de la República, por conducto del Centro para la aplicación de las Medidas de Protección previstas en esta Ley.

La administración y ejecución de las medidas de protección contempladas en el Programa, son independientes del desarrollo del Procedimiento Penal, el cual sólo servirá para determinar y eliminar los factores de riesgo de la persona sujeta a protección.

En consecuencia, se desprende una imposibilidad material para que el Centro Federal de Protección a Personas se pronuncie respecto de la información solicitada por la particular, toda vez que, no se advierte que el "Programa Federal de Protección a Personas" se encuentre en funcionamiento, siendo que no aún no se han emitido los lineamientos, protocolos, acuerdos y demás instrumentos para su funcionamiento, ni se ha designado a los servidores públicos que se encargarán de su administración, ni tampoco se dependen elementos suficientes para afirmar o negar que se han recibido solicitudes de incorporación al programa por parte de las áreas sustantivas de la Procuraduría General de la República.

Lo anterior, toda vez que atendiendo la importancia de la materia por la cual fue creado este Centro, es necesario que su propio Titular, de acuerdo a su capacitación y conocimiento de los temas específicos, sea el único servidor público encargado de la elaboración de los lineamientos, protocolos, acuerdos y demás instrumentos para su funcionamiento, máxime que de conformidad con los siguientes preceptos legales cuenta con autonomía, principalmente técnica, operativa y presupuestal; como se desprende a continuación:

*ARTÍCULO 5. La protección de personas se regirá por los siguientes principios:
[...]*

V. Autonomía: El Director gozará de las más amplias facultades para dictar las medidas oportunas que sujeten y garanticen la exacta aplicación de la presente Ley.

*...
ARTÍCULO 6. El Centro es un Órgano Desconcentrado y Especializado de la Procuraduría General de la República; con autonomía técnica y operativa en la aplicación de las Medidas de Protección, el cual estará a cargo de un Director, nombrado y removido libremente por el Presidente de la República, a propuesta del Procurador.*

ARTÍCULO 7. El Director, para el cumplimiento de la presente Ley contará con las siguientes facultades:

I. Suscribir y emitir los instrumentos jurídicos que faciliten el funcionamiento y operación del Programa, previa consideración del Procurador.

II. Recibir y analizar las solicitudes de incorporación de una persona al Programa, en virtud de encontrarse en situación de riesgo o peligro por su intervención en un Procedimiento Penal. Estas solicitudes deberán ser presentadas por el Titular de la Subprocuraduría o de la unidad administrativa equivalente a las que se encuentre asignado el Ministerio Público responsable del Procedimiento Penal, en donde interviene o ha intervenido la persona a proteger.

*...
X. Gestionar ante la Oficialía Mayor de la Procuraduría lo relativo a la obtención de los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros para la correcta aplicación de sus obligaciones, una vez que se haya autorizado el presupuesto para tal efecto.*

RESOLUCIÓN PGR/CT/0039/2018: En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, el Comité de Transparencia **confirma** declarar la inexistencia del número de solicitudes recibidas y/o analizadas de incorporación de una persona al Programa de protección a Personas, ante el Centro Federal de Protección a Personas, toda vez que tal y como ha quedado evidenciado con anterioridad, existe una imposibilidad material, siendo que aún se están realizando las gestiones necesarias para la emisión de los lineamientos, protocolos,

La presente resolución forma parte del Acta de la Décima Octava Sesión Ordinaria celebrada el 15 de mayo del 2018 del Comité de Transparencia de la Procuraduría General de la República. Al efecto, se elabora por triplicado, firmando al calce los integrantes del Comité de Transparencia para constancia:

INTEGRANTES



Lcda. Adi Loza Barrera.

Titular de la Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental y
Presidenta del Comité de Transparencia.



Lic. Luis Grijalva Torrero.

Titular del Órgano Interno de Control



Lcda. Adriana Fabiola Rodríguez León.

Suplente del Director General de Recursos Materiales y
Servicios Generales, responsable del Área Coordinadora
de Archivos de la Dependencia.



Lcda. Gabriela Santillán García.

Secretaría Técnica del Comité de Transparencia
Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental
Elaboró

Lic. Miguel Ángel Cerón Cruz.

Director de Acceso a la Información
Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental
Vo. Bo.

RESOLUCIÓN

A. Solicitudes de Acceso a la Información en las que se analiza la inexistencia de la información solicitada:

A.17. Folio 1700300003018 – RRA 2294/18 – Centro Federal de Protección a Personas

Contenido de la Solicitud: *"Número de ocasiones que el Centro Federal de Protección a Personas a dispuesto finalizar el programa de protección a personas. Periodo de tiempo: 18 de junio de 2016 a 09 de marzo de 2018."* (Sic)

Antecedentes:

En respuesta inicial, se informó al particular que a la fecha del ingreso de la solicitud de mérito, el Centro Federal de Protección a Personas **se encontraba en proceso de estructuración**, de ahí que no se desprendiera elemento alguno que permitiera suponer que se cuente con la información requerida.

Por lo que, el pasado 11 de abril del 2018, el solicitante se inconformó con la respuesta otorgada por el Centro Federal de Protección a Personas (Órgano Desconcentrado de la Procuraduría General de la República), refiriendo que no se le proporcionó la información solicitada, por lo que interpuso recurso de revisión ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Por lo que, con la finalidad de sobreseer el recurso de revisión citado y dar certeza al particular de la búsqueda de la información solicitada y de la veracidad de la respuesta que le fue otorgada inicialmente, se expone lo siguiente:

Resulta necesario precisar que por medidas de protección debe entenderse como aquellas acciones tendientes a eliminar y reducir los riesgos que pueda sufrir una persona derivado de la acción de represalia eventual con motivo de su colaboración, o participación en un procedimiento penal, así como de personas o familiares cercanas a éste, mismas que son administradas y ejecutadas bajo el "Programa Federal de Protección a Personas" de manera independiente al desarrollo del procedimiento penal que en su caso se encuentre instaurado ante la Subprocuraduría y/o Fiscalía respectiva.

Lo anterior, considerando que para otorgar dichas medidas de protección es necesario que éstas pasen por el procedimiento contemplado en la **Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal**, mismo que en su parte conducente, se encuentra contemplado a través de los siguientes artículos:

CAPÍTULO VII

DE LA INCORPORACIÓN AL PROGRAMA

ARTÍCULO 20. La solicitud de incorporación al Programa, la deberá realizar el Titular de la Subprocuraduría o unidad administrativa equivalente a la que pertenezca el Ministerio Público o el juez a que se refiere este artículo que conozca del Procedimiento Penal en los que intervenga la persona a proteger, las cuales serán resueltas por el Director del Centro.

ARTÍCULO 22. La petición de otorgar Medidas de Protección deberá contener como elementos mínimos que permitan realizar el Estudio Técnico, los siguientes:

- a) Nombre completo del candidato a protección, su dirección o Jugar de ubicación.
- b) Datos acerca de la investigación o proceso penal en la que interviene.
- c) Papel que detenta en el procedimiento y la importancia que reviste su participación.
- d) Datos que hagan presumir que se encuentra en una situación de riesgo su integridad física o la de personas cercanas a él.
- e) No obstante que la solicitud no contenga toda la información requerida no impide iniciar el Estudio Técnico, pudiéndose recabar los datos necesarios para su elaboración en breve término.
- f) Cualquier otra que el Ministerio Público estime necesaria para justificar la necesidad de su protección.

ARTÍCULO 23. El Director deberá contar con el Estudio Técnico que le permita decidir sobre la procedencia de incorporación o no de una persona al Programa.

ARTÍCULO 24.- Recibida la solicitud de incorporación al Programa, el Director en un tiempo razonable, a fin de determinar su procedencia, tomará en consideración el resultado del Estudio Técnico, el cual deberá de contener por lo menos los siguientes aspectos:

- I. Que exista un nexo entre la intervención de la persona a proteger en el Procedimiento Penal y los factores de riesgo en que se encuentre la persona susceptible de recibir protección. En los casos en que se haya concluido la participación de la Persona Protegida en el procedimiento penal, se realizará un estudio a fin de determinar si subsisten las condiciones de riesgo para determinar su continuidad o su terminación de las medidas de protección.
- II. Que la persona otorgue su consentimiento y proporcione información fidedigna y confiable para la realización del Estudio Técnico, apercibido que la falsedad en su dicho pudiere tener como consecuencia la no incorporación al Programa.
- III. Que la persona a proteger no esté motivado por interés distinto que el de colaborar con la procuración y administración de justicia.
- IV. Que las Medidas de Protección sean las idóneas para garantizar la seguridad de la persona.
- V. Las obligaciones legales que tenga la persona con terceros.
- VI. Los antecedentes penales que tuviere.
- VII. Que la admisión de la persona, no sea un factor que afecte la seguridad del Programa, del Centro o de la Procuraduría.

ARTÍCULO 26. Una vez concluido el Estudio Técnico, el Director adoptará la decisión que corresponda, la cual podría ser reconsiderada a solicitud del Procurador, con independencia de lo previsto en el artículo 20, párrafo segundo de la presente Ley, la que será en el siguiente sentido:

- a) Incorporar a la persona al Programa y establecer las Medidas de Protección que se le aplicarán.
- b) No incorporar al Programa.

Así, se desprende que el Director del Centro Federal de Protección a Personas resolverá aquellas solicitudes de incorporación al "Programa Federal de Protección a Personas", misma que en todo momento deberá realizar el Titular de la Subprocuraduría y/o Fiscalía a la cual

se encuentra adscrito el Ministerio Público de la Federación encargado de la investigación correspondiente, cuya petición deberá contener, entre otros, los siguientes requisitos mínimos:

- Nombre completo del candidato a protección, su dirección o lugar de ubicación.
- Datos acerca de la investigación o proceso penal en la que interviene.
- Datos que hagan presumir que se encuentra en una situación de riesgo su integridad física o la de personas cercanas a él.
- Cualquier otra que el Ministerio Público estime necesaria para justificar la necesidad de su protección.

Ello, a efecto de poder emitir el "Estudio Técnico" respectivo, **del cual el Director del Órgano Desconcentrado en comento, en un tiempo razonable, determinará su procedencia al multicitado "Programa Federal de Protección a Personas"**, así como establecer las medidas de protección que se aplicarán.

Así, se desprende que **el Director de este Centro Federal de Protección a Personas resolverá aquellas solicitudes de incorporación al "Programa Federal de Protección a Personas"**, misma que en todo momento deberá realizar el Titular de la Subprocuraduría y/o Fiscalía a la cual se encuentra adscrito el Ministerio Público de la Federación encargado de la investigación correspondiente.

No obstante y expuesto lo anterior, es menester señalar que normativamente sí existe el Centro Federal de Protección a Personas; sin embargo, éste **se encuentra en proceso de estructuración**, toda vez que de la normativa antes descrita, es posible concluir que el Titular de dicho Centro, para el desahogo de sus funciones, necesita de un grupo de servidores públicos a los cuales les designará facultades a efecto de atender el objetivo de la **Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal, circunstancia que a la fecha de presentación de la solicitud no acontece**, toda vez que las designaciones recaen bajo un procedimiento de selección que garantice la idoneidad del personal, así como su capacitación para el ejercicio del cargo que se le designe, tal y como se desprende de los siguientes preceptos legales:

*ARTÍCULO 8. Para el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley, **se dotará a todo el personal responsable de la operación del Programa de las herramientas y el equipo necesario para un desempeño eficaz.***

Además, se implementarán procedimientos de selección que garanticen la idoneidad del personal, así como su capacitación para el ejercicio del cargo.

*ARTÍCULO 9. El Centro deberá contar con un grupo multidisciplinario de servidores públicos, **integrado por abogados, médicos, psicólogos, trabajadores sociales y demás profesionistas que sean necesarios, así como con elementos de la Policía Federal Ministerial adscritos a la Unidad.***

ARTÍCULO 10. La ejecución de las Medidas de Protección estará a cargo de la Unidad misma que dependerá del Director y se integrará con agentes de la Policía Federal Ministerial, entrenados y capacitados para tal fin.

Una vez expuesto lo anterior, es importante recordar que el particular requiere conocer número de ocasiones que el Centro Federal de Protección a Personas ha dispuesto finalizar el programa de protección a personas para el periodo de 18 de junio de 2016 a 09 de marzo de 2018.

Por lo que, como se le informó al particular en respuesta inicial, **el Centro Federal de Protección a Personas aún se encuentra en proceso de estructuración**, circunstancia que implica señalar que de manera interna se están llevando a cabo diversas actividades entre las que destacan los procedimientos de selección de personal que garantizaran la idoneidad y capacitación para el ejercicio del cargo y, en su caso, analicen las solicitudes de incorporación al "Programa Federal de Protección a Personas" que, en su momento, los Titulares de las Subprocuradurías y/o Fiscalías de la Procuraduría General de la República presenten y, que de acuerdo a su formalidad, éstas puedan ser determinadas como positivas o negativas.

Así las cosas, se insiste que a la fecha de presentación de la solicitud, normativamente se ha regulado las facultades generales de este Centro Federal de Protección a Personas, y no así se ha emitido aquella normativa, tales como lineamientos, protocolos, acuerdos y demás instrumentos necesarios para el debido funcionamiento del "Programa Federal de Protección a Personas", máxime que de acuerdo a las facultades del Titular de dicho Órgano Desconcentrado, es el servidor público que se encuentra realizando las gestiones necesarias para emitir los citados ordenamientos legales a efecto de poner en marcha al "Programa Federal de Protección a Personas" y, por ende, por conducto de los servidores públicos, los cuales se encuentran en proceso de designación, incorporen las solicitudes.

Robustece lo anterior, toda vez que este Centro Federal de Protección a Personas no es la autoridad para elaborar y determinar por propia cuenta la procedencia de una solicitud de incorporación al denominado Programa, siendo que éstas son solicitadas por los Titulares de las Subprocuradurías y/o Fiscalías en donde se encuentre adscrito el Agente del Ministerio Público de la Federación responsable del procedimiento penal, y las cuales, de conformidad con el artículo 3 de la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal, son independientes; tal y como se desprende a continuación:

ARTÍCULO 3. Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, en el ámbito de su competencia, están obligadas a prestar la colaboración que les requiera la Procuraduría General de la República, por conducto del Centro para la aplicación de las Medidas de Protección previstas en esta Ley.

La administración y ejecución de las medidas de protección contempladas en el Programa, son independientes del desarrollo del Procedimiento Penal, el cual sólo servirá para determinar y eliminar los factores de riesgo de la persona sujeta a protección.

En consecuencia, se desprende una imposibilidad material para que el Centro Federal de Protección a Personas se pronuncie respecto de la información solicitada por la particular, toda

vez que, no se advierte que el "Programa Federal de Protección a Personas" se encuentre en funcionamiento, siendo que no aún no se han emitido los lineamientos, protocolos, acuerdos y demás instrumentos para su funcionamiento, ni se ha designado a los servidores públicos que se encargarán de su administración, ni tampoco se dependen elementos suficientes para afirmar o negar que se han recibido solicitudes de incorporación al programa por parte de las áreas sustantivas de la Procuraduría General de la República.

Lo anterior, toda vez que atendiendo la importancia de la materia por la cual fue creado este Centro, es necesario que su propio Titular, de acuerdo a su capacitación y conocimiento de los temas específicos, sea el único servidor público encargado de la elaboración de los lineamientos, protocolos, acuerdos y demás instrumentos para su funcionamiento, máxime que de conformidad con los siguientes preceptos legales cuenta con autonomía, principalmente técnica, operativa y presupuestal; como se desprende a continuación:

*ARTÍCULO 5. La protección de personas se regirá por los siguientes principios:
[...]*

V. Autonomía: El Director gozará de las más amplias facultades para dictar las medidas oportunas que sujeten y garanticen la exacta aplicación de la presente Ley.

...
ARTÍCULO 6. El Centro es un Órgano Desconcentrado y Especializado de la Procuraduría General de la República; con autonomía técnica y operativa en la aplicación de las Medidas de Protección, el cual estará a cargo de un Director, nombrado y removido libremente por el Presidente de la República, a propuesta del Procurador.

ARTÍCULO 7. El Director, para el cumplimiento de la presente Ley contará con las siguientes facultades:

I. Suscribir y emitir los instrumentos jurídicos que faciliten el funcionamiento y operación del Programa, previa consideración del Procurador.

II. Recibir y analizar las solicitudes de incorporación de una persona al Programa, en virtud de encontrarse en situación de riesgo o peligro por su intervención en un Procedimiento Penal. Estas solicitudes deberán ser presentadas por el Titular de la Subprocuraduría o de la unidad administrativa equivalente a las que se encuentre asignado el Ministerio Público responsable del Procedimiento Penal, en donde interviene o ha intervenido la persona a proteger.

...
X. Gestionar ante la Oficialía Mayor de la Procuraduría lo relativo a la obtención de los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros para la correcta aplicación de sus obligaciones, una vez que se haya autorizado el presupuesto para tal efecto.

RESOLUCIÓN PGR/CT/0040/2018: En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, el Comité de Transparencia **confirma** declarar la inexistencia del número de ocasiones que el Centro Federal de Protección a Personas a dispuesto finalizar el programa de protección a personas, toda vez que tal y como ha quedado evidenciado con anterioridad, existe una imposibilidad material, siendo que aún se están realizando las gestiones necesarias para la emisión de los lineamientos, protocolos, acuerdos y demás instrumentos necesarios para el debido funcionamiento del "Programa Federal de Protección a Personas", así como la designación del personal que se encargara de la administración de dicho programa, máxime

La presente resolución forma parte del Acta de la Décima Octava Sesión Ordinaria celebrada el 15 de mayo del 2018 del Comité de Transparencia de la Procuraduría General de la República. Al efecto, se elabora por triplicado, firmando al calce los integrantes del Comité de Transparencia para constancia:

INTEGRANTES



Lcda. Adi Loza Barrera.
Titular de la Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental y
Presidenta del Comité de Transparencia.



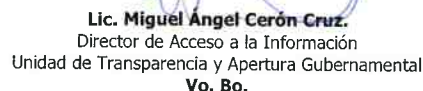
Lic. Luis Grijalva Torrero.
Titular del Órgano Interno de Control



Lcda. Adriana Fabiola Rodríguez León.
Suplente del Director General de Recursos Materiales y
Servicios Generales, responsable del Área Coordinadora
de Archivos de la Dependencia.



Lcda. Gabriela Santillán García.
Secretaría Técnica del Comité de Transparencia
Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental
Elaboró



Lic. Miguel Ángel Cerón Cruz.
Director de Acceso a la Información
Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental
Vo. Bo.

RESOLUCIÓN

F. Análisis a los cumplimientos de las resoluciones del INAI

F.1. Folio 0001700022918 – RRA 1770/18

Descripción clara de la solicitud de información:

"DOCUMENTOS QUE CONSIGNEN EL NÚMERO DE AVERIGUACIONES PREVIAS /CARPETAS DE INVESTIGACIÓN DE NOVIEMBRE 1996 A DICIEMBRE 2017 POR LOS DELITOS DE DELINCUENCIA ORGANIZADA, LAVADO DE DINERO, ROBO DE HIDROCARBUROS, SECUESTRO Y TRAFICO DE ARMAS. DATO POR AÑO.

DOCUMENTOS QUE CONSIGNEN EL NÚMERO DE SENTENCIAS POR DELINCUENCIA ORGANIZADA, LAVADO DE DINERO, ROBO DE HIDROCARBUROS, SECUESTRO Y TRAFICO DE ARMAS DE NOVIEMBRE DE 1996 A DICIEMBRE 2017, ACLARANDO QUE DESDE 2008 SE HABLA DE CARPETAS DE INVESTIGACIÓN VINCULADAS A PROCESO. DATO POR AÑO.

DOCUMENTO QUE CONSIGNE SENTENCIAS ABSOLUTORIAS Y SENTENCIAS CONDENATORIAS POR DELINCUENCIA ORGANIZADA, LAVADO DE DINERO, ROBO DE HIDROCARBUROS, SECUESTRO Y TRAFICO DE ARMAS DESDE NOVIEMBRE 1996 A DICIEMBRE DE 2017. DATO POR AÑO.

DOCUMENTO QUE CONSIGNE EL NÚMERO DE SERVIDORES PÚBLICOS DE CUALQUIERA DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO CONSIGNADOS POR DELINCUENCIA ORGANIZADA, LAVADO DE DINERO, ROBO DE HIDROCARBUROS, SECUESTRO Y TRAFICO DE ARMAS DE NOV. 1996 A DIC. 2017. POR AÑO.

DOCUMENTO QUE CONSIGNE EL NÚMERO DE INTERVENCIONES A LAS COMUNICACIONES PRIVADAS CON AUTORIZACIÓN DE JUEZ DESDE NOVIEMBRE DE 1996 A DICIEMBRE DE 2017. POR AÑO.

DOCUMENTO QUE CONSIGNE EL NÚMERO DE OCASIONES QUE EL JUEZ HA VERIFICADO LOS TÉRMINOS DE LAS AUTORIZACIONES DE INTERVENCIONES DE COMUNICACIONES DE NOVIEMBRE 1996 A DIC. 2017 POR AÑO Y QUE HAYA ORDENADO LA DESTRUCCIÓN DE LOS REGISTROS DE INTERVENCIONES.

DOCUMENTO QUE CONSIGNE AL RESPONSABLE DE LA SUBPROCURADURÍA EN DELINCUENCIA ORGANIZADA, AL TITULAR DE LA UNIDAD DE DELINCUENCIA ORGANIZADA, CON SU CURRÍCULUM, FECHA DE INGRESO-FECHA DE EGRESO DE NOVIEMBRE 1996 A 2017. DOCUMENTO QUE CONSIGNE EL PRESUPUESTO TOTAL DE PGR DE NOVIEMBRE DE 1996 HASTA DIC. 2017 Y DE ESE TOTAL LO QUE CORRESPONDA A LA SUPROCURADURÍA DELITOS CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA.

DOCUMENTO QUE CONSIGNE LA ESTRUCTURA ORGANICA DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y LA SUPROCURADURÍA CONTRA DELINCUENCIA ORGANIZADA. SOLO QUIERO CONOCER EL NUMERO DE SERVIDORES PÚBLICOS QUE OPERAN EN ESA ESTRUCTURA DESDE NOVIEMBRE DE 1996 A DICIEMBRE DE 2017.

DOCUMENTO QUE CONSIGNE LOS CAMBIOS DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y ORGANIZACIÓN ORGANICA DE DICIEMBRE DE 1996 A DIC.2017." (Sic)

Antecedentes:

En respuesta inicial, se le otorgó al particular diversa información que atendería su solicitud; no obstante, el pasado 3 de abril, éste se inconformó ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, interponiendo el recurso de revisión identificado con el número 1770/18, argumentando de forma general que

la información se estaba entregando de forma incompleta y que no se cumplió con el principio de máxima exhaustividad en la búsqueda de la información.

Es por ello que tras el análisis a la solicitud de mérito y a las respuestas otorgadas por esta Representación Social, el pasado 9 de mayo el citado Órgano Garante notificó a la Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental la resolución del recurso de revisión que nos ocupa, a través de la cual determinó lo siguiente:

"Con base en todo lo expuesta en la presente resolución, este Instituto considera procedente MODIFICAR la respuesta del sujeto obligado, y se le INSTRUYE a lo siguiente:

- Realice una nuevamente la búsqueda en la SEIDO de las averiguaciones previas iniciadas, consignadas, y/o de servidores públicos acusados y/o detenidos, por el delito de delincuencia organizada del periodo de 1996, al 2005, y remita a la particular los resultados de la búsqueda realizada.

- Realice una búsqueda de la información de las intervenciones a comunicaciones privadas del año 1996 al 2008, en todas las unidades administrativas competentes, en las que no podrá omitir a la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo; la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales; la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, la Visitaduría General, la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales, la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas y la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, la Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción, así como en todas las Delegaciones estatales; y remita a la particular los resultados de la búsqueda realizada.

- **Someta a consideración de su Comité de Transparencia, la clasificación señalada por la OM, como información reservada el número de servidores públicos con los que cuenta actualmente SEIDO, con fundamento en el artículo 110, fracción I, en relación a la seguridad pública, y fracción V, de la Ley de la materia, precisando las correspondientes pruebas de daños ajustadas en el cuerpo de la presente resolución.**

- Emita a cargo de SEIDO, la clasificación en los términos señalados previamente, para lo cual, el documento que al efecto emita, deberá de estar debidamente firmado por el Titular de dicha unidad administrativa, en términos de lo establecido en el artículo 64 de la Ley de la materia.

- **Realice una búsqueda exhaustiva del número de servidores públicos con los que contaba la hoy denominada SEIDO, del periodo del 1996 al 2016, en todas las unidades administrativas competentes, en las que no podrá omitir a la OM, y a la propia SEIDO; tomando en cuenta los diversos supuestos en los que podría encontrarse la información del periodo de 1996 al 2002 y del 2003 al 2016, en los términos referidos en la presente resolución; y remita a la particular los resultados de la búsqueda realizada.**

En caso de que, derivado de la nueva búsqueda realizada se reitera la inexistencia, se deberá atender al procedimiento establecido en el artículo 141 de la Ley de la materia, por parte de la OM, y por parte de la SEIDO se deberá atender lo señalado en el artículo 64 de la Ley de la materia, para lo cual, el documento que al efecto

*emita, deberá de estar debidamente firmado por el Titular de dicha unidad administrativa.”
(Sic)*

En consecuencia, a efecto de acreditar que se realizaron las gestiones necesarias que le competen al Comité de Transparencia, es que se solicitó a la SEIDO y principalmente a la OM, se pronunciaran respecto de los siguientes puntos:

1. Someta a consideración de su Comité de Transparencia, la **clasificación señalada por la OM**, como información reservada el número de servidores públicos con los que cuenta actualmente SEIDO, con fundamento en el **artículo 110, fracción I, en relación a la seguridad pública, y fracción V**, de la Ley de la materia, precisando las correspondientes pruebas de daños ajustadas en el cuerpo de la presente resolución.
2. Realice una búsqueda exhaustiva del número de servidores públicos con los que contaba la hoy denominada SEIDO, del periodo del 1996 al 2016, en todas las unidades administrativas competentes, en las que no podrá omitir a la OM, y a la propia SEIDO; tomando en cuenta los diversos supuestos en los que podría encontrarse la información del periodo de 1996 al 2002 y del 2003 al 2016, en los términos referidos en la presente resolución; y remita a la particular los resultados de la búsqueda realizada.

En caso de que, derivado de la nueva búsqueda realizada se reitere la inexistencia, se deberá atender al procedimiento establecido en el artículo 141 de la Ley de la materia, **por parte de la OM**.

Es por ello que, la SEIDO y la OM manifestaron que de una búsqueda exhaustiva en sus archivos correspondientes, que para el periodo comprendido del año 1996 al año 2002, fue posible desprender una imposibilidad jurídica y material para concentrar el número de servidores públicos con los que contaba la hoy denominada SEIDO, en razón que tal y como ha quedado evidenciado con anterioridad, no se desprende ningún elemento normativo que permita señalar obligación alguna para concentrar dichos datos estadísticos, ni tampoco elemento de naturaleza distinta que presuma que ésta se encuentre en los archivos correspondiente, en razón que dicha área fue creada mediante en el año 2003 mediante el Acuerdo A/086/97.

Ahora bien, por lo que hace al periodo comprendido del año 2003 al año 2016, la OM precisó, así como la SEIDO, que derivado de una búsqueda exhaustiva y minuciosa en sus archivos, no fue posible localizar el número de servidores públicos con los que contaba la hoy denominada SEIDO, en razón que en los registros estadísticos correspondiente, no se cuenta con dicho dato estadístico histórico, **sino únicamente el número actual**.

Es por ello que, de un análisis a lo expuesto por las la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) y la Oficialía Mayor (OM), este Comité de Transparencia determina lo siguiente:

RESOLUCIÓN PGR/CT/0042/2018: En el marco de lo dispuesto en el artículo 65, fracción II y 169 de la Ley de la materia, el Comité de Transparencia **confirma** la clasificación de reserva respecto al número de servidores públicos adscritos a la SEIDO, para el periodo comprendido del **año 2017**, de conformidad con el artículo 110, fracción I de la LFTAIP.

Por lo que, a fin de reforzar la citada clasificación, se concluye que no es suficiente que la información esté directamente relacionada con causales previstas en el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia, sino que es necesario que los sujetos obligados motiven la clasificación de la información mediante las razones o circunstancias especiales para poder acreditar la prueba de daño correspondiente, misma que en todo momento deberá aplicarse al caso concreto, y la cual deberá demostrar que la divulgación objeto de la reserva represente un riesgo real, demostrable e identificable, así como el riesgo de perjuicio en caso de que dicha información clasificada sea considerada de interés público, además de precisar que la misma se adecua al principio de proporcionalidad en razón que su negativa de acceso no se traduce en un medio restrictivo al derecho de acceso a la información de los particulares.

Por lo anterior, se proporciona la siguiente prueba de daño, que atiene la causal de clasificación prevista en la fracción I del artículo 110 de la LFTAIP:

- I. Que el divulgar información perteneciente al número de personal de esta la SEIDO representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público, en razón que información que dicha información se relaciona directamente con la capacidad de reacción de dicha Subprocuraduría, por lo que su divulgación causaría un grave perjuicio a las actividades de investigación y persecución de los delitos, propias de esta Institución enmarcada de la procuración de justicia eficiente y eficaz, así como de la Seguridad Pública, toda vez que de acuerdo a las características e importancia de las tareas encomendadas a dichos funcionarios, permitiría que integrantes de la delincuencia se alleguen de elementos que permitan obstruir o evadir las técnicas y estrategias de investigación llevadas a cabo en la persecución e investigación de los delitos.
- II. Que el divulgar la información requerida, superaría el interés público, es decir, provocaría un riesgo de perjuicio toda vez que se divulgar la información petitionada se obstaculizaría el combate al crimen organizado, ya que en caso de que la información requerida cayera en manos de los integrantes de la delincuencia, tendrían a su disposición el número de personal de la SEIDO que realizan las investigaciones y persecuciones de los delitos en materia de delincuencia organizada, y por ende, se afectaría las estrategias y capacidades de esta Procuraduría General de la República, utilizadas exclusivamente en contra de los miembros de la delincuencia organizada, y así verse afectada la Seguridad Pública, traduciéndose en un interés particular sobre el interés público a cargo de esta Representación Social Federal.
- III. Que atendiendo al principio de proporcionalidad, se desprende que el reservar información se traduce en la salvaguarda de un interés general, como lo es el resguardo de la Seguridad Pública a través de la investigación y persecución de los delitos cometidos por la delincuencia organizada; de ahí que resulte de mayor relevancia para la sociedad que esta Procuraduría General de la República, por conducto de la SEIDO, vele por la Seguridad Pública y a través del combate al crimen organizado por medio de actividades de inteligencia y contrainteligencia, del que se desprende información

relativa a las técnicas y estrategias de investigación para el combate al crimen organizado.

Ahora bien, considerando que a esta Procuraduría General de la República, por conducto de los servidores públicos adscritos a la SEIDO, le corresponde la investigación y persecución de los delitos federales en contra de la delincuencia organizada, es que se desprende que el entregar el número total de dichos servidores públicos pone en riesgo la vida de éstos, vulnerando además la capacidad de reacción de dicha Subprocuraduría, tal y como ha quedado referido con anterioridad.

Asimismo, como lo indicó el propio Órgano Garante en materia de transparencia, se desprende el que el dato estadístico relativo al número de servidores públicos adscritos a la SEIDO, actualiza también la clasificación de reserva prevista en la fracción V del artículo 110 de la Ley de la materia, por lo que se emite la siguiente prueba de daño:

- I. Que el divulgar el número de personal adscrito a la SEIDO representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público, toda vez que dichos funcionarios al ser los encargados de coordinar el apoyo operativo de las Unidades Especializadas en Investigación de Delitos en Delincuencia Organizada y de otras autoridades policiales nacionales y extranjera, permitiría que grupo de la delincuencia organizada reúna un mismo número o mayor para atentar contra dichos funcionarios, y con ello afectar la capacidad de reacción, así como atentar contra su vida, seguridad o su salud, o bien las de su familia o entorno social.
- II. Que derivado de que la SEIDO tiene como fin la seguridad pública, a través de la investigación y persecución de delitos cometidos por la delincuencia organizada, ello mediante el desahogo de las diligencia correspondiente que los servidores públicos de dicha Subprocuraduría desahoguen; se desprende que el divulgar la información requerida, superaría el interés público, es decir, provocaría un riesgo de perjuicio toda vez que se estarían proporcionando elementos que permitan a la delincuencia organizada atentar contra su vida, su seguridad o su salud, en razón que dichos bienes jurídicos tutelados se encuentran ligados con la protección que se reconocer a la capacidad de reacción con la que cuenta al SEIDO, en razón que dichos funcionarios son los encargados de coordinar el apoyo operativo de las Unidades Especializadas en Investigación de Delitos en Delincuencia Organizada y de otras autoridades policiales nacionales y extranjera.
- III. Que atendiendo al principio de proporcionalidad, se desprende que el reservar información relativa a datos de personal sustantivo de la Institución, no se traduce en un medio restrictivo de acceso a la información, en virtud que dicha reserva prevalece al proteger la vida, la seguridad y la salud, como bien jurídico tutelado, de dichos funcionarios, mismos que garantizan en todo momento una procuración de justicia federal, eficaz y eficiente, apegada a los principios de legalidad, certeza jurídica y respeto a los derechos humanos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y demás Leyes y Tratados Internacionales.

Por lo anterior, se solicita a la Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental, hacer del conocimiento al ahora recurrente, así como del Órgano Garante en materia de Transparencia la presente resolución para los efectos a los que haya lugar. - - - - -

La presente resolución forma parte del Acta de la Décima Octava Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de la Procuraduría General de la República celebrada el 15 de mayo del 2018. Al efecto, se elabora por triplicado, firmando al calce los integrantes del Comité de Transparencia para constancia:

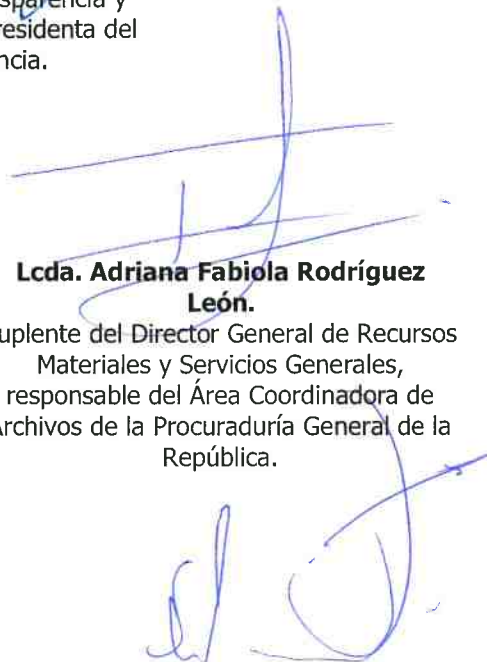
INTEGRANTES



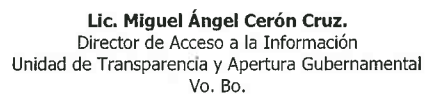
Lcda. Adi Loza Barrera.
Titular de la Unidad de Transparencia y
Apertura Gubernamental y Presidenta del
Comité de Transparencia.



Lic. Luis Grijalva Torrero.
Titular del Órgano Interno de Control



**Lcda. Adriana Fabiola Rodríguez
León.**
Suplente del Director General de Recursos
Materiales y Servicios Generales,
responsable del Área Coordinadora de
Archivos de la Procuraduría General de la
República.



Lic. Miguel Ángel Cerón Cruz.
Director de Acceso a la Información
Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental
Vo. Bo.



Lcda. Gabriela Santillán García.
Secretaría Técnica del Comité de Transparencia
Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental
Elaboró

RESOLUCIÓN

F. Análisis a los cumplimientos de las resoluciones del INAI

F.2. Folio 0001700023018 – RRA 1771/18

Descripción clara de la solicitud de información:

"DOCUMENTO QUE CONSIGNE EL CAMBIO DE LAS DISTINTAS DENOMINACIONES PARA LOS POLICIAS JUDICIALES FEDERALES, ETAPAS Y FECHAS PARA EL CAMBIO DE DENOMINACIÓN HASTA LLEGAR A POLICIA FEDERAL MINISTERIAL.

DOCUMENTO QUE CONSIGNE EL NÚMERO DE POLICIAS JUDICIALES FEDERALES, Y SUS DISTINTAS DENOMINACIONES HASTA LLEGAR A POLICIAS FEDERALES MINISTERIALES DE NOV. 1996 A DIC. 2017 POR AÑO.

DOCUMENTO QUE CONSIGNE EL NÚMERO DE BAJAS, MUERTE EN CUMPLIMIENTO DE SU DEBER, REMOVIDO DE SU ENCARGO POR FALTAS DISCIPLINARIAS DE POLICIAS JUDICIALES FEDERALES, Y SUS DISTINTAS DENOMINACIONES HASTA LLEGAR A POLICIAS FEDERALES MINISTERIALES DE NOV. 1996 A DIC. 2017 POR AÑO.

DOCUMENTO QUE CONSIGNE QUIEN HA ESTADO AL FRENTE DE LA POLICIA JUDICIAL FEDERAL DE NOVIEMBRE DE 1996 HASTA PASAR POR SUS DISTINTAS DENOMINACIONES LLEGANDO A POLICIA FEDERAL MINISTERIAL, INDICANDO NOMBRE Y CURRICULUM VITAE.

DOCUMENTO QUE CONSIGNE EL NUMERO DE AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL DE NOV. 1996 A DIC. 2017 POR AÑO DESGLOSE.

DOCUMENTO QUE CONSIGNE LA BAJA, LA BAJA POR MUERTE EN CUMPLIMIENTO DE SU DEBER, BAJA DISCIPLINARIA O REMOCIÓN DE LOS AMPF DE NOV. 1996 A DIC. 2017 DESGLOSADO POR AÑO." (Sic)

Antecedentes:

En respuesta inicial, se le otorgó al particular diversa información que atendería su solicitud; no obstante, el pasado 4 de abril, éste se inconformó ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, interponiendo el recurso de revisión identificado con el número 1771/18, argumentando de forma general que no se le estaba otorgando diversa información.

Es por ello que tras el análisis a la solicitud de mérito y a las respuestas otorgadas por esta Representación Social, el pasado 9 de mayo el citado Órgano Garante notificó a la Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental la resolución del recurso de revisión que nos ocupa, a través de la cual determinó lo siguiente:

*"QUINTO. Así, por las razones previamente expuestas, este Instituto determina procedente **MODIFICAR** la respuesta de la Procuraduría General de la República a efecto de **instruirle** lo siguiente:*

- Realice una búsqueda exhaustiva en todas sus unidades competentes de entre las que no podrá omitir a la Oficialía Mayor, a la Dirección General de Recursos Humanos y Organización y a la Dirección General del Servicio de Carrera, y entregar a la hoy recurrente el resultado de dicha búsqueda de:*

- ***El número de bajas, por remoción por faltas disciplinarias de Policías Judiciales Federales, y sus distintas denominaciones hasta llegar a Policías Federales Ministeriales, de noviembre de 1996 a 2003, así como de 2012 a 2014, desglosado por año.***
- ***El número de Agentes del Ministerio Público Federal, que causaron baja por baja disciplinaria o remoción de 1996 a 2011, desglosado por año.***
- ***El número de Agentes del Ministerio Público Federal, que causaron baja por muerte en cumplimiento de su deber de 1996 a diciembre 2017, desglosado por año.***
- ***Entregue a la hoy recurrente el número total de elementos que conforman a la Policía Federal Ministerial de noviembre de 1996 a diciembre 2017, desglosado por año.***
- ***Entregue a la hoy recurrente el número de Agentes del Ministerio Público Federal del año 2017." (Sic)***

En consecuencia, a efecto de acreditar que se realizaron las gestiones necesarias para los puntos que le atañen a este Órgano Colegiado, con la finalidad de cumplimentar la instrucción del Órgano Garante en materia de transparencia, las áreas competentes indicaron lo siguiente:

Instrucción	Respuesta
El número de bajas, por remoción por faltas disciplinarias de Policías Judiciales Federales, y sus distintas denominaciones hasta llegar a Policías Federales Ministeriales, de noviembre de 1996 a 2003, así como de 2012 a 2014, desglosado por año.	<p><u>1996 a 2003:</u></p> <p>COPLADII: Señaló que, de una nueva búsqueda dentro del periodo comprendido del año 1996 al año 2003, no fue posible localizar dato alguno relativo al número de servidores públicos (tanto de manera general como por cargo) removidos por bajas disciplinarias, por lo que <u>dicha información torna como inexistente.</u></p> <p>Robustece lo anterior, toda vez que derivado de la antigüedad de dicha información los Órganos Auxiliares del Consejo de Profesionalización, así como por el Órgano Auxiliar de Instrucción, no contaban con los recursos materiales ni humanos para que concentraran un sistema que permitiera desglosar un rubro con dicha información que reuniera las características requeridas.</p> <p><u>2012 a 2014:</u></p> <p>COPLADII y VG: Proporcionaron de manera general aquellos datos estadísticos del número de Policías Federales Ministeriales, considerando sus diversas denominaciones, que fueron</p>

	removidos y se encontraron en expedientes que siguieron sustanciándose hasta su terminación.
<p>El número de Agentes del Ministerio Público Federal, que causaron baja por baja disciplinaria o remoción de 1996 a 2011, desglosado por año.</p>	<p>COPLADII: Manifestó haber encontrado de manera general el número de servidores públicos removidos dentro del periodo compendio del año 2004 en adelante.</p> <p>Así también, manifestó que derivado de una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos correspondientes, no fue posible localizar información respecto del periodo comprendido del año 1996 a 2003 con el desglose petitionado, esto es, el número de Agentes del Ministerio Público Federal, removidos de su cargo por falta disciplinarias.</p> <p>VG: Informó que respecto al periodo comprendido del 30 de mayo del año 2009 al 31 de diciembre del año 2011, no fue posible localizar registro alguno de Agentes del Ministerio Público de la Federación, que fueron removidos por falta disciplinaria, ello atendiendo el criterio 18/13 emitido por ese Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el cual establece:</p> <p><i>Respuesta igual a cero. No es necesario declarar formalmente la inexistencia. En los casos en que se requiere un dato estadístico o numérico, y el resultado de la búsqueda de la información sea cero, éste deberá entenderse como un dato que constituye un elemento numérico que atiende la solicitud, y no como la inexistencia de la información solicitada. Por lo anterior, en términos del artículo [...] de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública [...], el número cero es una respuesta válida cuando se solicita información cuantitativa, en virtud de que se trata de un valor en sí mismo.</i></p>
<p>El número de Agentes del Ministerio Público Federal, que causaron baja por muerte en cumplimiento de su deber de 1996 a diciembre 2017, desglosado por año.</p>	<p>COPLADII: Indicó que derivado de una nueva búsqueda en sus archivos, dentro del periodo comprendido del año 1996 a diciembre al año 2017, fue posible obtener el número de Agentes del Ministerio Público Federal, que causaron baja por defunción, y no así por muerte en cumplimiento de su deber.</p>

La presente resolución forma parte del Acta de la Décima Octava Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de la Procuraduría General de la República celebrada el 15 de mayo del 2018. Al efecto, se elabora por triplicado, firmando al calce los integrantes del Comité de Transparencia para constancia:

INTEGRANTES



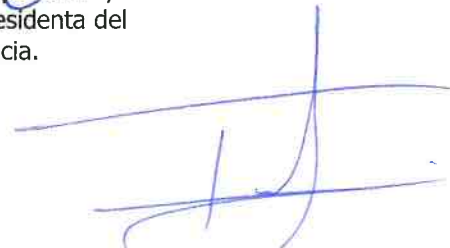
Lcda. Adi Loza Barrera.

Titular de la Unidad de Transparencia y
Apertura Gubernamental y Presidenta del
Comité de Transparencia.



Lic. Luis Grijalva Torrero,

Titular del Órgano Interno de Control



**Lcda. Adriana Fabiola Rodríguez
León.**

Suplente del Director General de Recursos
Materiales y Servicios Generales,
responsable del Área Coordinadora de
Archivos de la Procuraduría General de la
República.



Lic. Miguel Ángel Cerón Cruz.

Director de Acceso a la Información
Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental
Vo. Bo.



Lcda. Gabriela Santillán García.
Secretaría Técnica del Comité de Transparencia
Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental
Elaboró